



UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSGRADO



MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

**“Ineficiente participación de los Jueces de Paz en los
procesos penales por violencia doméstica”**

TESIS

**Presentada para optar el Grado Académico de
Maestra en Derecho con mención en Ciencias Penales**

AUTORA:

Abog. Caveró Ramírez, Gloria Edith

ASESOR:

Dr. Chávarry Correa, Ezequiel Baudelio

LAMBAYEQUE - PERÚ

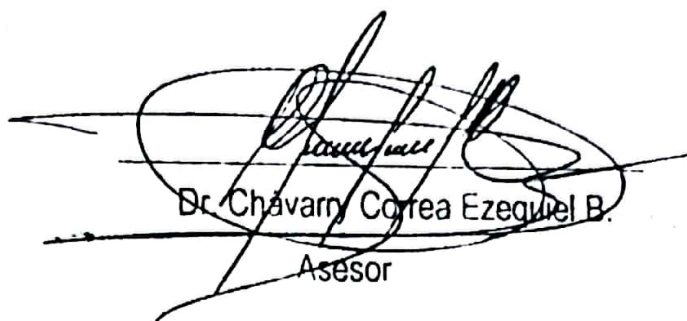
2018

“Ineficiente participación de los Jueces de Paz en los procesos penales por violencia doméstica”



Abog. Cervero Ramirez Gloria Edith

Autora

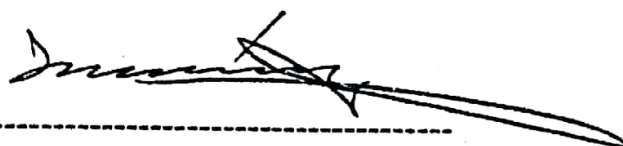


Dr. Chavarri Correa Ezequiel B.

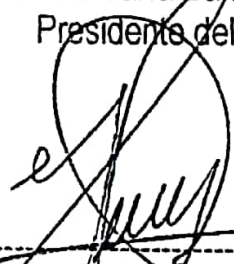
Asesor

Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado Académico de: MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

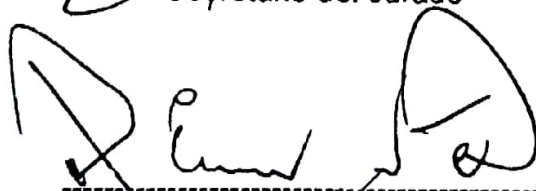
Aprobado por:



Dr. José María Balcázar Zelada
Presidente del Jurado



Mg. Francisco Delgado Paredes
Secretario del Jurado



Mg. Ricardo Ponte Durango
Vocal del Jurado

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

141

Siendo las 8:00 horas del día miércoles 12 de septiembre del año Dos Mil dieciocho, en la Sala de Sustentaciones de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del jurado, designados mediante Resolución N° 353-2017-EPG de fecha 04 de abril 2017, conformado por:

Dr. Francisco Balboa Galindo..... PRESIDENTE (A)

Mg. Francisco S. Delgado Pareda..... SECRETARIO (A)

Mg. Ricardo Pente Durango..... VOCAL

Dr. Ezequiel Brandelino Aguayo Pava..... ASESOR (A)

con la finalidad de evaluar la tesis titulada "Influencia Participativa de los jueces de Paz en la Tránsito Pareda por violencia doméstica"

presentado por el (la) tesista Glens Edith Casero Ramirez
sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 1194-2018-EPG de fecha 30 de mayo 2018

El Presidente del jurado autorizó el inicio del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 75 puntos que equivale al calificativo de Buena

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales

Siendo las 7:30 pm horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

ASESOR

Observación: El apellido materno de la tesista es Ramirez.

Dr. LUIS JAIME COLLANTES SANTISTEBAN
Director Académico



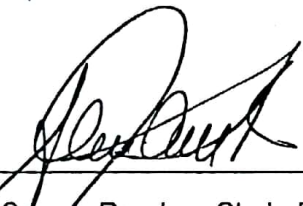
NOTA: La existencia del acta en los libros de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; ha sido verificada por la Sra. Moraima Vera Pozo, quien con su firma da fe de lo mencionado.

Sra. Moraima Vera Pozo
Trabajadora Administrativa

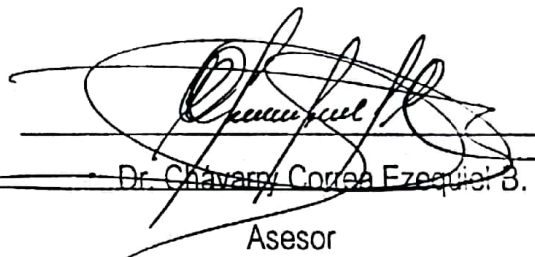
Declaración jurada de originalidad

Yo, Gloria Edith Caveró Ramirez investigadora principal, y Dr. Ezequiel Baudelio Chávayry Correa, asesor del trabajo de investigación "Ineficiente participación de los Jueces de Paz en los procesos penales por violencia doméstica", declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demostrara lo contrario, asumo responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que hubiera lugar, que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe.

Lambayeque, marzo de 2020.



Abog. Caveró Ramirez Gloria Edith
Investigador principal



Dr. Chávayry Correa Ezequiel B.
Asesor

DEDICATORIA

Dedico este proyecto, a mis hijos, Mateo y Gabriela, mi fuente de inspiración; mi motivo para luchar cada día, por una sociedad libre de prejuicios, capaz de rechazar y condenar la violencia en todas sus formas y discriminación en todos sus géneros.

A todos aquellos niños y niñas, víctimas de abuso y maltrato en sus familias, cuyas voces claman por el respeto y protección de sus derechos.

AGRADECIMIENTO

A Dios, por permitirme lograr mis objetivos, por su infinito amor y misericordia.

A mi madre, Margot, por su inquebrantable apoyo, por sus consejos, por el ejemplo de entereza y coraje, que me ha enseñado a ser perseverante en mis metas.

A mi padre, José, por la nobleza y honestidad que lo caracterizan, por los valores inculcados para llegar a ser una mujer de bien.

A ti, por todo lo que significas para mí, por estar a mi lado, por ser mi amigo, mi cómplice incondicional en este arduo caminar...

TABLA DE CONTENIDOS

Dedicatoria

Agradecimiento

Tabla de contenidos

Resumen

Abstrac

Introducción

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1.- Ubicación del problema

1.2.- Como surge el problema

1.3.- Formulación del problema

1.4.- Justificación e importancia del estudio

1.4.1. Justificación Teórica

1.4.2. Justificación Práctica

1.4.3. Justificación social

1.5.- Objetivos

1.5.1.- Objetivo general.

1.5.2.- Objetivos específicos.

1.6.- Hipótesis.

1.7.- Variables.

1.8.- Marco metodológico

1.9.- Método de investigación.

1.8.2. Diseño de contrastación de la hipótesis

1.8.3. Población y muestra

1.10.- Tipo de investigación:

1.11.- Métodos y técnicas de recolección de datos.

1.10.1.- Métodos.

1.10.2.- Técnicas.

1.12.- Procedimiento para recolección de datos.

CAPITULO II: MARCO TEORICO

PARTE I: DEFINICIÓN Y ANALISIS DE LA VIOLENCIA DOMESTICA

- 1.- ¿Qué es violencia, y qué es violencia familiar?
- 2.- Formas de agresión entre miembros de la familia.
 - 2.1.- Violencia física.
 - 2.2.- Violencia psicológica.
 - 2.3.- Violencia sexual.
- 3.- Personas comprendidas como agresor y víctima en la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
 - 3.1.- Cónyuges
 - 3.2.- Ex - cónyuges
 - 3.3.- Convivientes
 - 3.4.- Ex convivientes
 - 3.5.- Ascendientes - descendiente
 - 3.6.- Grado de consanguinidad y segundo de afinidad
 - 3.7.- Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales
 - 3.8.- Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia
- 4.- Causas relevantes de la violencia doméstica.
- 5.- La violencia de género y de miembros del entorno familiar.

PARTE II: LA VIOLENCIA FAMILIAR EN ZONAS RURALES

- 1.- Una mirada a la situación actual de la zona rural
- 2.- La justicia de paz en zonas rurales
 - 2.1.- Barreras Lingüísticas
 - 2.2.- Barreras Económicas
 - 2.3.- Barreras Culturales
 - 2.4.- Barreras de Género
- 3.- La pluriculturalidad, un enfoque de la violencia familiar en las zonas rurales de la región.
- 4.- Capacidad estatal, pluralismo legal y acceso a la justicia
- 5.- Discriminación y exclusión, forma de violencia doméstica en zonas rurales

PARTE III: TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DOMESTICA EN EL EXTRANJERO

- 1.- Importancia internacional de la violencia doméstica
 - 1.1.- Surgimiento de una legislación especial en Latinoamérica.
 - 1.2.-Objetivos de la legislación referida a la violencia familiar
- 2.- Regulación legal de la violencia doméstica en los países latinoamericanos
 - 2.1.- Uruguay
 - 2.2.- En Argentina
 - 2.3.- En Chile
 - 2.4.- En Colombia
 - 2.5.- En Ecuador
 - 2.6.- En Costa Rica
- 3.- La violencia doméstica y su tratamiento en Europa.
 - 3.1.- En España

CAPITULO III: NUEVO PROCESO PENAL DE LA VIOLENCIA DOMESTICA LEY N° 30364

- 1.- Principios de inmediatez y celeridad
- 2.- Procesos de tutela frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
 - 2.1.- Competencia
 - 2.2.- El proceso penal
 - 2.2.1.- Denuncia
 - 2.2.2.- Flagrancia
 - 2.2.3.- Competencia de la policía nacional
 - 2.2.4.- Actuación del juzgado competente
 - 2.2.5.- Actuación del ministerio público
 - 2.3.- Medidas cautelares y de protección
 - 2.3.1.- Medidas cautelares
 - 2.3.2.- Medidas de protección
 - 2.3.3.- Medidas de protección social
 - 2.3.4.- Registro de víctimas con medidas de protección
 - 2.4.- Remisión del expediente

- 2.5.- Actuaciones de los Juzgados de Paz
- 2.6.- Sentencia
- 3.- Resumen de plazos
- 4.- El delito de lesiones leves
 - 4.1.- El artículo 122 del Código Penal y las modificatorias realizadas por Ley N° 30364
 - 4.1.1.- Texto legal del artículo 122° del Código Penal y sus submodalidades antes de la modificatoria realizada por la Ley N° 30364
 - 4.1.2.- Actual texto legal del artículo 122° del Código Penal bajo la modificatoria realizada por la Ley N° 30364

CAPITULO IV: ACTUACIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE NOMINACION EN EL NUEVO PROCESO PENAL (LEY N° 30364)

- 1.- Antecedentes de la justicia de paz en el Perú
- 2.- La Justicia de Paz
 - 2.1.- Características de la Justicia De Paz
 - 2.2.- ¿Cuándo se aplica el derecho consuetudinario?
 - 2.3.- Financiamiento del Juzgado de Paz
 - 2.4.- ¿Cómo funciona la Justicia de Paz en el país?
- 3.- El juez de Paz de Nominación
 - 3.1.- ¿Quiénes pueden presentarse para ser Jueces de Paz?
 - 3.2.- Elección de los Jueces de Paz
 - 3.3.- Zonas donde funcionan los Jueces de Paz
- 4.- Administración de justicia por los Jueces de Paz
- 5.- Las competencias del Juez de Paz
 - 5.1.- ¿Cuáles son los criterios para fijar las competencias de un Juez de Paz?
 - 5.2.- ¿Cuáles son los asuntos de su competencia?
 - 5.2.1.- Asuntos en materia civil.-
 - 5.2.2.- Los asuntos en materia penal.
 - 5.2.3.- ¿Cuáles son las sanciones para las faltas?
- 6.- Competencia de los Juzgados de Paz en asuntos de violencia familiar
 - 6.1. Intervención supletoria del Juzgado de Paz
 - 6.2. Medidas de protección
 - 6.3. Denuncia ante el Juzgado de Paz

6.4.- Intervención de las autoridades judiciales.

7.- La conciliación ante la justicia de paz frente a las denuncias de violencia familiar.

CAPITULO V: HALLAZGOS, RESULTADOS Y DISCUSION

1.- Análisis e interpretación de datos.

1.1.- Ministerio Público – Fiscalía Mixta Provincial del Distrito de Cayaltí.

Primer Hallazgo: Denuncias recibidas del juzgado de familia de Chiclayo con medidas de protección (2016-2017)

1.2.- Entrevista a Jueces de Paz de los distritos judiciales de Cayaltí y Túcume.

Primer Hallazgo: Capacitación sobre la ley N° 30364 y su reglamento:

Segundo Hallazgo: Mínima intervención en recepción directa de denuncias por violencia familiar.

Tercer Hallazgo: Falta de preparación de la Policía Nacional, para derivar las denuncias por violencia familiar.

Cuarto Hallazgo: Los Juzgados de Paz no dictan medidas medidas de protección a víctimas de violencia familiar

Quinto Hallazgo: Los Juzgados de Paz no se avocan a conocer los procesos por faltas en violencia familiar

1.3.- Encuesta aplicada a operadores del derecho, respecto a la competencia otorgada a los Jueces de Paz.

Primer Hallazgo: Las lesiones leves de violencia familiar no deben tramitarse como faltas.

Segundo Hallazgo: Existe conocimiento sobre la competencia en zonas rurales, para conocer denuncias por violencia familiar.

Tercer Hallazgo: Los jueces de Paz, no deben conocer procesos de violencia familiar.

Cuarto Hallazgo: Falta de aceptación de la ley N° 30364.

CAPITULO VI: PROPUESTA TEORICA

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES FISCALES Y POLICIALES EN ZONAS RURALES PARA CONOCER DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR.

1.- Exclusión de los Jueces de Paz para conocer denuncias por violencia domestica

1.1.- Fortalecimiento e implementación de fiscalías para zonas rurales.

1.2.- Modificatoria del Capítulo VI del Decreto Legislativo N° 009-2016-MIMP.

Conclusiones

Recomendaciones

Referencias Bibliográficas

RESUMEN

La violencia familiar y sexual en nuestro país se muestra como un problema de graves consecuencias no sólo en la salud de las personas que lo sufren, sino en el desarrollo de las comunidades y del país en general.

Aunado a esta situación, encontramos que este problema es aún tolerado, callado y desestimada su resolución legal en las familias; igualmente las instituciones encargadas en la atención de esta problemática están desarticuladas, así como, ausentes en los lugares más alejados y vulnerables del país, como son las zonas rurales.

Nuestro Estado tiene una presencia débil y falta de propuestas de atención en dichas localidades, operando allí el derecho consuetudinario o costumbre en la resolución de los conflictos, entre ellos el de la violencia familiar y sexual; esto en base al art. 149 de la constitución, que reconoce los derechos de las comunidades rurales y a la validez de su derecho consuetudinario. Más aún, si la Ley N° 30364, olvidó mencionar el carácter especial de atención que merecen las zonas rurales; es por ello, que muchas veces en las zonas rurales, los ajusticiamientos, violencia y conciliaciones, los cuales van en contra de los derechos humanos y la práctica del derecho oficial, vulneran silenciosamente el derecho de las víctimas.

Palabras claves: violencia familiar, medidas de protección, justicia de paz, fiscalías de zonas rurales.

ABSTRAC

In our country, family and sexual violence is a problem with serious consequences not only in the people's health who suffer it, but in the development of the communities and the country in general, too.

Added to this situation we find that this problem is still tolerated, silenced and dismissed its legal resolution in families. Also, the institutions devoted to dealing with this problem are disjointed, as well as absent in the most remote and vulnerable places in the country, such as rural areas.

Our State has a weak presence in those localities, where operating the customary law, in the resolution of conflicts, among them that of family and sexual violence; this based on article 149 of the Constitution of Peru, that recognizes the rural communities' rights of and the validity of their customary law. Even more so, if Law No. 30364, he forgot to mention the special care that rural areas deserve; that is why, that many often in those rural areas is frequently the executions, violence and agreements between aggressors and victims, that go against human rights, the practice of official law, and silently violate the victims' rights.

Keywords: family violence, protection measures, justice of the peace, prosecutors in rural areas.

INTRODUCCION

Ya no es válido expresar que, la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es «un asunto» que concierne a la vida privada de las personas, ahora es una problemática de salud pública. Eso a partir de la presencia del Estado en su abordaje. El Estado peruano ha ratificado tratados y convenciones para prescindir la violencia contra las mujeres y garantizar sus derechos. Se ha creado una institucionalidad y normatividad orientada a ello. El problema es que, a pesar de que el Estado maneja parámetros y algunas otras medidas, la violencia doméstica sigue siendo un desafío social que abarca numerosos efectos para aquellas personas que están involucradas y para la colectividad misma.

En el Perú, el 71.5% de mujeres, en algún momento de su existencia, ha pasado por alguna situación de violencia (pudiendo ser esta de cualquier tipología, física, psicológica y/o sexual) y que fue realizada por su acompañante o pareja (INEI 2013). Dicha intimidación se ejerce indistintamente en los sectores urbanos y rústicos; pero, las políticas y programas estatales se implementan fundamentalmente en los lugares de tipo urbanos. La nueva Ley N° 30364, enfoca su atención en la violencia doméstica en dichos sectores, y olvida mencionar a aquellos de tipo rurales, donde se ha demostrado que existe un alto índice de casos NO denunciados, silenciados por influencia del machismo, costumbres y pluriculturalidad; triste realidad que se evidencia en la acción del Estado, en delegar facultades de actuación a los Jueces de Paz, quienes no reciben una atención y presupuesto exclusivo del Estado para actuar como tales, y demás está decir que muchas de estas autoridades son personas sin ninguna formación profesional en derecho, para realizar una correcta aplicación de la norma, frente a un conflicto de violencia doméstica. Se desconoce la dinámica real que el Estado hace para su implementación en las zonas rurales. Las historias de las familias que viven en zonas rurales y deciden denunciar la violencia es *ancha y ajena*. Se hace uso la metáfora para dar cuenta de las acciones que ellas emprenden para acceder a justicia. En base a esto, planteo ¿cuáles son los discursos, espacios y acciones que las instancias del Estado realizan para atender la violencia contra las mujeres en las zonas rurales? ¿Es correcto que el Estado, haya delegado facultades a los Jueces de Paz para tener competencia en materia de violencia doméstica, en las zonas rurales?

Se debe precisar que no se analiza cuáles son los factores y desenlaces de la violencia, ni tampoco sus dinámicas dentro de las familias rurales. La investigación se centra en analizar el funcionamiento del Estado para atender la violencia doméstica en zonas rurales. Para ello se usó la metodología cualitativa. Fundamentalmente, el trabajo de investigación está

centrado en hacer etnografía política, entrevistas y análisis de documentos. El estudio se situó en la competencia de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Cayaltí, cuya jurisdicción abarca los distritos de Cayaltí, Zaña, Lagunas, Nueva Arica y Oyotún con sus respectivos centros poblados. Se eligió esta zona porque la investigadora trabaja en la fiscalía de este lugar, y observa como los Jueces de Paz, no otorgan a las afectadas las medidas de protección, o simplemente no reciben las denuncias y las derivan a la Policía Nacional. Durante la investigación, se realizaron encuestas a operadores del derecho, entrevistas a los Jueces de Paz, revisión del número de carpetas ingresadas al Despacho Fiscal de Cayaltí y derivadas a los Jueces de Paz, para conocer qué actuaciones vienen realizando, de acuerdo a la Ley N° 30364. Pudiéndose observar diversas dinámicas en varias instituciones del Estado.

El Estado retoma la importancia como principal agencia productora de leyes, de estabilidad e integración política en la sociedad, a través del institucionalismo político que plantea un rol autónomo de las instituciones, pero no niega el rol de las personas y la importancia del contexto normativo y sociocultural de los individuos. Las instituciones, establecen las reglas de juego de una sociedad que, estructuran incentivos en el intercambio y son marcos de referencia cultural que determinan el comportamiento de los individuos. Hay instituciones formales e informales. Las formales son reglas escritas en leyes y son construcciones creadas para encarar problemas específicos que requieren de un poder coercitivo para cumplirse, como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Las informales son reglas no escritas que se van acumulando en el tiempo y quedan registradas en los usos y costumbres, son autocumplidas porque no requiere de una fuerza exógena, como los jueces de paz y las rondas campesinas. El neoinstitucionalismo fue el marco analítico para analizar la complejidad del funcionamiento de las instituciones del Estado que atienden casos de violencia doméstica en las zonas rurales.

Esta investigación está organizada en cinco capítulos. En el primer y segundo capítulo, situó la investigación haciendo un análisis de las principales definiciones y causas que engloban a la violencia familiar, así como los enfoques que la definen, los factores y causas de la violencia intrafamiliar; igualmente se trata de identificar las personas que se convierten en agresores y el vínculo que los une con la víctima. En el mismo capítulo, se ha expuesto un panorama del ambiente del abuso doméstico que existe en aquellos lugares de tipo rural, indicando cuales son las barreras que se presentan y como vienen desarrollándose la justicia de paz y aquella de tipo comunal frente a la violencia doméstica. Finalmente, en

ese capítulo se ha realizado un breve análisis en los países latinoamericanos, sin haber encontrado una legislación especial para las zonas rurales o indígenas en caso de las denuncias de violencia dentro del espacio de la familia.

En el tercer capítulo, se ha analizado el proceso especial de la Ley N° 30364, partiendo del principio de celeridad e inmediatez, fundamentos base de este dispositivo legal; luego se hace un análisis de las competencias y actuaciones que corresponde a los órganos intervinientes. El cuarto capítulo, se ha enfocado en el estudio de la Justicia de Paz y sus funcionarios, los Jueces de Paz, es necesario conocer quienes acceden a este cargo, cuáles son sus atribuciones y competencias, en que materias pueden intervenir y que actuaciones pueden desarrollar como autoridad judicial; y finalmente, vemos como el derecho consuetudinario y la justicia comunal influyen en la solución de conflictos a nivel de un Juzgado de Paz.

En el quinto capítulo, la investigadora se puso en contacto con la realidad del problema, dirigiéndose a los Jueces de Paz de los distritos de Cayaltí y Túcume, quienes se mostraron muy renuentes a brindar información, más aún en precisar si se encontraban cumpliendo con las actuaciones que les son facultadas en el capítulo VI del Reglamento (Decreto Legislativo N° 009-2016-MIMP), siendo diversas las explicaciones, para que en ambos distritos se llegara a la conclusión que no estaban otorgando la importancia y el trámite adecuado, dejando entrever, la costumbre y las creencias de que la violencia doméstica son actuaciones íntimas, no se ventilan en el pueblo; o peor aún, algunos indicaban que ahora es asunto de los juzgados penales y no de los jueces de paz. Esta información, nos ha permitido contrastar nuestra hipótesis, la cual resulta ser verdadera, pues hemos demostrado que la violencia doméstica no debe ser de competencia de los jueces de paz.

Finalmente, hemos incorporado un sexto capítulo, en el que la investigadora se ha permitido realizar una propuesta al reglamento de la Ley N° 30364, en su capítulo VI, orientado a otorgarle mayor responsabilidad a las Fiscalías Mixtas a implementarse exclusivamente en zonas rurales, con la intención de que sea un órgano fiscal, previa evaluación de los hechos de una violencia doméstica, quien otorgue medidas de protección justas y adecuadas; haciendo ejercicio de su facultad coercitiva con los demás órganos intervinientes para la ejecución tanto de las medidas preventivas como de las sentencias sancionadoras.

CAPITULO I

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA

El 23/11/2015, el gobierno publicó en el diario Oficial el Peruano la Ley N° 30364, la cual tiene por objeto “prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos”.

La ley N° 30364, si bien se presenta, como un esfuerzo del Estado para hacer frente a la violencia doméstica, también evidencia una pobre propuesta para hacer frente a este problema, en las zonas rurales y alejadas del país, donde no existen juzgados especializados de familia, encargado de recibir las denuncias, así como de conferir las medidas de protección necesarias y urgentes a favor de las afectadas. Debemos señalar que la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, derogada con la Ley 30364, otorgaba competencia a las fiscalías Mixtas para la expedición de las medidas de protección, situación que pudo haber sido contemplada en la nueva ley, en la medida en que en nuestro país, encontramos a dichas dependencias fiscales, en lugares un poco más cercanos a las zonas rurales, y en mayor número, a diferencias de los juzgados especializados. Actualmente, esta función en las zonas rurales donde no exista un juzgado de Paz Letrado con competencia delegada, debe ser cumplida por los Jueces de Paz, quienes están facultados para recibir dichas denuncias y otorgar inmediatamente las medidas de protección, sin embargo, en su mayoría estos juzgados desconocen sus competencias para abordar la violencia en el ámbito familiar.

La implementación de la Ley 303064 ha derivado otro conjunto de dificultades y obstáculos que necesitan ser abordadas, y es que en la misma norma dentro de las Disposiciones Complementarias, modificó el artículo 122 del Código Penal, en la que no sólo se refiere a la lesión física (que tiene un parámetro de aplicación que va de los 10 a 30 días de descanso o atención facultativa), sino al daño psíquico moderado, que puede ser ocasionado por cualquier persona, en agravio de cualquier otra, no importando el grado de parentesco, vinculación o condición que tenga el agraviado. La ley en mención, habla del daño psíquico moderado, sin embargo no estableció parámetros para determinar el daño psíquico. (Rosas Ramos, 2016). Incluso, en el Instituto de medicina legal del país, encargado de realizar las pericias psicológicas, carecían de guías para medir el daño psíquico con la entrada en vigencia de la Ley 30364, por lo que las denuncias terminaban siendo archivadas en las fiscalías penales y remitidas a los Juzgados de Paz, donde por insuficiencia de fondos para continuar de oficio con dichas investigaciones, terminaban también archivándose, desprotegiéndose totalmente a las víctimas.

1.2. COMO SURGE EL PROBLEMA

Mujeres e integrantes del grupo familiar son víctimas de violencia física y psicológica, que en situaciones críticas pueden llevar a la muerte o causar daños físicos severos, visibles o invisibles al ojo de la comunidad. Este peligroso fenómeno que bastante preocupación ha despertado en los últimos meses en el seno de la sociedad y del Estado, convocando a decenas de miles de personas protestando en plazas y calles de las capitales del país, es menos conocido y discutido cuando tiene como epicentro el espacio rural. ¿Cuántas mujeres y niñas son víctimas de hechos de violencia en el área rural?, ¿ante quién acuden para hacer sus denuncias?, ¿qué apoyo reciben del Estado y de la sociedad? Nos hemos conmovido con los casos más mediáticos difundidos por la prensa local, pero a esa misma hora, a metros o kilómetros de nuestro hogar, una o más víctimas campesinas e indígenas eran víctimas anónimas del mismo problema.

Según las últimas estadísticas del INEI, el 2014, un 32.3% de peruanas fue víctima de violencia física por parte del esposo o compañero. Las cifras de la violencia psicológica o verbal eran superiores, llegando al 69.4% de peruanas (INEI, 2016). Examinando estos dos promedios nacionales por área de residencia de las víctimas, a primera vista, no se aprecian mayores desbalances entre la cantidad de mujeres víctimas de violencia en el área urbana y rural del país. Sin embargo, cuando examinamos las mismas cifras según departamento y su porcentaje de población rural, el resultado es más complejo: la mayoría de departamentos con mayor proporción de habitantes rurales en relación al promedio nacional (23.29%) son los que registran la mayor cantidad de cuestiones donde exista violencia contra la mujer y de feminicidios en el país.

Veamos, a continuación, de acuerdo con la tabla 1, los departamentos de Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco, que ocupan uno de los 10 primeros puestos en cantidad de población rural, son a la vez los que registran los más altos porcentajes de mujeres víctimas de violencia física, emocional o de feminicidios. En la orilla opuesta, Arequipa es un departamento predominantemente urbano, pero con altos porcentajes de agresiones contra la mujer. Esto último nos sugiere que la violencia no es exclusiva de la zona rural, pero, a la vez, nos confirma que es necesario incidir en las zonas rurales del país (INEI, 2016).

Tabla 1

Diez departamentos con mayor cantidad de población rural, según cifras de violencia contra la mujer

PERÚ	Población rural (%)	Violencia física (%)	Violencia verbal (%)	Nº feminicidios (1)
	23.29	32.30	69.40	91
DEPARTAMENTO				
AMAZONAS	54.78	33.14	68.52	
ÁNCASH	38.91	33.02	68.18	2
APURÍMAC	59.84	46.72	78.69	
AREQUIPA (2)	9.97	39.62	74.65	10
AYACUCHO	45.60	42.32	64.29	4
CAJAMARCA	65.23	28.99	62.22	1
CUSCO	44.46	41.39	64.72	6
HUANCAVELICA	76.65	38.30	79.16	
HUÁNUCO	61.41	28.61	71.97	4
PASCO	35.20	31.53	71.46	1
PUNO	45.60	38.85	70.57	7

(1) Casos determinados.

(2) Consideramos Arequipa con el fin de cotejar sus cifras.

Fuente: INEI, 2015, a partir de los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar y del Observatorio de la Criminalidad. Elaboración propia.

¿Ante quién recurren estas decenas de miles de mujeres rurales o sus familiares para denunciar que han sido víctimas de agresiones en el entorno del hogar? Según la Ley N° 30364 de noviembre de 2015, quienes deben recibir y tomar conocimiento de aquellas denuncias donde se han realizado episodios de violencia en contra de una mujer vienen a ser los Juzgados de Familia o como indica la norma, “los que cumplan sus funciones”. Pues bien, las zonas rurales con mayor índice de casos de violencia doméstica son: Huancavelica, posee un juzgado de familia permanente; Huánuco tiene 4 juzgados de familia permanentes; Apurímac, Cusco y Puno también cuentan con 4 juzgados; y en Ayacucho existen 2. Si les agregamos a estos juzgados especializados, los mixtos y los de paz letrados, que podrían cumplir las mismas funciones, el número total bordea los 200 órganos jurisdiccionales para

estos 6 departamentos. En el departamento de Lambayeque, contamos con 6 juzgados de familia, 8 juzgados mixtos en los distritos de Lambayeque, Ferreñafe y José Leonardo Ortiz; 20 juzgados de Paz Letrados y 314 Juzgados de Paz, que funcionan en zonas rurales y que suplirán a estos órganos jurisdiccionales (ONAJUP, 2014). A este reducido número de juzgados especializados, se le suma que la mayoría de ellos se establecen en capitales de distritos, de provincias o en grandes centros poblados, es decir, por lo general, se ubican en zonas urbanas o periurbanas, distantes a decenas de kilómetros o varias horas de los asentamientos rurales del país. El Poder Judicial ha anunciado la creación de más juzgados de familia, pero a pesar de este importante esfuerzo, la oferta estaría muy lejos de satisfacer la demanda de servicios judiciales.

El problema es que la Ley N° 30364, olvidó involucrar activamente, a los Juzgados de Paz (incorrectamente denominados juzgados de paz no letrados), a pesar de que durante décadas los Jueces de Paz son los únicos que resuelven conflictos en la zona rural a nombre del Estado; a bajo costo (a veces sin ningún costo); con altos índices de legitimidad; y en el idioma materno de los usuarios. Esta omisión ha intentado remediarse a través de la emisión del Reglamento de la Ley N° 30364, el cual considera la participación “supletoria” del Juez de Paz, pero el punto es que para buena parte del Estado los grandes problemas del país, como el fenómeno o dificultad de la violencia contra la mujer, continúan ocurriendo primero en la ciudad y solo a través del reclamo o de la cabida de lobby de instituciones de la colectividad civil se “logra” que se consideren los problemas del campo.

Mientras nos tomamos un tiempo para investigar más casos de comuneras, nativas, agricultoras, indígenas, etcétera, víctimas de violencia física y verbal, estas mujeres necesitan una vía óptima y urgente para la atención de sus denuncias y demandas. Sabemos que la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial (ONAJUP) tiene registrados 4962 juzgados de paz (ONAJUP, 2014) con competencias para conocer las casuísticas de violencia contra la mujer que ocurren en su localidad. Es decir, que por cada juzgado de familia, mixto y de paz letrado, existen 25 juzgados de paz que podrían satisfacer la demanda de justicia de aquellas personas que han sido víctimas tanto de violencia física, como verbal. La pregunta es, *¿cuántos juzgados de paz trabajan en la zona rural?, ¿en qué*

condiciones brindan sus servicios?, ¿han sido capacitados los jueces de paz?, ¿qué clase de apoyo reciben de medicina legal o de la Policía para cumplir su labor?, ¿cuánto presupuesto le destinará el Estado a los juzgados de paz para que contribuyan a suprimir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en lugares de situación rural?

Tomemos de ejemplo la situación de Apurímac, el departamento que ocupa el primer y el segundo lugar, respectivamente, en número de casuísticas registrados de violencia física y verbal a nivel de todo el país. Según la ONAJUP, en Apurímac existen 270 juzgados de paz, de los cuales 265 tienen competencia en casos de violencia contra la mujer, casi todos ubicados en los centros poblados rurales del departamento. Sin embargo, este considerable número de juzgados de paz, ofrecen sus servicios sin una remuneración a favor de los jueces de paz; sin un reembolso a los jueces de paz que se desplazan fuera del despacho para hacer inspecciones o verificaciones; con una mínima dotación de útiles de escritorio (papeles, archivadores, máquinas de escribir, etcétera); y en locales o habitaciones del propio juez de paz o de la comunidad. A estas dificultades se suma, que recién en octubre de 2017 se realicen talleres de capacitación sobre violencia contra la mujer dirigido a jueces de paz de los distritos donde existe mayor ocurrencia de violencia (Escobedo Sánchez , 2016). Recordemos que estos jueces no son legos en derecho, no son abogados como los jueces de familia o los jueces de paz letrados, es decir, desconocen los procedimientos y los términos jurídicos incluidos en la Ley N° 30364 y su reglamento. Por último, los juzgados de paz no suelen recibir el apoyo de la Policía Nacional, no tienen a su alcance los servicios de la medicina legal (médicos legistas), estas dos últimas piezas importantes para que se avale la integridad de las mujeres afectas de violencia. En general, son una pieza importante del Poder Judicial que ha sido subestimada, por esa razón, hace varios años no dispone de una partida presupuestal que facilite o fortalezca su servicio y no hay aviso que la situación cambie el 2018.

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DE ZONAS RURALES, SE ENCUENTRAN DESPROTEGIDAS POR FALTA DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DE LOS JUECES DE PAZ DE NOMINACIÓN, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL D.S. N° 009-2016-MIMP?

1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

1.4.1. Justificación Teórica

En cuanto a la justificación de la tesis, se plantean cuestiones fundamentales como: ¿Cuál es la finalidad de la investigación?, ¿Por qué es relevante llevar a cabo esta investigación? Sostenemos que existe una justificación para emprender un proceso que implica dedicación, tiempo, compromiso y oblación. Es importante destacar que todo investigador debe demostrar cómo su trabajo puede beneficiar a la comunidad científica y a la sociedad en general, lo que lo motiva a realizar su investigación. La investigación en cuestión tenía objetivos teóricos, así como también se basó en motivaciones legales, metodológicas y prácticas. Además, es crucial tener en cuenta que una tesis que es aceptada encuentra su lugar en una institución y es bien recibida en nuestro país.

Dado que el estudio realizado ha contribuido al conocimiento de un campo de estudio, tiene justificación teórica, de alguna manera se espera la contribución de la tesis al desarrollo de algunos aspectos de la ciencia mediante la justificación del tema, como verificar la situación de hechos, fenómenos u objetos que no han sido puntualizados previamente o su descripción es restringida, parcial o incorrecta, como en la violencia doméstica remitidos a los juzgados de paz de nominación en el distrito de Cayaltí.

De hecho existen infinidad de datos, que se presentan ante nuestra observación de diferentes formas, es aceptable que la tesis pueda darse a pesar de los conocimientos específicos acerca de la dificultad de tratar la violencia doméstica en un ámbito rural. Estos simples datos del estudio serán presentados con evidencia estadística y complementados con aportes de algunas publicaciones.

1.4.2. Justificación Práctica

Existen diversas razones para justificar la realización de un estudio. Desde una perspectiva cognitiva, se espera obtener un conocimiento objetivo acerca de la problemática. Adicionalmente, es importante destacar la relevancia social de esta investigación, ya que los resultados obtenidos pueden contribuir a la reducción de problemas sociales que afectan a gran cantidad de ciudadanos peruanos. Esta problemática es una preocupación común también para muchos profesionales del ámbito social, como trabajadores, abogados, sociólogos, galenos y psicólogos.

Empero, este trabajo tiene una justificación práctica a destacar: el estudio realizado es apto para diversos profesionales del ámbito social, especialmente dedicados al derecho, porque además de su precisión, proporciona una investigación sustentada en los resultados estadísticos obtenidos. La información obtenida en esta área es útil y reduce la incidencia de la investigación, no tiene sentido emprender acciones para solucionar el problema de la violencia intrafamiliar con este tipo de aportes.

1.4.3. Justificación social

El Instituto de Defensa Legal, explica la forma en que los Juzgados de paz toman con indiferencia y muchas veces, minimizan a la mujer, este pensamiento incluso forma parte de algunos operadores jurídicos, esto conlleva a que los casos sean tomados como problemas de la vida íntima, que debe ser resuelta en ese ámbito, o muchas veces con un acuerdo conciliatorio donde la víctima se ve sometida a aceptar los términos de su agresor.

Si bien la ley 30364 ha establecido competencias a los juzgados especializados en familia, para el caso de la violencia en ámbito familiar, en el caso de las zonas rurales del país, donde se encuentra arraigada la violencia contra la mujer, no ha previsto la problemática que afrontan los juzgados de Paz y su falta de capacidad para abordar este tema.

Aquello que los legisladores ocasionan es propinar una situación de indefensión, ello quiere decir que, si la víctima se encuentra en una zona rural

no tendrá la posibilidad de acudir a una instancia que le brinde alguna solución a su demanda, ya sea por razones de tipo geográficas, o la más común, por razones económicas, porque no tiene como acudir, porque manejan un idioma distinto o porque, en razón a su cultura, no logran comprenderlos. En general, esto no contribuye a una solución, por el contrario, se crea una camino complejo para que puedan obtener justicia, específicamente a aquellas personas de lugares aislados, lo que a su vez genera situaciones muchas veces de impunidad para aquellos agresores.

Así pues, la indecisión está en la efectividad de la Ley N° 30364, dado que las cifras de casos sobre violencia familiar no se han aminorado, asimismo, no existe algún punto de vista de género que indique que la desigualdad para estos casos ha sido mitigada o aminorada, tampoco indican las cifras que el pensamiento sobre relaciones familiares se encuentra basado en la equidad; en conclusión, podría inferirse que las cosas siguen tal cual, incluso posterior a la dación o modificaciones de la norma indicada.

1.5. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

- Determinar la necesidad de excluir la participación de los Juzgados de Paz de Nominación, en procesos penales de Violencia Familiar establecidos en el reglamento de la Ley N° 30364, debido a la inoperancia de los juzgados de paz

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Analizarla doctrina y regulación legal especial contra la violencia familiar hasta la actualidad, en nuestro país y frente al derecho comparado, para conocer su evolución conceptual y jurídica.

- Determinar si en las etapas del actual proceso penal sobre violencia familiar, según ley N° 30364 y su reglamento (capítulo VI), los plazos establecidos, obedecen al principio de celeridad e inmediatez procesal.
- Conocer las actuaciones judiciales que realizan los Juzgados de Paz de Nominación, en los casos de violencia familiar, durante el año 2016; determinando si han tenido disposiciones eficaces conforme se establece en el capítulo VI de la ley N° 30364.
- Determinar que órganos jurisdiccionales, deberían tener competencia para conocer procesos sobre violencia familiar, y que actuaciones inmediatas deben realizar para intervenir; principalmente en zonas rurales.
- Establecer si existe necesidad de reformar, suprimir y/o implementar las funciones que se otorga a los Jueces de Paz de Nominación en el capítulo VI del reglamento de la Ley N° 30364, frente a los procesos de violencia familiar.

1.6. HIPOTESIS:

Por la naturaleza de la investigación, y frente a la intención de la investigadora de contribuir con una solución, frente al problema observado, propondremos una hipótesis contingente, en el cual una variable dependiente dependerá de una variable independiente, solo cuando se cumpla con cierta condición, para conseguir el fin propuesto.

“**Si**, la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicarla violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar – y su Reglamento aprobado Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, otorgara competencia sólo a los Juzgados Especializados en Familia, Fiscalías Penales o Mixtas y Juzgados Penales para conocer los procesos de violencia familiar, con la exclusión de los juzgados de paz de nominación; **entonces**, evitaríamos la falta de administración de justicia y el abandono en los procesos de violencia familiar que son derivados a los Juzgados de Paz de Nominación conforme lo establece el capítulo VI del reglamento, pues no están capacitados para dictar medidas de protección o llevar a cabo un proceso

previsto en su ley de la materia, con persecución de oficio, salvando la actual indefensión de la víctima e impunidad del agresor”.

1.7. VARIABLES:

- **VARIABLE INDEPENDIENTE:** La Ley N° 30364, conocida como la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP y su implementación.
- **VARIABLE DEPENDIENTE:** Conferir competencia exclusiva a los Juzgados Especializados en Familia y Juzgados Penales para conocer los casos de violencia familiar, evitando que los jueces de paz tengan jurisdicción en estos casos, tal como se establece en el capítulo VI del reglamento.
- **INDICADOR CUALITATIVO:** Los jueces de paz de nominación no cuentan con capacitación que les permita dictar medidas de protección o llevar un proceso de su materia, con persecución de oficio

1.8. MARCO METODOLOGICO

1.8.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

La ciencia nos brinda una serie de métodos que podemos utilizar para conocer un poco más de la realidad. La razón de esto es que tanto la naturaleza como la sociedad son conjuntos que poseen características similares como ser diversas y a la vez, ser complejas, consecuentemente, los fenómenos requieren una metodología adecuada para el estudio que se va realizar. Así pues, basando esto a un estudio jurídico, el cual se encuentra relacionado con temas de gran coyuntura como la violencia dentro de la familia y la normativa que los regula, los métodos a utilizarse serán los de tipo general, ósea aquellos que dan origen a la investigación científica, siendo así los denominados

Lógico-Formales, tales como **Análisis**, la **Síntesis**, el **Inductivo** y el **Deductivo**. Posteriormente, luego se deberá procesar y analizar la data que se ha obtenido sobre los casos de estudio en las instituciones mencionadas como el MIMDES, Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, entre otros. Asimismo, se tendrá en cuenta el Método Dialéctico, por tomar la realidad de la alarmante situación en que se encuentra la violencia intrafamiliar.

De igual forma, se tomará en cuenta el Método de análisis **histórico**, el cual indica que cualquier fenómeno de tipo social existen dentro de un intervalo de tiempo y espacio, pero de igual forma, cuentan con un pasado, un presente y un efecto en el futuro. Para finalizar, se tendrá en cuenta el método **comparativo**, en razón de que se van a utilizar ciertas doctrinas o modelos de otros países, como la europea, de tal manera que se pueda conocer cómo es la protección legal en cuanto a violencia doméstica.

1.8.2. DISEÑO DE CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS

Se sabe que una definición operacional, a través de un proceso del cual el investigador explica detalladamente la especificación de los tipos de valores de las variables (cualitativos o cuantitativos) y los cálculos realizados para obtener los valores de las variables (indicadores) en el caso que fueran cuantitativas, en términos de los métodos particulares que se usarán para medirla, en el contexto de la investigación en cuestión.

Es necesario poner a prueba las hipótesis científicas a través de la experimentación empírica, con el fin de tomar una decisión acerca de su aceptación o rechazo, acorde a los resultados observados en la realidad. En hipotético caso no se aceptarán, esto no implica que la investigación no tenga sentido. Hallazgos consistentes con lo previsto en el ambiente de investigación, su validación aumenta el conocimiento.

De acuerdo a lo emitido arriba, el contraste de las hipótesis de nuestra investigación debe cursar los siguientes periodos:

I.- Deducción de consecuencias notorias. A menudo, las hipótesis son expresadas en términos abstractos que no son tangibles ni observables de modo directo. No obstante, para evaluarlas, es necesario encontrar una conexión entre estos términos abstractos y las vivencias que se pueden obtener de los Juzgados de Paz de Nominación del distrito de Cayaltí, en el desarrollo de los procesos penales según la Ley N° 30364. Al realizar estos procesos deductivos, normalmente se debe realizar trabajo empírico como crear o desarrollar un instrumento de medición para los términos dados, registrar gráficos y tablas a través de la recopilación de datos y realizar las operaciones necesarias para llevar a cabo estos procesos. Cabe señalar que es importante seguir la especificación que representa las funciones anteriores se denomina definición operacional.

II.- Confrontación con la experiencia. Básicamente esta etapa consiste en la confrontación con la experiencia, mediante la observación y la confrontación, estos se realizarán entre lo establecido en la Ley N° 30364 y lo que en realidad se viene ejecutando en los juzgados de paz de nominación; asimismo, se recolectará información, mediante la entrevista y encuestas sobre las ejecuciones de sentencias para determinar la eficacia y protección de la víctima en la conclusión del proceso. Durante esta fase, es esencial considerar las particularidades del diseño de investigación y los instrumentos utilizados para recopilar los datos.

III.- Inferencia. Una vez recolectada la información de los Juzgados de Paz de Nominación; se debe tomar una decisión respecto a la hipótesis, sobre la base de la interpretación de los datos analizados, tabulados estadísticamente para conocer sus resultados. Si los datos respaldan la hipótesis, se considera verdadera. Sin embargo, esto implica cierta probabilidad de error, ya que los datos pueden ser una muestra sesgada de la realidad. Si las deducciones de la hipótesis no se cumplen, se rechaza, lo que es un conocimiento interesante.

1.8.3. POBLACION Y MUESTRA

Por el tema materia de estudios la población con la que se contará serán básicamente:

- **Población:** Distrito Judicial de Lambayeque.
- **Muestra:** Fiscalía Mixta de Cayaltí - 2016 (50 procesos)
Juzgado de Paz de Nominación de Cayaltí – 2016 (50 procesos)

1.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

Teniendo en cuenta la naturaleza de la problemática, estamos ante una **investigación socio jurídica**; en razón de que la investigación se centra en aquellos fenómenos de tipo social que existe en la sociedad. Seguidamente, se tendrá que realizar un análisis de la correlación que existe entre la realidad de tipo empírica social y el derecho positivo de nuestro país.

El propósito de la investigación, esta dirigida a la interrelación que se evidencia entre la realidad social y de igual forma la realidad normativa que se encuentra prevista en la Ley N° 30364. Esta investigación está dada por los fenómenos sociales generados en la interrelación entre la realidad de tipo empírica social y el derecho positivo; estos, entre la realidad que se viene generando por la aplicación de una justicia inexistente en las zonas rurales, frente a los delitos de violencia familiar, precisamente en los Juzgados de Paz.

1.10. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

MÉTODOS:

Generales:

- Histórico. Utiliza a la historia como ciencia social. Comprende las metodologías, técnicas y las directrices mediante las que los historiadores usan

fuentes primarias y otras pruebas históricas en su investigación y luego escriben la historia; es decir, elaboran la historiografía (la producción historiográfica).

- Analítico - sintético (análisis mental o lógico). Es un método que consiste en la separación de las partes de un todo para realizarles un estudio de forma separada (Análisis), y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis)
- Dialéctico. El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo. Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad. El método dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad.
 - Sistemático Jurídico. Se ocupa de ordenar los conocimientos agrupándolos en sistemas coherentes. Desde la perspectiva del método sistemático jurídico, La ley no se considera aislada sólo en el sentido literal de la ley, sino que la ley constituye el todo, por tanto, para conocer y comprender el sentido y finalidad de una disposición, es necesario evaluarla en el conjunto del ordenamiento jurídico;
- Comparativo. El método comparativo es una parte fundamental de las técnicas de investigación jurídica. El método es aplicable cuando nos encontramos con dos o más realidades o situaciones entre las que se supone existe cierta relación semejanza. Si los datos son buenos, el método es capaz no sólo de mostrar cómo era el antecesor común, sino también el grado de cercanía entre las diferentes situaciones y por tanto la secuencia de diferenciación.

TECNICAS:

Recopilación de Datos:

- Lectura
- Resumen
- Encuestas.
- Registro de Datos

Recopilación Documental

- Fichas de Libros

- Fichas de artículos jurídicos
- Resumen de libros, artículos, documentos, etc.

Instrumentos:

- Cuestionarios
- Tabla de registros

1.11. PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE DATOS.

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el diseño de la investigación, será necesario definir las técnicas de recolección de datos para construir los instrumentos que nos permitan obtenerlos de la realidad. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información.

1.11.1. La Observación Científica.

La observación puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación. Dicho de otro modo, observar científicamente es percibir activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos de interés para la investigación. La observación que se realiza cotidianamente, como parte de nuestra experiencia vital, no puede ser considerada como científica pues no está orientada hacia objetos precisos de estudio, no es sistemática y carece de controles o de mecanismos que nos pongan a cubierto de los errores que podemos cometer cuando la realizamos (Reyes Bello, 2008). La observación científica debe seguir algunos principios básicos:

- Debe tener un propósito específico.
- Debe ser planeada cuidadosa y sistemáticamente.
- Debe llevarse, por escrito, un control cuidadoso de la misma.
- Debe especificarse su duración y frecuencia.

- Debe seguir los principios básicos de validez y confiabilidad.

La principal ventaja de esta técnica en el campo de las ciencias del hombre radica en que los hechos son percibidos directamente, sin ninguna clase de intermediación, colocándonos ante una situación tal como ésta se da naturalmente. De este modo, no se presentan las distorsiones que son usuales en las entrevistas, como la subjetividad del objeto investigado. Otra ventaja es que la conducta se describe en el momento exacto en que está ocurriendo. Además, las observaciones se pueden realizar independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar o no, a diferencia de otros métodos en los que sí necesitamos de la cooperación de las personas para obtener la información deseada.

Su principal desventaja reside en que la presencia del observador puede provocar, por sí sola, una alteración o modificación en la conducta de los objetos observados, destruyendo la espontaneidad de los mismos y aportando datos, por lo tanto, poco fiables, porque las personas al saberse observadas pueden alterar su conducta. Esta reacción frente a la presencia de terceros debe tenerse en cuenta siempre que se pretenda utilizar la técnica de la observación.

1.11.2. Registro y formalización de la observación:

La tarea de observar no es una mera percepción pasiva de hechos, situaciones o cosas. Hablábamos de una percepción activa, lo cual significa seleccionar, organizar y relacionar los datos referentes a nuestro problema. No todo lo que aparece en el campo del observador tiene importancia y, si la tiene, no siempre en el mismo grado; no todos los datos se refieren a las mismas variables o indicadores y es preciso estar alerta para discriminar adecuadamente todo este conjunto posible de informaciones.

Resulta indispensable registrar toda observación que se haga, para poder organizar luego lo percibido en un conjunto coherente. Los medios más comúnmente utilizados son: cuadernos de campo, diarios, cuadros de trabajo, gráficos y mapas.

El problema del registro puede llegar a ser sumamente delicado cuando se trata de la observación de fenómenos de tipo social. En muchas circunstancias es prácticamente imposible tomar notas durante el transcurso de la observación, pues ello originaría sospechas y recelo. En situaciones extremas, no habrá más remedio que confiar en la memoria, con todas las limitaciones que esto supone. Esta desventaja disminuye cuando los observadores son varios, ya que pueden redactar independientemente sus informes para luego compararlos entre sí, completando y depurando los datos obtenidos (Reyes Bello, 2008).

1.11.3. Recolección de datos secundarios.

Las bibliotecas son la mejor opción que se presenta al investigador, en especial en cuanto se refiere a libros, revistas científicas y boletines informativos. Tampoco deben dejarse de registrar otros lugares que pueden reunir información de este tipo: archivos y bibliotecas privadas, de organismos e instituciones públicas o privadas, librerías, puestos de venta de periódicos, etc. También las redes informáticas hacen posible una búsqueda sistemática de los materiales bibliográficos existentes.

Las bibliotecas ofrecen tres tipos de ficheros que, si son adecuadamente usados, proporcionan un cuadro completo de la información existente sobre un tema:

- Ficheros por autor.
- Ficheros temáticos.
- Ficheros de títulos de libros y artículos.

Para recolectar la información, el instrumento que se utiliza es la ficha. Las fichas bibliográficas son una simple guía para recordar cuáles libros o trabajos han sido consultados o existen sobre un tema. Las fichas textuales, además de poseer los datos del libro, constan de párrafos o trozos seleccionados que aparecen en la obra, o de estadísticas, cuadros y otros datos semejantes. Estos fragmentos se repiten exactamente tal como han sido escritos, sin la menor alteración, para respetar el trabajo creador de

quien estamos citando, haciendo mención explícita de la página en que aparecen. Las fichas de contenido, aparte de poseer los datos comunes a toda ficha, consisten en resúmenes o síntesis de párrafos, capítulos o aún de la obra entera (Reyes Bello, 2008).

1.11.4. Análisis de contenido:

Krippendorff, citado por Sampieri (1.998) define al análisis de contenido como "una técnica para estudiar y analizar la comunicación", el autor agrega que este análisis busca la sistematización, la objetividad y la medición cuantitativa, dado que se ha ubicado dentro del positivismo cuantitativo (Reyes Bello, 2008).

Desde la visión cualitativa, el análisis de contenido sigue siendo una manera de análisis de cualquier forma de comunicación humana, especialmente la emitida por los medios masivos y por personajes populares. Sampieri (1.998) se refiere a ella como una forma útil de "analizar la personalidad de alguien evaluando sus escritos; indagar sobre las preocupaciones de un pintor o un músico; compenetrarse en los valores de la cultura"(Reyes Bello, 2008).

Según esta descripción el análisis de contenido es uno de los procedimientos que más se acercan a los postulados cualitativos desde sus propósitos; busca analizar mensajes, rasgos de personalidad, preocupaciones y otros aspectos subjetivos. Otras de las características que acercan el análisis de contenido con el paradigma cualitativo es que el examen de los datos se realiza mediante la codificación.

El análisis de contenido requiere de algunos pasos para su puesta en práctica como lo son:

- Lo primero es determinar que contenido se estudiará y por qué es importante. Obviamente, esto se relaciona muy de cerca con la necesidad de tener un tema previo, una o varias preguntas de investigación y objetivos claramente definidos.

- En segundo lugar, debe tenerse claro los elementos que vamos a buscar. Esto nos remite necesariamente a una guía de análisis. Es importante recalcar que esta guía es una propuesta inicial, como en toda investigación cualitativa, y puede, conforme marcha el proyecto, modificarse de acuerdo con la experiencia en la obtención de datos.
- Aquí importa decidir como definimos nuestro campo de observación de contenido. Será útil buscar un muestreo aleatorio, aunque esta no sea una preocupación central de la investigación cualitativa.
- Dependiendo del propósito de nuestra investigación, se debe decidir la forma de recabar la información. Por ejemplo en hojas de reporte de observación o mediante transcripciones. A su vez, cada una de estas formas se analizará.
- Por último, habrá que asegurarse de unificar criterios para la observación y para la codificación, en el caso de que sean varios los observadores o codificadores.

CAPITULO II:

MARCO TEORICO

PARTE I

DEFINICIÓN Y ANALISIS DE LA VIOLENCIA DOMESTICA

1. ¿QUE ES VIOLENCIA, Y QUE ES VIOLENCIA FAMILIAR?

En los primeros capítulos de la obra *Las semillas de la violencia*, Rojas (2004) hace un pequeño resumen, indicando la relevancia y haciendo un análisis de aquello que denomina “abuso en la intimidad”, donde manifiesta el progreso y las modificaciones que han ido ocurriendo en el ámbito de este tema, que como se sabe no es ajena a nuestra realidad, pero, de forma específica porque no se ha detallado un estudio donde se analice a la mujer como el centro del tema de agresión familiar, sino que, toma mayor importancia a otros miembros de la familia.

Así pues, denominando el tema como “violencia aprendida”, ASHLEY MONTAGU indica que, "la única forma de aprender a amar es siendo amado. La única forma de aprender a odiar es siendo odiado. Esto ni es fantasía ni teoría, simplemente es un hecho comprobable..."

De esta forma comienza indicando que la violencia forma parte de un trío de elementos que son parte del poder de los humanos, siendo los otros el discernimiento y el patrimonio, asimismo, se indica que estos elementos influyen en nuestra forma de vivir la vida, desde que se da nuestro nacimiento, hasta nuestra muerte. También se esclarece que la violencia es la forma más antigua que se conoce cuando nos referimos al poder, ya que entre sus usos se da para un castigo, para destruir o causar un menoscabo. Consecuentemente, indica que esta no es instintiva, por otro lado, indica que es aprendida, porque las semillas a las que hace referencia van sembrándose en los años iniciales de nuestra vida, siendo desarrollados durante la etapa de la infancia,

siendo que los frutos denominados “perversos” salgan a relucir en nuestra etapa de adolescencia.

Estas simientes posteriormente, son estimuladas por los denominados “ingredientes crueles que se toman del medio” para luego unirse al carácter de nuestra etapa adulta.

En este caso, al hacer referencia a las perversidades de la actualidad, sería el maltrato que se sufre adentro del hogar, la forma tirana de mostrar los celos, la crueldad de la violación sexual, el horror de aquellos crímenes violentos, el sadismo, la venganza, el terrorismo, entre otros fenómenos que inciden en aumento. Posteriormente, indica que las personas somos más probables de ser torturados tanto de forma física, como mental en la intimidad o en el ambiente privado de nuestro hogar. Existen muchos casos que lo evidencian, ya que niños y niñas han sido en algún momento víctimas de esta violencia dentro de su casa.

Por otro lado, a pesar de que el tiempo ha ido pasando, los pensamientos y la cultura han impuesto de alguna forma la sumisión que tiene que existir por parte de la mujer al hombre, y de los más pequeños a los mayores. En el tema de que una pareja pueda romper, indican que la persona que es engañada no encuentra remedio, ya que ha sido estafada de alguna manera. Es así que, con ese sentimiento tan doloroso que ha sentido y la humillación que ha pasado, lo llevan a que genere rencor y buscando expulsarlo de cualquier forma. Es así que, muchas de estas parejas se intentan destruir una a la otra. La razón común se dice que es la inquina, sin embargo, como indica el autor, suele ser por algo mucho más complejo y es el cambio que sufre la transformación de lo que antes era amor en odio.

2. MANERAS DE AGREDIR DE LOS MIEMBROS DE UNA FAMILIA.

En primera, es necesario acotar que la violencia dentro de la familia se materializa cuando existen agresiones que pueden ser por parte de algunos miembros que conformen el conjunto familiar, siendo de tipo físicas, es decir, utilizando la fuerza o en todo caso, psíquica, es decir, a través de la manipulación o intimidación. En relación a ello, podemos tomar de ejemplo catálogo de formas de violencia dentro de la familia, que han sido plasmados en el “Manual de Violencia Familiar y Sexual editado por el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora

Tristán”, donde se indica la mayoría de maneras de agresión que pueden llevarse a cabo en el hogar y que necesariamente no implica algún efecto material, entre ellos

VIOLENCIA FÍSICA	VIOLENCIA PSICOLÓGICA	VIOLENCIA SEXUAL
<ul style="list-style-type: none"> - Pellizcos. - Empujones, inmovilizaciones. - Tirones, zamacones - Bofetadas, jalones de pelo. - Apretones que dejan marcas. - Puñetazos, patadas. - Lanzamiento de objetos. - Golpes en diversas partes del cuerpo. - Mordeduras. - Asfixia - Uso de objetos de la casa como armas de agresión (platos, cuchillos, adornos, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Burlas, ridiculización. - Indiferencia y poca afectividad. - Percepción negativa del trabajo de la mujer - Insultos repetidamente en privado y en público. - Culpabilizar de todos los problemas de la familia a la mujer. - Amenazas de agresión física y abandono. - Generar un ambiente de terror constante - Llegar de improviso al lugar de trabajo como una manera de control. - Llamadas telefónicas para controlar. - necesidades de sueño, comida, educación. - Amenaza contar las Intimidades o cuestiones personales o reserva. - Controlar con mentiras, contradicciones, promesas o esperanzas falsas. - Atacar su personalidad, creencias y opiniones. - Amenaza con quitarle a los hijos e hijas. - Exigir toda la atención de la pareja. - competir celosamente con los hijos e hijas. - Contar sus aventuras amorosas. - Se muestra irritado, no habla, no contesta. - No dejar salir a estudiar, trabajar, tener amistades, visitar a la familia, etc. - Amenazas de suicidio o de matarla a ella o a los niños(as). - Intimidación. - Humillaciones públicas o privadas. - Aislamiento del resto (amistades, trabajo, familiar, entre otros) - Manipulación de los hijos(as). 	<ul style="list-style-type: none"> - Asedio en momentos inoportunos. - Burla de su sexualidad, sea en público, en privado o ambos. - Acusación de infidelidad. - Exigencia para ver material pornográfico. - Ignorar o negar sus necesidades y sentimientos sexuales. - Criticar su cuerpo y su manera de "hacer el amor". - Tocar de manera no consentida, forzar a tocarlo o a mirar lo que ella no desea. - Privar de momentos de amor y cariño - Pedirle sexo constantemente. - Forzarla a desvestirse, incluso delante de los hijos o hijas. - Salir con otras personas y contar sus aventuras amorosas. - Exigir el sexo con amenazas. - Impedir el uso de métodos de planificación. - Violar. - Forzar a la mujer a tener sexo con otras personas. - Complacerse con el dolor de la mujer durante el acto sexual. - Exigir sexo después de haberla golpeado. - Usar objetos o armas con el propósito de producir dolor a la mujer durante el acto sexual.

tenemos:

3.- PERSONAS COMPRENDIDAS COMO AGRESOR Y VÍCTIMA EN LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

La protección de la persona en el ámbito familiar, según el art. 7 de la Ley 30364 - Ley Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres Y Los Integrantes Del Grupo Familiar, alcanza a todos los miembros de quienes integran una familia y aún más, implícitamente extiende los alcances del concepto familia a otras personas que en singular caso se han desplazado de un estado familiar, y, muchos de ellos han formado una nueva relación jurídica familiar, a saber:

3.1. CÓNYUGES

Es decir a aquellos que se encuentran unidos por el vínculo del matrimonio civil, están comprendidos, los casados civilmente, aunque ya no hagan vida en común, lo que comúnmente se les conoce como separados de hecho, pues el vínculo que los ata legalmente aún no ha sido disuelto.

3.2. EX - CÓNYUGES

Es decir a aquellos cuyo matrimonio fue disuelto por sentencia judicial que ampare el divorcio o los que han disuelto su matrimonio en un proceso de separación convencional y divorcio ulterior. Consideramos que el término ex cónyuges debió especificarse agregándose la frase. "que tienen hijos menores", pues a decir verdad, el enunciado "ex cónyuges" no se condice con el concepto de familia, si tenemos en cuenta que muchos de los desplazamientos familiares se producen antes de haber procreado hijos, sin haber constituido el régimen patrimonial de sociedad de gananciales, o simplemente no tienen bienes sociales que liquidar y el desplazamiento del estado familiar de casados fue de manera pacífica, en tales supuestos, la nueva relación de quienes fueron cónyuges no reúne ninguno de los elementos del concepto familia, pues la separación ha eliminado los presupuestos de familiaridad existentes, entonces, resulta ilógico que las agresiones que pudieran suscitarse entre ellos encuentre amparo en la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, para ellos, el derecho indica

que se emplean otras formas para resguardar a la persona, ya sea en un ámbito de tipo penal o civil.

3.3. CONVIVIENTES

Aquellos que mantienen una unión de hecho, con apariencia de casados. Conforme al Art. 326 del Código Civil peruano, la unión de hecho —la que genera la convivencia— debe ser voluntaria, realizada y mantenida entre un varón y una mujer, que ambos se encuentren libres de todo impedimento matrimonial, y que la finalidad de esa unión sea cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, ello podría dar lugar a considerar -en una investigación sobre violencia en la familia- si los convivientes, reúnen los requisitos señalados precedentemente, pero la realidad muestra uniones de hecho donde las personas no siempre reúnen los requisitos anotados, y aun así han decidido fundar una o más familias cuyo común denominador en todos los casos es la unión intersexual y/o la procreación, originando alguno de los tipos de familia anotados en la parte introductoria del presente capítulo, y aunque ellos no son considerados convivientes, según nuestra legislación, las prohibiciones legales que las afectan no les ha impedido formar un nuevo hogar, generando un estado familiar de convivencia irregular -según nuestra legislación-, y nada obsta para que los miembros de tales hogares puedan recibir tutela bajo la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar

3.4 EX CONVIVIENTES

Se refiere a aquellos que estando en una relación, han escogido pasar de la convivencia por acuerdo mutuo o decisión de uno de ellos, de tal forma que puedan cumplir sus metas o proyectos de vida, lejos de la etapa de convivencia. Es necesario aclarar al respecto que, cuando estas personas ya no tienen cosas en común es porque no hay nada que los tenga unidos, por tal razón dejan de ser considerados como pareja de hecho, lo que hace que tampoco exista un significado de familiaridad, más cuando se entiende que el vínculo está roto. Ni se tiene hijos de por medio. En ese sentido, se hace también absurdo iniciar algún tipo de mecanismo en el caso que sean ex convivientes, dado que los elementos

de familiaridad se han perdido, lo que hace inválido también esta protección si se es víctima de violencia familiar.

3.5. ASCENDIENTES - DESCENDIENTE

En lo que respecta a ascendientes y descendientes, consideramos que se refiere al parentesco consanguíneo en la línea recta, es decir a aquellos que conforme al Art. 236 del Código Civil desciendan una de otra o de un tronco común, verbigracia las agresiones pueden darse entre padres a hijos, abuelos a nietos o viceversa, etc. en tales situaciones la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar no establece límite alguno.

3.6. CUARTO GRADO DE CONSANGÜNDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD

Dentro de la relación de parentesco consanguíneo en la línea colateral se encuentran los hermanos, tíos-sobrinos, primos hermanos. Estos últimos se encuentran en el cuarto grado de consanguinidad en la línea colateral. Por otro lado el parentesco por afinidad está regulado en el art. 237 del Código Civil peruano, y conforme a ella el parentesco solo se origina a partir del matrimonio, esquemáticamente la protección de la persona en el ámbito de las relaciones de parentesco por afinidad alcanza a los considerados suegro o suegra y cuñado o cuñada y a la inversa al yerno o nuera, consiguientemente si el denunciante refiere haber sido maltratado por su cuñado o suegro y éste no se encuentra casado, evidentemente la protección de la persona en estos casos se dará lugar a través de la perspectiva jurídico — penal o jurídico civil, pero de ninguna manera podrá exigirse tutela bajo el contexto legal de la Ley 30364

3.7. PERSONAS QUE RESIDEN EN EL MISMO DOMICILIO, SIEMPRE QUE NO EXISTAN VÍNCULOS DE FORMA CONTRACTUAL O LABORAL:

Se entiende como habitantes del hogar familiar, entre otros, a los ex cónyuges o ex convivientes que habitan temporalmente en el predio donde reside la víctima

de los actos de violencia familiar; durante el momento en que se produjeron dichos hechos.

En las intervenciones del fiscal, dentro del contexto de la Ley 30364, se ha entendido por habitantes del hogar familiar, a los parientes consanguíneos sea en la línea recta o colateral de los convivientes que junto a ellos comparten la misma morada, en ese sentido se brinda protección cuando las agresiones se producen, -aun cuando no exista matrimonio que establezca parentesco- entre los equivocadamente llamados cuñados, yerno-suegro/suegra o viceversa y suegro/suegra-nuera y viceversa, a condición de que habiten un mismo predio o como lo dijéramos compartan la misma morada, y ello, porque si bien es cierto, que el estado de convivencia no genera relación de parentesco, debe entenderse que la convivencia no solo es una alianza entre un varón y una mujer, sino que en muchas ocasiones se convierte en una alianza entre familias; no otra cosa se demuestra que habiten un mismo predio sea de los parientes del varón o de la mujer, en donde la relación de afinidad no depende del matrimonio sino de la coincidencia de sus intereses, y ciertamente es en estos casos en los que no existe ninguna relación contractual o laboral y habitan un mismo predio.

3.8. LOS QUE HAYAN TENIDO DESCENDENCIA JUNTOS, YA SEA QUE COMPARTAN O NO, DOMICILIO, AL MOMENTO DE OCURRIR LA VIOLENCIA

Llegado este punto, se hace necesario acotar la relevancia dentro del tema que se está tocando. Como primer punto, se debe tener en cuenta que, la mayoría de casos que se tiene sobre agresiones entre personas que son pareja, indican que estos son enamorados o bien, pueden ser novios, se entiende de alguna forma que estos no conviven, sin embargo, dentro de su relación pueden haber tenido un bebé; es por ello, que en estos casos como indica la Ley, la que indica que las afectadas deben tener protección mediante los procedimientos establecidos en la normativa, ya que, aunque no haya cohabitación, la existencia de descendencia genera una relación jurídica familiar. Una segunda dimensión se da al reconocer el concepto más amplio de familia, brindando protección a otras relaciones que forman el estado familiar, como la relación padre-madre.

4.- FACTORES SIGNIFICATIVOS QUE CONTRIBUYEN A LA VIOLENCIA DOMESTICA.

CECILIA P. GROSMAN y SILVIA MESTERMAN, muestran 4 formas o esquemas que esclarecen un poco más el tema de investigación:

A) INTRAPERSONAL o PSIQUIÁTRICO. – Lo que indica esta teoría es que la violencia se crea como una especie de “anormalidad”, es decir, inicia de forma pequeña en la mente de la persona, para posteriormente ser influenciada por otros elementos de aquel denominado como victimario. Es decir, si un hombre maltrata a su pareja, se entiende que puede tener una perturbación, catalogando esta brutalidad como una conducta de tipo patológica. Asimismo, no se toman en cuenta los elementos culturales o de tipo económicos, cuando se refiere a violencia. Por el contrario, lo que se analiza son aquellos trastornos que pueden ocurrir por razón del carácter y las emociones, las cuales son originadas por algún problema de tipo personal; ultimando que, tanto la investigación como la práctica relacionada con el abuso, han evidenciado que este modelo que considera una única causa no es suficiente para revelar la mayoría de las situaciones de violencia.

B) PSICOSOCIAL.- Esta doctrina indica que las acciones de tipo violentas, de alguna forma se pueden repetir muchas veces, esto en razón de que son aprendidas por imitación y por los efectos.

C) SOCIOCULTURAL.- Lo que indica esta doctrina es que la violencia es el efecto de cómo se está desarrollando la sociedad, es decir, para que se configure la violencia de alguna forma tienen que influir ciertos elementos culturales, así como estereotipo de roles y aquellas perspectivas que tiene la colectividad. La premisa inicial parte del supuesto de que para que exista violencia en el ámbito familiar, es necesario que previamente exista una de tipo estructural en la población.

D) ECOLÓGICO.- Esta esquema implica la existencia de múltiples fundamentos y apuntan a la presencia de repercusiones de tipo significativos entre los dispositivos del contexto social y ecosistémicos. Se puede mencionar que “los distintos contextos en

los que se desarrolla una persona, según este modelo, son: el microsistema, el exosistema, el microsistema y el nivel individual considerado en cuatro dimensiones”, esto según BRONFENBRENNER. Dicho de otro modo, aquí se toma en cuenta los diferentes tipos de organización de sociedades, aquellas creencias que existen, formas de vida que predominan en cierto grupo social. Asimismo, cuando se refiere a un exosistema, se toma en cuenta aquellas instituciones como los colegios, las iglesias, dependencias policiales, los grupos de barrios, medios de difusión, organismos judiciales, instituciones recreativas, factores de tipo económico o laboral; por otro lado, cuando se habla de microsistema se toma en cuenta aquellos elementos que forman parte de la misma persona.

En tal sentido, este nivel toma en cuenta elementos de la organización familiar, los patrones interaccionales y las historias personales de sus integrantes; por último, en el ámbito personal se cuentan 4 espacios de la psicología, los cuales tienden a ser interdependientes, los cuales se relacionan con los espacios anteriormente mencionados; asimismo, cuando se habla de una psicodinámica se hace referencia a elementos como nuestras conmociones, angustias y problemas, incluyéndose expresiones que se encuentran en nuestro inconsciente, y cuando se habla de interaccional, se refiere a las formas de relacionarnos y comunicarnos.

5. LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE MIEMBROS DEL ENTORNO FAMILIAR

La Carta Magna del país, en su primer artículo indica que, “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bajo este contexto el Estado tiene el deber y obligación de asumir políticas y estrategias para garantizar la vida digna de las personas que conforman nuestra sociedad”

Durante los años que han venido aconteciendo, ha sido evidente un preocupante aumento en las cifras acordes a la violencia, sobre todo por género. En la vorágine de nuestra sociedad abundan las denuncias que encuentran al sexo femenino como víctimas de hechos delictivos por su sola condición de tal, y por medios de comunicaciones también hemos podido ver diversos casos de maltrato dentro del entorno familiar, dentro de los hechos de gran cobertura tenemos:

- Caso Lady Guillén: Durante el mes de junio de 2012, Ronny García, su pareja, la golpeó brutalmente, causándole sangrantes heridas en su cara. Antes de eso, el agresor le había mordido una parte de la ceja y la había golpeado repetidamente contra la pared, dejándola con el ojo izquierdo prácticamente cerrado. En ese momento, ella temió por su vida. Posteriormente, su caso se convirtió en un emblema de la lucha contra el abuso que sufren las damas. [7].
- Caso Arlette Contreras: Con data 13.07.2015, Adriano Pozo la agredió, por noticieros nacionales a nivel nacional se difundió un video donde Adriano aparecía sin ropa jalándola del cabello, la joven pasó una feroz paliza a manos de su ex enamorado, dentro de una posada que quedaba en la ciudad de Ayacucho.
- Caso cruel agresión a niño en Ilave: En septiembre de 2016, se hizo público un video en el que Marco Hidalgo Encinas Quispe torturó a su hijo de seis años desnudándolo, atándolo y sumergiéndolo en agua helada, además de golpearlo en el cuerpo. Este acto de violencia y crueldad fue profundamente condenado por la sociedad.

La descripción de los casos indica claramente que la violencia dirigida hacia cualquier miembro de la familia se considera un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. Para abordar la demanda social en torno a este tipo de violencia, el Estado peruano publicó la Ley N° 30364 el 23 de noviembre de 2015. Esta ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los miembros del grupo familiar, y deroga la Ley 26260, también conocida como la Ley de Protección contra la Violencia Familiar.

PARTE II

LA VIOLENCIA FAMILIAR EN ZONAS RURALES

1.- UNA MIRADA A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA RURAL

Desde hace varias décadas, La situación de las familias rurales ha constituido parte de la Agenda de las Naciones Unidas en las áreas de integración que se encargan de dichas deficiencias; añadiendo reformas legislativas que permitan el acceso a recursos y la propiedad; reconocimiento de la jornada de trabajo que realizan las mujeres rurales; capacitación y garantizar la participación en los niveles de decisión; promoción de dicho tema en las políticas macroeconómicas; promoción de programas que reconcilien el trabajo y las responsabilidades familiares de las mujeres y los varones; y la creación de un ambiente contra la violación de los derechos de miembros de la familia.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) entrega cierta manera amplia, al derecho conceptualización acerca de aquellas damas que son discriminadas, esto en relación del ámbito político, mercantil, nacional y formativo, para constituir la mujer como la víctima de mayor incidencia según las estadísticas reportadas. Esta definición dice lo siguiente:

“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera esfera”

“El artículo 14 la Convención pide a los Estados parte que aseguren el derecho a la familia rural a: - crédito y préstamos agrícolas, servicios de comercialización, tecnologías apropiadas y trato igual en los planes de reforma agraria y reasentamiento; - educación, formación y servicios de divulgación a fin de aumentar sus capacidades técnicas; - participación en la planificación del desarrollo a todos los niveles; - organización de grupos de autoayuda y cooperativas; - acceso a servicios adecuados

de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación familiar”.

En las últimas dos décadas, la revisión del cumplimiento del CEDAW de los informes de los países, han constituido el único foro para evaluar dichas acciones orientados a mejorar la situación de la familia rural. Tal cual se ha indicado arriba, el artículo 14 de la Convención hace que los Estados tengan en consideración los problemas particulares que enfrentan las mujeres rurales como también el papel que estas juegan en apoyo a la supervivencia de sus familias. Sin embargo el Comité de la CEDAW en su reciente evaluación sobre el avance de las acciones de la Convención ha notado que las políticas nacionales muy pocas veces dan cuenta del papel de las víctimas en zonas rurales, no obstante estas constituyen un número importante, especialmente en los países en desarrollo³.

El Comité también ha reconocido, entre otros, la vulnerabilidad de las mujeres rurales por la discriminación de la que son objeto no solo por su sexo sino que también por otros factores específicos tales como el hecho de que en muchos casos viven en áreas geográficas menos desarrolladas e incluso marginalizadas y por eso suelen enfrentar circunstancias difíciles como pobreza, bajos niveles de educación y altos niveles de desempleo. Esta situación particular de vulnerabilidad pone en mayor riesgo a la mujer de ser objeto de violencia doméstica, de la comunidad como también de trata de personas.

La distancia de los núcleos urbanos complica la posibilidad de acceder a los servicios destinados a la prevención y atención de la violencia doméstica. Las características culturales de las distintas zonas al interior de cada país hacen necesario el desarrollo de enfoques particulares para tender esta problemática.

2.- LA JUSTICIA DE PAZ EN ZONAS RURALES.

La construcción de una sociedad democrática requiere que su derecho al acceso a la justicia se vea plasmado en los hechos y que no sea mera retórica. En nuestro país es una interrogante pertinente examinar si dicha colectividad posee claramente este derecho, teniendo mayor atención a que somos una colectividad con diversas formaciones.

No se debate si la idea de acceso a la justicia está contemplada o no en la normativa, ya que diversos acuerdos ratificados por el Perú lo incluyen y varias leyes nacionales se refieren a ello. El verdadero tema a tratar es si, en situaciones de distinción, estas personas tienen la capacidad de utilizar alguno de los mecanismos disponibles de manera justa, lo que les permitiría resolver sus conflictos y asegurar sus derechos ante terceros. Esto implica que no solo se consideren las opciones judiciales, sino también otros modos que da la Carta Magna.

La falta de esta oportunidad, junto con la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía sobre los diferentes métodos, constituye un obstáculo significativo para el acceso a la justicia, que requiere de atención y resolución inmediatas, especialmente en lugares donde se carece de las cosas básicas. Esta carencia, añadiendo la justicia, es una dificultad invariable.

CERIAJUS formó un equipo de trabajo para abordar el acceso a la justicia, y se identificaron obstáculos significativos en esta área. Para las zonas rurales, se sugiere que la justicia de paz y la justicia comunitaria pueden ser soluciones efectivas. A continuación, se exponen las principales dificultades en el acceso a la justicia de paz:

2.1.- Barreras Lingüísticas

Hay una referencia constitucional al pluralismo étnico y cultural del país. (art. 2° inciso 19). Sin embargo, el país cuenta con unos pocos millones de personas que no hablan español, como quechuas, aymaras u otros amazónicos, cuya oportunidad de trabajar en su propio idioma es demasiado remota en la jurisdicción, principalmente porque los funcionarios judiciales no conocen a la madre lengua o tener un intérprete.

Es esencial que en las áreas donde se hablan idiomas distintos al castellano, los magistrados y personal de apoyo judicial hablen el idioma local para evitar que los ciudadanos se encuentren en una posición de desventaja. Además, en un futuro cercano, cada Corte Superior debería tener traductores disponibles para participar en cualquier proceso judicial en el que el litigante hable un idioma distinto al castellano.

2.2.- Barreras Económicas

En un país donde más de la mitad de la población vive en situación de pobreza o pobreza extrema, el costo económico de buscar una forma legítima de resolver conflictos es una verdadera dificultad. Las barreras principales incluyen las tasas judiciales y los costos de tener un abogado.

Los costos de un proceso judicial pueden discriminar indirectamente a personas de bajos recursos. Por lo tanto, se debe reconsiderar y eximir del pago a aquellos que viven por debajo de la línea de pobreza en ciertos distritos, mientras que en otros lugares se debe difundir y flexibilizar la posibilidad de recibir asistencia legal.

2.3.- Barreras Culturales

Se busca reconocer en nuestro país la pluralidad de razas y también de culturas, y con ello, el derecho de las autoridades de las comunidades campesinas y nativas a administrar justicia con el apoyo de las rondas campesinas (Art. 149° de la Carta Magna). Esto permitiría que un amplio sector de la población ubicado en zonas rurales tenga la posibilidad de resolver sus conflictos sin tener que acudir al Poder Judicial

Sin embargo, esta situación no es aceptada con facilidad desde los operadores de justicia estatal que en su mayoría son renuentes a la posibilidad de permitir que otras instancias también puedan administrar justicia, de allí que sea necesario una mayor sensibilización y difusión acerca de los que se conoce como justicia comunitaria o comunal.

2.4.- Barreras de Género

En nuestra sociedad, hay prejuicios y estereotipos machistas que dificultan que las mujeres accedan a sus derechos en igualdad de condiciones. Estas barreras se acentúan en lugares de tipo rural y entorpecen que las damas tengan un proceso justo y puedan hacer respetar su condición. Por tanto, es crucial establecer dispositivos que ayuden a mejorar estas escaseces.

En resumen, se puede decir que el acceso a la justicia solo se logra cuando la ciudadanía encuentra una solución satisfactoria a su problema legal, lo que

implica no solo expandir la cobertura estatal de justicia, sino también fortalecer las prácticas de justicia comunitaria.

3.- LA PLURICULTURALIDAD, UN ENFOQUE DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS ZONAS RURALES DE LA REGIÓN.

En el caso particular de las víctimas rurales hay que destacar que en muchas oportunidades su situación se ve afectada por las prácticas y costumbres culturales tradicionales que perpetúan la discriminación. Estas también pueden incluir violencia doméstica y de la sociedad. Muchas de las comunidades pobres y aisladas sean por razones de distancia o de la ausencia de institucionalidad estatal, rigen sus vidas de acuerdo a los usos y costumbres tradicionales y a veces ancestrales. La impunidad de la violencia de género puede llegar a ser alta, como ésta se da en la esfera privada, los casos de violencia familiar no son denunciados a los espacios públicos, más aún cuando esto ocurre, son juzgados por las leyes de orientación urbana. En este contexto también pueden encontrar sesgos generacionales que afectan en mayor medida a las personas de avanzada edad que suelen sufrir mayor marginación y aislamientos arriesgándolas a ser víctimas de violencia.

El tratamiento del tema de la violencia en el sector rural de la región latinoamericana debe partir considerando ámbitos como el de la cultura, de la colectividad y mercantil en el que se realiza. No puede partir desde una visión universal de las mujeres sin considerar sus especificidades; de cómo se da la violencia en los lugares rurales y en las comunidades con grupos étnicos mayoritarios. El tema de la pluriculturalidad no ha sido hasta ahora desarrollado ni a nivel de las políticas ni a nivel de la legislación. Tal cual lo hemos visto más arriba, el enfoque que se le ha dado a nivel de la región ha sido en el campo normativo y legal sin considerar las particularidades de las mujeres; por ello, debe haber más enfoque en acciones sobre violencia doméstica e intrafamiliar en concomitancia con las leyes dictadas en cada país.

Las medidas tomadas tienen un claro sesgo urbano y en el caso de los grupos étnicos muy difícilmente permiten incorporar demandas y necesidades de mujeres y niñas de esas comunidades, como también de las campesinas. Más aun la experiencia

ha constatados que no existe un reconocimiento de las formas alternativas y preventivas que existen entre las minorías étnicas para sancionar la violencia familiar.

Por ejemplo, en las culturas andinas/amazónicas las casas de refugio y protección tienen otra contextualización. Un estudio realizado con víctimas de zonas rurales de Cusco - Perú y acorde a la Ley, manifestaron su preocupación por la existencia de estas casas ya que más que una protección a las víctimas la consideraron como una sanción. Hay que tener en cuenta que en estas comunidades las unidades familiares campesinas son unidades productivas y el retiro de una de las personas de su entorno familiar y de sus tareas agrícolas es una sanción hacia la familia afectando la estabilidad económica del núcleo familiar.

Otro estudio realizado en una comunidad de la región andina (Adriana Espinosa Giraldo “Las mujeres rurales en Colombia: mujeres rurales de la región andina, propuestas para la equidad”, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Perú, 2001. Pag. 25), refleja que el proceso de socialización promueve la superioridad masculina. A diferencia de los varones quienes desde pequeños, realizan actividades en la esfera pública, a la niña se le recluye a la esfera privada cumpliendo funciones de cuidado de los menores, ayuda a los animales pequeños, lavar, cocinar. Es en la construcción de la relación entre ambos sexos que se van reflejando los roles de género. Los roles socialmente impuesto para hombres y mujeres del sector rural son los que van sembrando relaciones desiguales marcadas muchas veces por la violencia.

La rigidez de los roles que se le asignan a cada sexo “producen un desequilibrio de poder que deja al hombre creer que tiene derecho a tratar a la mujer como el decide. Con resignación ella vivirá con el hombre que la escogió”.

Generalmente en el área rural, le corresponde al varón la responsabilidad de asignar las labores reproductivas y productivas que debe desempeñar la mujer y controlar que ellas se cumplan. En este marco el hombre como jefe del hogar tiene el derecho a castigar a su pareja cuando estas funciones no se cumplen satisfactoriamente. Esta y otras situaciones similares no son reconocidas por ambas partes como maltrato sino como una acción por el bien familiar.

En muchas comunidades rurales, consideran que la violencia doméstica es un tema que pertenece a la esfera privada y no debe ser expuesto a lo público. Como el estudio arriba indicado “las mujeres no hablan entre ellas sobre sus experiencias y cuando lo hacen existe en miedo que sus esposos se enteren y las castiguen, la mujer niega que haya sido abusada y no se queja formalmente para protegerse”.

Tampoco las campañas de sensibilización o prevención de la violencia doméstica consideran las particularidades culturales. El reto está en lograr un enfoque multisectorial, multidisciplinario y pluricultural que incorpore estas valoraciones del mundo indígena y rural como también el derecho consuetudinario al sistema de protección, sanción y prevención existente de manera de poder mantener el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito familiar.

4. CAPACIDAD ESTATAL, PLURALISMO LEGAL Y ACCESO A LA JUSTICIA

El poder estatal es como “la capacidad de ejercer la autoridad de manera efectiva y promulgar políticas a través de sus fronteras”. La baja autoridad estatal ha sido identificada como un nivel fundamental de conflictividad social (Mainwaring, Bejarano y Pizarro 2006). Por esta razón, construir o fortalecer instituciones fuertes y con capacidad para establecer relaciones adecuadas con la sociedad es una preocupación constante para los países en desarrollo.

O'Donnell (1993), explica que La capacidad del Estado, particularmente en la provisión de justicia, varía entre regiones, particularmente entre áreas urbanas y rurales. Las poblaciones rurales en Perú enfrentan muchas barreras para ejercer sus derechos de acceso a la justicia: «El derecho de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política o creencias religiosas, a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas» (PNUD 2005). La Rosa (2007) menciona que hay áreas donde predomina estas carencias: lingüística, económica, cultural y geográfica. Del mismo modo, según el mismo autor, existen muchas limitaciones de la estructura social nacional y el entorno estatal, en primer lugar, la gente rural es diferente, su filosofía cultural es diferente, en segundo lugar, el estado no tiene el monopolio de la ley y la justicia. Finalmente, los sistemas legales nacionales

son inconsistentes y no cubren toda la región (La Rosa 2007). En muchos casos, en la práctica, las agencias gubernamentales nacionales son reemplazadas por agencias de seguridad locales. (Levitsky y Murillo 2012).

También menciona Van Cott (2003)- Al proporcionar su propio sistema de seguridad colectiva, los agricultores se convierten en patrulleros y líderes comunitarios que llenan el vacío de la autoridad pública y privada. De esta forma, según van Benda-Beckman, se desarrolla un pluralismo jurídico en el campo, con una regulación diferencial en el ámbito sociopolítico (Von Benda-Beckmann, citado en Van Cott 2003).

De igual forma, nuestra Carta Magna en su Art. 149° menciona: «Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial». Como señala Villanueva (2010), desde la Constitución de 1993 no se ha promulgado ninguna ley para armonizar estas dos tipologías de justicia, la del estado y la de la colectividad.

Especialmente en el ámbito de la protección contra la violencia de género, el acceso a la justicia de las mujeres víctimas es muy limitado porque, además de los obstáculos planteados, tienen que hacer frente a que las instituciones policiales y judiciales también están fuertemente masculinizadas. Como señala Mujeres Operadoras de Justicia, Daverio (2009), las relaciones de poder, jerarquía y dominación se reproducen en estructuras masculinas, en las que se subordinan los roles de las mujeres.

5.- DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN, FORMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN ZONAS RURALES

La violencia doméstica puede ser interpretada como una forma de discriminación y de restricción al acceso a recursos y beneficios, a sus derechos y libertades básicos en todas las esferas de la vida. Para la emancipación de las mujeres,

es fundamental que hombres y mujeres gocen por igual y plenamente de todos sus derechos. “El Plan de Acción de sobre Género y Desarrollo de la FAO (2002-2007) reconoce que los derechos de las mujeres son una parte integrante e indivisible de los derechos humanos universales y de la erradicación de todas las formas de discriminación por razones de sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.”

Desde la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales parte importante de los derechos humanos y “componentes ínter conexos de un conjunto más amplio que enlazan los derechos civiles y políticos, se deriva el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho de subsistencia y a la alimentación. Cuando estos derechos se le restringen o impiden a las víctimas rurales e indígenas, estamos hablando de violencia contra ellas.

Más aún, usos y costumbres tradicionales han relegado a las víctimas (en su mayoría mujeres rurales) a un papel de subordinación y en muchos casos sus derechos están más limitados que el de los hombres. A menudo se le niegan sus derechos económicos y sociales para disponer de sus bienes, tener un trabajo, educación acceso a la tierra, al agua, al crédito, a la salud, a la alimentación adecuada.

En este marco, la inequidad de las que son objeto las mujeres rurales e indígenas en su acceso a recursos y beneficios, en la subordinación de las que son objeto en la esfera pública y privada hacen que estas discriminaciones se transforman en violencia contra los derechos de las mujeres.

Atender el desarrollo agrícola y la lucha contra la inseguridad alimentaria y la pobreza en las zonas rurales son medidas para suprimir esta problemática. Además, estas acciones deben incluir esfuerzos para lograr la igualdad de género en el acceso a recursos naturales, servicios agrícolas, oportunidades laborales y en la toma de decisiones políticas a todos los niveles del sector agrícola, según se indica en los objetivos a mediano plazo del Plan de Acción de Género y Desarrollo de la FAO.

PARTE III

TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DOMESTICA EN EL EXTRANJERO

1.- IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DOMESTICA

A nivel mundial, se considera que la violencia que ejerce el esposo, conviviente, novio o padre es el primer origen de muerte e incluso, podría decirse de invalidez permanente entre las mujeres. Esta información es corroborada por la data que tiene el Consejo del país europeo y que han sido emitidos por el mismo Observatorio del país de Italia, los cuales se han vuelto expertos en brindar ayuda a aquellas personas que han sufrido violencia. Tal como indica el informe sobre Violencia de Género, la edad promedio va desde los 16 hasta los 44 años de edad, De 16 a 44 años.

Como indica Edición España (2005), *"La violencia familiar por parte del compañero es en Europa y en el mundo la primera causa de muerte de las mujeres"*. Así pues, de forma menos grave se tiene al país de Rusia, donde indican que, en todo un año han fallecido más de trece mil mujeres, siendo un 75% las que se indican fue por manos de su pareja. Ello quiere decir que, este fenómeno no solo está presente en países de bajo nivel de desarrollo, sino que, se puede encontrar en muchos otros lugares de mayor progreso, por ejemplo, Occidente, inclusive cuando se sabe que en este país abunda una cultura donde el esposo es visto como una gran figura, dejando de lado a las mujeres, en otras palabras, pensamientos patriarcales.

En esa misma línea, tenemos a E.E.U.U donde se dice que, pasados 4 minutos, una mujer sufre algún tipo de violencia, de igual forma, en Suecia, una mujer fallece cada 10 días; esto según Paparazzo, quien considera que estamos ante *"un fenómeno que tiene profundas raíces culturales"*. A pesar de esto, las mujeres tienen muy

complejo la situación cuando quieren denunciar estos maltratos, ya que "no tienen conciencia de ser víctimas", así lo indica Susana Loriga. Así pues, explicó que *“las mujeres no denuncian más para protegerse y defenderse a ellas mismas de una realidad que, de otra manera, las destruiría”*.

Esta problemática sobre violencia en la familia "ingresa al temario de los organismos internacionales en el transcurso de la última década. La ONU, en su Asamblea General de noviembre de 1985, abordó el tema de la violencia en el hogar" (Corsi, 2009). De esta forma, vuelve una Resolución del Consejo Económico y Social que corresponde a la misma organización, centrando sus acciones en la intención de prevenir la criminalidad y de otro lado, favorecer a la mujer, siendo su última reunión en el año 1985 en Nairobi.

Es en esa fecha, donde el Comité de Ministros del Consejo de Europa acoge una recomendación casi igual a la anterior, pero que tenía una influencia europea. Así pues, en el último mes del año 1986 un grupo de especialistas se encuentran en Viena para poder solucionar este fenómeno y sus consecuencias, de esta reunión se emite un documento el cual incluía parámetros de prevención en niveles tanto internacionales, como regionales y nacionales.

Para el año de 1986, la Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericano de Mujeres, específicamente la N° 23 de la OEA empieza a discutir sobre qué forma esta violencia influye en la mujer, es ahí donde se aprueba un plan de acción que resulta relevante para aminorar este fenómeno, hablamos de la Resolución N° 103186. El año siguiente, en noviembre de 1987 se da una reunión en Estrasburgo, que fue planificado por el Consejo de Europa, en dicha reunión se dio un conversatorio acerca de la violencia, dentro del hogar, que trajo consigo un grupo de informes emitidos por los Estados que formaron parte de dicha reunión.

Tres años después, “en 1990, la Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericano de Mujeres de la OEA, específicamente la N° 250 aprueba las Conclusiones y Recomendaciones de la Consulta Interamericana sobre Mujer y Violencia”.

Ese mismo año, en la Habana se da el 8° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, donde nuevamente se adoptan algunos parámetros de 1985 y es la comisión canadiense quien asume la responsabilidad de elaborar un manual para aquellos que se encuentren trabajando en dicho tema.

En Pyongyang, en 1991, se aprueba de forma unánime una nueva recomendación para las Políticas existentes para aminorar la violencia tanto en niños, como mujeres. (Corsi, 2009) Es ahí que, con esas recomendaciones de tipo global se han ido dando diferentes encuentros a nivel regional, en las cuales se debaten acciones sobre el problema. De igual forma, en marzo de 1992 se llevó a cabo el 1° Seminario Subregional sobre Violencia contra la Mujer, donde se dio una definición exacta acerca de lo que significaba la violencia, el cual fue tomado como una deficiencia acorde a la salud de la colectividad.

Así pues, si bien, la enumeración anterior no incluye a los diferentes encuentros que se han ido dando de forma internacional, regional y local donde se ha debatido sobre este fenómeno, si han instado a que los Estados acepten y atiendan dichas pautas dadas.

1.1.- Surgimiento de una legislación especial en Latinoamérica.

La introducción progresiva de un marco legislativo acerca de la violencia familiar es de reciente data en la región andina; los cambios legislativos se han producido recién durante las dos últimas décadas. La mayor parte de conductas que actualmente se consideran formas de violencia doméstica podrían encontrarse tipificadas como delitos o faltas en los códigos penales. Sin embargo, la especial naturaleza de este fenómeno, que general mente se produce entre personas que conviven y se reitera a través del tiempo, hace necesario un tratamiento particular que el procedimiento penal por lo común no tiene. Las normas procesales penales buscan sancionar un hecho que se ha producido, mientras que

el tratamiento de la violencia intrafamiliar trata también de evitar que éste vuelva a producirse.

Nuestro país aprobó una normativa en torno a este tema, siendo el primero en hacerlo: la Ley No 26260, promulgada en 1993 y modificada en 1997 (Ley N° 26763). Le siguieron Ecuador (Ley No 103) y Bolivia (Ley No 1674), en 1995. Posteriormente, en 1996, Colombia promulgó la Ley No 294, modificada en el año 2000 (Ley N° 575). Finalmente, Venezuela aprobó su ley en 1998 (Ardito Vega, La Rosa Calle, & Marin E., 2012). Esta paulatina incorporación de un marco regulador de medidas de protección frente a la violencia familiar ha ido produciéndose en un contexto de creciente visibilización de los efectos nocivos sobre las relaciones familiares que tiene esta forma de violencia, además de una maduración y toma de conciencia de los Estados acerca de cómo este tipo de práctica afecta derechos fundamentales. Se ha logrado apreciar la incapacidad de las normas y procedimientos vigentes para enfrentar el problema, así como la actitud pasiva de muchas autoridades que no lograban comprender la naturaleza de éste.

De esta manera, se entiende que la mayoría de las legislaciones no sólo se hayan dedicado a establecer medidas de protección concretas y a determinar el procedimiento que se debe seguir en situaciones de esta índole, sino que además hayan tenido especial cuidado en establecer lineamientos de política pública que puedan continuar enfrentando la violencia doméstica independientemente de los cambios de gobierno (Ardito Vega, La Rosa Calle, & Marin E., 2012).

Una influencia decisiva en la incorporación de estas leyes al ordenamiento jurídico de cada Estado han sido algunas normas internacionales aprobadas por estos países, como el acuerdo que hubo de la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (1979) y la Convención Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará (1994). También debe destacarse el rol que han jugado las organizaciones de mujeres, que han

realizado una serie de acciones con el fin de generar en la ciudadanía corrientes de opinión que apoyen la necesidad de adoptar medidas legislativas y establecer políticas públicas que prevengan, aborden y sancionen esta forma de violencia.

1.2.- Objetivos de la legislación referida a la violencia familiar

Considero pertinente iniciar este análisis comparativo refiriéndonos a la manera en que los diversos ordenamientos jurídicos de los países andinos establecen sus objetivos respecto a las normas. A pesar de la similitud, existen algunas particularidades en relación con los objetivos que se proponen alcanzar en sus respectivas realidades. En este sentido, nos interesa destacar por su claridad el caso de Venezuela, que de manera precisa señala que el objetivo de su legislación es "prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia, así como asistir a las víctimas de los hechos de violencia".

La finalidad de la legislación colombiana parece bastante diferente, dado que señala que el propósito de la ley es atender estas tipologías, "a efecto de asegurar a ésta su armonía y unidad". Sin embargo, la posición de las demás legislaciones refleja con bastante claridad el criterio de que lo más importante en estos casos es salvaguardar la integridad de las víctimas de la violencia, aunque esto implique la ruptura de la unidad familiar.

La familia es una institución protegida por la sociedad pero los derechos fundamentales de sus integrantes no deberían subordinarse a la unidad familiar. En realidad la norma colombiana sostiene más a delante como uno de sus principios la primacía de los derechos fundamentales y la necesidad de brindar oportuna y eficaz protección a las víctimas e inclusive a quienes corren el riesgo de convertirse en tales. Además, precisa que la violencia de por sí es destructiva de la unidad familiar. Sin embargo, insistimos en que la mencionada referencia podría prestarse a otras interpretaciones.

2.- REGULACIÓN LEGAL DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

2.1. Uruguay

En Uruguay en el año 1995 se promulgo la Ley N°16.707, ley que está dirigida a la protección de la seguridad ciudadana, es por ello que se toma como referencia a lo estipulado en el art.18, inciso 321

En el año 1995, en Uruguay se promulga la ley N°16.707, Ley de Seguridad Ciudadana, en ella se inscribe por primera vez como delito la violencia doméstica en el Código Penal, la misma expresa lo siguiente en el artículo 18, inciso 321 bis:

Violencia doméstica. El que, por medio de violencias o amenazas prolongadas en el tiempo, causare una o varias lesiones personales a persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva o de parentesco, con independencia de la existencia del vínculo legal, será castigado con una pena de seis a veinticuatro meses de prisión. La pena será incrementada de un tercio a la mitad cuando la víctima fuere una mujer o mediaren las mismas circunstancias y condiciones establecidas en el inciso anterior. (*Poder Legislativo, 1995*).

La citada ley propone y define distintas formas en que se puede violentar. En el apartado 3 se argumenta que la violencia física se define como toda acción u omisión que lesione la integridad física de una persona. La violencia psicológica es cualquier comportamiento o negligencia que tiene por objeto humillar o controlar el comportamiento y amenaza la libre expresión, la asertividad y el juicio de una persona, utilizando el ridículo, las amenazas y la neutralización para dañar el equilibrio emocional. La violencia sexual ocurre cuando una persona obliga o incita a otra persona a realizar actos sexuales en contra de su voluntad, utilizando la fuerza, amenazas o cualquier otro método de dominación. Finalmente, se indica la violencia intrafamiliar, que se refiere a múltiples formas como ocultar

bienes económicos, retener o sustraer documentos, romper herramientas de trabajo, amenazar, imponer y violar la autonomía de la persona (Poder Legislativo, 2002).

Conforme a lo explicado por los autores Ruiz, Blanco & Vives (2003) se tiene que:

La violencia doméstica es una práctica aprendida y el resultado de un sistema social basado en la desigualdad entre hombres y mujeres, más bien violencia contra la mujer o violencia de género, como estos autores usan estos términos indistintamente, significa mecanismos de dominación.

Por otro lado, según Romano (2010) señala que la violencia doméstica se refiere no sólo a un lugar físico, sino también a relaciones simbólicas externas e íntimas, y en el derecho uruguayo incluye relaciones familiares, afectivas y consanguíneas.

La violencia de género y la violencia doméstica son dos términos diferentes pero relacionados, siendo el primero la causa y el segundo la situación de relación. Al decir de Emilio Fernández (2008) Si bien la dicotomía urbano-rural ha persistido. Estas limitaciones se reducen porque las variables que determinan la ruralidad no son tan claras debido a los movimientos migratorios, los factores económicos, la comunicación y el transporte. La ruralidad, entonces, como una construcción social en la que participan muchos agentes sociales no es un término abstracto o específico y no existen estándares o acuerdos internacionales que consideren la ruralidad como un concepto distinto, singular o preciso. Generalmente tiene una menor densidad de población, la agricultura como actividad principal y una cultura diferente en algunos aspectos a las ciudades. (Llambí& Pérez, 2007, p. 40). En el Uruguay, la definición del Instituto Nacional de Estadística (2006) citado por Fernández (2008,p. 4) señala que:

Población rural es aquella que vive fuera del área «amanzanada». El área amanzanada se delimita de acuerdo a la Ley 10.723 de Centros Poblados (21/4/46). La determinación de centros poblados es de responsabilidad municipal y se los establece en relación a la existencia de una serie de requisitos como ser escuela, servicios públicos, abastecimiento de agua, etc.

Vitelli & Borrás (2013) Determinar las dificultades para superar la desigualdad de género en las zonas rurales, no solo por ser mujer, sino también por las disparidades sociales, económicas y territoriales. Estos se denominan “desequilibrios cruzados” y se refuerzan entre sí.

A nivel Nacional y según censo del 2011, citado por Vitelli&Borrás (2013), “en el medio rural existe una pequeña mayoría de hombres con respecto a las mujeres y se ha conservado esta constante por los últimos 50 años, se estima 100 hombres por cada 78 mujeres. En cuanto al trabajo de las mujeres rurales ha sido por años invisibilizado, el ingreso económico ostensiblemente menor, por ende se halla en una posición de desventajas social en referencia a los hombres, incluso en situación de desigualdad con respecto a las mujeres urbanas. Sin embargo en dicha encuesta se reflejó que las mujeres rurales poseen un mayor nivel educativo en relación a los hombres rurales debido a las dificultades para conseguir empleo y la disparidad de ingresos económicos. Si bien es verdad que en el correr de los años y de acuerdo a políticas sociales implementadas por el Estado la situación de la población rural ha mejorado, también es real que se mantiene una visible brecha de desigualdades”.

2.2. En Argentina

El país de Argentina no tiene una vía punitiva para que pueda prevenir o en todo caso, castigar algún acto de violencia que se dé en un entorno social. A pesar de ello, la Ley No 24,417 (Ley de Protección contra la Violencia Familiar) dada el 28.12.1994 viene a ser aquella herramienta normativa que permite tener un adecuado nivel de protección, con ayuda del decálogo de artículos que contiene y con la potestad que tiene el Juez

para dictar medidas de protección, sin llegar a aplicar una sanción o condena a la persona que es el agresor.

En otras palabras, esta Ley permite ayudar a quien pueda tener algún tipo situación donde pueda sufrir de maltrato, ya sea de forma física o psicológica por alguna persona que sea parte de su mismo entorno familiar, para que pueda denunciar estos hechos con el Juez de competencia que corresponda.

En 2006, la Corte Suprema de este país estableció la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) con el propósito de brindar asistencia legal a aquellas personas que, en un estado de extrema vulnerabilidad, han sido víctimas de violencia doméstica y necesitan acceso a la justicia.

Una de las labores principales de la OVD es recopilar información estadística sobre la violencia familiar (ver documento adjunto). Según el informe anual más reciente publicado por la OVD, durante el período comprendido desde septiembre de 2008 hasta el 30 de octubre del último año, se recibieron 6746 denuncias y se identificó a 8354 personas que habían sufrido abusos familiares. (Ravalli, 2009).

Las más registradas fueron mujeres (82%). De los casos reportados, el 51% correspondió a personas en el rango de edad de 22 a 39 años, el 17% de 40 a 49 años, y el 15% eran niñas menores de edad (de 0 a 18 años). (Ravalli, 2009).

Sobre varones, existe un 18% de afectados, cifra de la cual el 61% es sobre denuncias donde los involucrados son niños, que sus edades oscilan entre 0 a 18 años. Esta data permite inferir también que, de las personas denunciadas, aproximadamente el 84% de ellas son parejas y un 31% el agresor es la ex pareja de las víctimas. (Ravalli, 2009).

De los casos que han ingresado a la OVD sobre las formas de violencia, la gran mayoría obedece a un tipo psicológico (89%), seguido de la de tipo física en un 68%, la de tipo económica 30% y la sexual 14%.

El informe indica que la sumatoria de estas cifras superan el 100%, ya que en muchos de los casos pueden concentrarse varios tipos de violencia. Según la investigación, la gran mayoría de los expedientes fueron enviados al fuero civil (4907), mientras que en 3382 casos se solicitó la intervención del fuero penal.

Este también indica que un mismo expediente puede ser enviado a distintos fueros, teniendo en cuenta el ilícito que se ha cometido. De igual forma, se han enviado 2248 documentos para una revisión jurídica y 1663 al sistema de salud. Por otro lado, existe un número de 417, donde la víctima no actuó, incluso después de haber sido informada y asesorada.

2.3. En Chile

Por otro lado, el país de Chile carece de normativa penal en cuando a malos tratos que se han dado en un ámbito familiar. Sin embargo, si tiene una ley donde anticipa procedimientos y castigos relacionados a actos de violencia intrafamiliar. Se hace referencia a la Ley N° 19.3255, la cual se encuentra vigente desde el año 1994.

Para el año 2005, se cuentan alrededor de 587 casos donde hubo violencia dentro del hogar, esa cifra por cada 100 mil habitantes. De igual forma, en el año 2015 hubo una data de 682,4. De igual forma, en Aysén hubo una data de 1053 casos, que incluso superaron al promedio nacional. (ARAYA & CARMONA, 2016).

En mayo del siguiente año, 2016 hubieron 14 feminicidios. Ello lleva a cuestionarse, ¿cuáles son las razones por las cuales el problema no aminora, que no haya una cultura diferente sobre violencia de género, que los medios aún sigan diciendo erróneamente que una mujer ha fallecido por celos o por amor? Desde el punto de vista de aquellos expertos, tiene mucho que ver que las políticas del gobierno, dado que estas son muy débiles, en muchos casos.

Si lo que se quiere es revisar la data, Thelma Gálvez, economista especialista en temas de género, analiza las partidas presupuestarias de los años 2012 y 2016: *“Dentro de los gastos presupuestados por el servicio para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, las transferencias que se hicieron en 2012 al sector privado fueron de \$6.889.591. En 2013 y 2014 el presupuesto se mantuvo estable cerca de los \$7 millones y medio y en 2015 hubo un gran salto que superó los \$11 millones. En 2016 los traspasos realizados por el mismo concepto ascendieron a \$12.411.587”* (ARAYA & CARMONA, 2016), detalla.

En ese mismo rubro, se tiene que en el 2012 las trasferencias al sector público fueron de \$834.267 y en 2016 de \$938.000.

Thelma Gálvez señala que se ha producido un importante incremento en las transferencias al sector privado y que los montos anuales han aumentado en términos reales, superando el crecimiento del IPC. Por otro lado, destaca que las transferencias al sector público han sido bastante reducidas y no han experimentado un aumento realmente. “Es positivo que haya aumentado el dinero para el sector privado, porque la mayoría de las entidades que se hacen cargo del problema son ONG”, explica Gálvez.

No obstante, las objeciones, que provienen de diferentes fuentes, se basan en que cuando se trata de presupuesto, es así que el cambio no puede depender de un solo servicio.

La economista asegura que los casos que atiende el Sernam son solo una parte pequeña de lo que ocurre en violencia. “Una mujer golpeada va al sistema de salud, recibe apoyo de Carabineros, y todo eso no pasa por el Sernam. Cuando una denuncia pasa por el sistema judicial y llega a Carabineros que atiende a la mujer violentada, lo hace con plata de su propio presupuesto, con dineros que no están destinados específicamente a atender casos de violencia intrafamiliar”, señala Gálvez, quien indica que, muchas de las víctimas no denuncian a sus agresores.

También agrega que, el presupuesto de las instituciones que apoyan estos casos deben contar con el presupuesto adecuado y repartir funciones de forma específica, por ejemplo, en los casos de Carabineros, la Policía y el Poder Judicial. “A veces Carabineros debe hacerse cargo de que se cumpla una orden de restricción por agresiones, pero no tiene los recursos suficientes para hacerlo”, explica (ARAYA & CARMONA, 2016).

2.4. En Colombia

En el caso de este país, su normativa se encuentra vigente a partir del 25.07.2001, iniciando con la Ley N° 599/2000, añadiendo un catálogo punitivo donde se relacionan 2 tipos penales en relación a la problemática de estudio, estos son la violencia intrafamiliar (Art. 229°) y el maltrato familiar, donde se incluye la privación de libertad. (PRETELL DIAZ, 2016).

En esa misma línea, se hace complejo concebir cuál es la razón de un dispositivo como el que está prescrito en su Código Penal, en su Art. 229°, más aún cuando “maltrato se refiere a los ámbitos físicos, psíquicos y sexuales, y su operatividad se produce siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”. En otras palabras, hace suponer que este delito en vez de tener un injusto propio, está sirviendo como algo parecido a una “red” que aleja la impunidad de aquellas conductas que se dan como la violencia intra doméstica.

Igualmente, el Art. 230° de dicho código incluye una forma de transgredir la libertad individual, en relación al punto familiar. Dicho criterio condena a quien "mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o en menor de edad sobre el cual no ejerce patria potestad" (PRETELL DIAZ, 2016).

Sobre esto, una de las principales complejidades que pueden encontrarse en cuanto a tipificación es la usanza del término “grupo familiar” o “núcleo familiar”, ambos términos descritos en el Art. 229° del C.P resultan excesivamente imprecisas.

Según la data del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país, se tiene que existe una incompetencia en cuanto a la penalización de violencia familiar. Esto es, tal y como indica su informe que hay más de 25.000 mujeres que han sido violentadas por sus parejas en el actual año, por otro lado, hay 4000 hombres que han sido afectados por este mismo tipo de violencia. Y, dentro de estas cifras existen alrededor de 5827 niños, niñas y adolescentes que también padecen esta problemática, siendo 8710 las personas entre hermanos, tíos, cuñados o hijos y 933 personas adulto mayor. (DIARIO SEMANA, 2016).

Departamentos más vulnerables	Departamentos menos vulnerables
<ul style="list-style-type: none"> - Bogotá (con 11.687 casos) - Antioquia (4.576) - Cundinamarca (3.471) - Valle del Cauca (3.029) - Santander (2.413) - Atlántico 2.178 - Boyacá (1.613) - Meta (1.577) - Norte de Santander (1.262) - Bolívar (1.232) - Tolima (1.204). <p style="text-align: center;">Por ciudades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bogotá (11.687) denuncias - Medellín (2.914) - Cali (1.496) - Barranquilla (1.370) - Villavicencio (1.274) - Soacha (1.257) - Cartagena (876) - Ibagué (822) - Neiva (715) - Santa Marta (707) - Bucaramanga (695) 	<ul style="list-style-type: none"> - Vichada con 16 hechos por violencia intrafamiliar - Guaviare (78) - Amazonas (108) - San Andrés (148) - Chocó (162) - Putumayo (182) - Caquetá (251)

De acuerdo con un estudio realizado en La Sabana, las formas de violencia más usuales son “aceptadas socialmente”, o en muchos casos, pueden pasar desapercibidos, entre ellos se tiene menospreciar, agitar, hacer bromas de mal gusto, botar o golpear objetos para mostrarse con autoridad y causar miedo, tener celos obsesivos que impidan que la pareja pueda frecuentar a familiares o incluso amigos; o amenazarla mediante intimidación diciendo que la abandonará o que cortará la relación.

Existen casos donde hay acciones violentas, especialmente contra mujeres, ello se ve reflejado en lo que indicaron 237 mujeres lugareñas, de

un total de 2876 familias, las cuales tenían edades de 16 a 81 años, siendo más de la mitad las que “justifican” de alguna forma la violencia, indicando que “la persona se lo merece”. (DIARIO SEMANA, 2016).

Así pues, un 70% indica que, la persona que es maltratada es la culpable en razón de que se queda con el que la maltrata, un 81% indica que a pesar de ello, la familiar debe continuar junta, un 55% indica que quienes agreden a su familia es porque su naturaleza es violenta, es decir, la normalizan, y un 18% indica que es factible recurrir a golpes cuando se quiere solucionar algún problema, siendo lo más terrible que el 90% indica que, “la ropa sucia se lava en casa”, razón por la cual se quedan en silencio ante cualquier situación o atropello.

2.5. En Ecuador

Según Torres Chávez, este país tiene una ley entorno a este tema desde 1995. Indicando que es un "sistema híbrido civil-penal, pues hay 'demanda', audiencia de conciliación y pagos de daños y perjuicios, pero también con competencia penal en los casos de violencia física, psicológica o sexual, con asistencia policial y allanamiento de domicilio”.

A pesar de esta normativa, algunos indican que se "está marginando al amparo de la ley al estimo que el hembrismo al que hace alusión el penalista ecuatoriano es solo aparente, en la medida en que el direccionamiento del objeto de la ley a los "miembros de la familia" hace que la referencia a "la mujer" sea innecesaria”.

El 06.05.94 inicia la Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia, “convirtiéndose en el brazo ejecutor de la ley 103, la misma que con la creación del Reglamento de la Policía Judicial, mediante decreto ejecutivo del 5 de junio del 2003 cambia el nombre a Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Judicial. Tiene como principales funciones Investigar las presuntas infracciones intrafamiliares bajo la

dirección de los fiscales, realización de actividades preventivas en relación con las infracciones descrita en dicha ley y Diseñar un sistema de registro de infractores y estadísticas de sentencias condenatorias en su área y remitir en forma periódica dicha información al Archivo Central”.

2.6. En Costa Rica

“La República de Costa Rica carece también de una regulación penal de los malos tratos en el ámbito doméstico, aunque existe una Ley de Violencia Doméstica con connotaciones para el Derecho Penal”.

Costa Rica ratificó el 28 de junio de 1995, mediante ley N°7499, la **CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA A LA MUJER**

"CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ", que en su artículo 1 señala: "debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en al ámbito público como en el privado" (INAMU, 2017). Y en el artículo 2 se especifica los espacios donde se puede perpetrar señalando lo siguiente "entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

- Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
- Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en las instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar
- Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra."

Se dice que dicha normativa afecta el sistema de justicia penal porque contiene una cláusula de remisión que aplica la naturaleza del delito a la jurisdicción en los casos en que se viola una orden de protección. En Acciones Especiales por Violencia Doméstica.

Esta normativa contiene algunas disposiciones de carácter transitorio, como la posibilidad de imponer medidas de protección, el abandono del agresor de la familia y la restricción de la presencia de la víctima en determinados lugares frecuentados por la víctima.

Determinar la magnitud de la violencia intrafamiliar en el país es difícil porque la detección y denuncia de estas situaciones es generalmente poco frecuente, y cuando son detectadas directa o indirectamente por las instancias gubernamentales, no siempre son debidamente registradas. Esto significa que hay mucho subregistro que dificulta entender el verdadero alcance del problema (INAMU, 2017).

Además de la violencia doméstica íntima, la sociedad costarricense carece de un reconocimiento general de otras formas de violencia contra las mujeres y sus consecuencias, como el acoso sexual, la trata de personas, la explotación sexual, la violencia paterna y la violencia psicológica. Las mujeres suelen ser víctimas de la violencia de género, que no solo es física sino también verbal, patriarcal y sexual.

3. LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SU TRATAMIENTO EN EUROPA.

“Más de 25 millones de mujeres europeas fueron víctimas de violencia machista en el año 2014, los países más castigados por este tipo de violencia son los del norte de Europa, que paradójicamente invierten más en programas de educación para la igualdad de género. A nivel europeo, 13 millones de ciudadanas experimentaron violencia física, 3,7 millones sufrieron violencia sexual y 9 millones, acoso sexual. Estas son las conclusiones principales sacadas de la primera macroencuesta europea sobre violencia machista que realizó la Agencia Europea de Derechos Humanos en marzo de 2014”.

“La violencia de género es un fenómeno muy complejo, y si a ello le añadimos el contexto cultural, político, y social tan diferente entre unos países y otros de la UE, hacen que cualquier comparación deba hacerse con mucha precaución.” Advierte Zulema Altamirano, especialista del Instituto Europeo por la Igualdad de Género.

Marisa Soleto, Directora de la Fundación Mujeres, avisa: "Hay que tener en cuenta dos cuestiones para hacer la comparación entre España y la UE y es que ni las legislaciones ni las formas de contabilización son homologables". "La orden de protección europea asegura que la protección impuesta en un Estado miembro se aplique en cualquier otro país de la UE al desplazarse la víctima"

Y efectivamente es así. “No existe al día de hoy una política unificada entre los países miembro para acabar con este fenómeno. Sin embargo, Soleto recuerda algo positivo y es que sí hay una orden de protección europea vigente, la cual sirve de instrumento para asegurar que la protección impuesta en un Estado miembro se aplique en cualquier otro país de la UE al que se desplace la víctima. Esta directiva cubre a cualquier persona beneficiaria de una medida de protección en su país de origen, como por ejemplo una orden de alejamiento".

Rosa María Fernández, coordinadora del **Lobby Europeo de Mujeres** en declaraciones a *Público* reflexiona: "Estos países, en principio, han hecho programas de educación para la no violencia, y tienen recursos para la igualdad entre las personas. Debería dar resultados. Parece sorprendente este informe".

3.1. En España

La importancia de hacer referencia al tratamiento que se le da a la violencia doméstica en la legislación, doctrina y jurisprudencia española radica en la estrecha relación existente entre nuestros países. A lo largo de la historia, los Códigos Penales de España han hecho énfasis en las relaciones entre personas que tienen vínculos familiares. Sin embargo, indica la evolución del Código Penal en 1989:

"Habitualmente, y con cualquier fin, ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que estuviera unida por análoga relación de afectividad, así como sobre los hijos sujetos a patria potestad, o pupilo, menor o incapaz sometido a su tutela o guarda de hecho".

No obstante, a pesar de las mejoras por incluir el delito de abusos dentro del círculo de la familia, existieron muchas insuficiencias del texto, las cuales empezaron a ser descubiertas bien sea por la doctrina o por la jurisprudencia. Por ello, en 1995 se intentó arreglar esta condición.

Así pues, el Art.153º indica: *"Habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad o sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela o guarda de hecho de uno u otro".*

La reforma que se dio en el año 1995, en el ámbito de la violencia doméstica, trajo consigo solo algunos progresos en cuanto a tipificar el maltrato físico, sin embargo, como indica ACALÉ SÁNCHEZ: "No significaban la perfección del precepto".

Por dicha insatisfacción y el efecto que trajo consigo en España donde todos los días se veían casos o situaciones de violencia intrafamiliar, es que se creó posterior a 4 años, la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La normativa del 09.06, indica un progreso sustantivo y formal, pues, se realizó una modificación de los Arts. 33º, 39º, 48º, 57º, 153º, 617º y 620º, predominando "como aspecto más novedoso y controvertido de la reforma de la incorporación de la violencia psíquica junto con la violencia física dentro del concepto de malos tratos".

CAPITULO III
NUEVO PROCESO PENAL DE LA VIOLENCIA DOMESTICA
LEY N° 30364

1. PRINCIPIOS DE INMEDIATEZ Y CELERIDAD

La necesidad de un proceso eficaz, justo y tramitado en un plazo razonable representa en la actualidad el principal clamor de la sociedad peruana, especialmente cuando se trata de un proceso penal, toda vez que implica la restricción del derecho a la libertad (Art. 2. 24 de la Carta Magna) y en tratados internacionales. En efecto, en un proceso penal el derecho a la libertad es restringido no sólo cuando se dicta un mandato de detención contra el procesado sino también cuando se dispone la comparecencia restringida, en la medida que el inculpado se ve impedido de ejercer varios de sus derechos conexos al derecho a la libertad como el de tránsito y el de libre comunicación. (Vélez Fernández)

En el problema de celeridad de los procesos y la pronta tutela de los derechos ha sido una constante doctrinaria no solo en nuestro país, acostumbrado a reformas publicitadas mas no eficaces, con lo cual retumba en los oídos de los justiciables el aforismo que reza “justicia que no es rápida, no es justicia”. Ya el insigne Couture señalaba que el tiempo es muy relevante; lo cual también nos da cuenta de la inversión de horas hombre perdidas como consecuencia de la tardía resolución de un proceso, problema que no compete exclusivamente a las partes procesales, sino también a la confianza de los ciudadanos y a la seguridad jurídica de nuestro país, al aumentarse la incertidumbre sobre el resultado de la actividad cognitiva del juez, expectativa que queda relegada en el tiempo y cuya solución resulta menos oportuna, cuanto más demora exista en su resolución. (Canelo Ravanal , 2006)

La celeridad procesal no es un principio abstracto: muy por el contrario, es el alma del servicio de justicia. Está claro que la existencia del debido proceso se debe necesariamente a la existencia de una justicia que no puede y no debe prolongar innecesariamente el litigio; ya que la sociedad debe recomponer su paz a través del proceso en el más breve plazo.

La celeridad procesal, como un ideal que la administración de justicia; tiene manifestaciones concretas en el proceso, tanto por parte del Poder Judicial, como por parte del ciudadano, quien muchas veces es quien contribuye a la lentitud procesal con la interposición dilatoria de escritos y demandas que comúnmente se hacen “para ganar tiempo” ante una determinada situación jurídica.

Al respecto, debemos mencionar al doctor Pablo Sánchez Velarde: “la celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad procesal, sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las diligencias judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento. Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en general, puede invocarse el mismo principio aún cuando es posible su exigencia a título de derecho, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”. (Sánchez Velarde, 2004)

El vocablo inmediatez expresa convencionalmente proximidad o contigüidad a algo, cercanía física a un objeto material que es susceptible de convertirse en un método de conocimiento e interacción con el objeto de que se trate.

Desde una perspectiva práctica, la inmediatez se encuadra dentro de la categoría de los principios relacionados con los actos procesales o principios procesales, particularmente los verbales y de concentración, y existe un admirable esfuerzo general por ampliar su alcance en la literatura especializada. Su validez vinculante se extiende más allá del momento del proceso tradicionalmente activado, es decir, en la etapa de clarificación.

Esa tendencia se pone de manifiesto en las diversas versiones del principio de inmediatez que se proponen según se tome como punto de referencia el objeto de la causa, los sujetos o los actos procesales, de modo individual o combinado. En este doble sentido, se le considera un principio atinente a las relaciones entre el juez o tribunal sentenciador y el objeto del proceso, o como una imposición al juzgador de hallarse en contacto inmediato con los demás sujetos que intervienen en el proceso, o con los actos de parte; o, integrando algunas de las anteriores.

2.- PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PROTEGEN A MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA

Nuestro país, fue uno de los primeros países latinoamericanos que emitió una norma contra la violencia doméstica, tal como se indicó en los capítulos anteriores. Veamos ahora, su evolución legislativa:

I. Ley N° 26260, establecen política del estado y de la sociedad frente a la violencia familiar:

Publicado el 24 de diciembre de 1993, vigente desde el 25 de diciembre de 1993. Esta ley estableció la política del estado y de la sociedad frente a la violencia familiar, así como las medidas de protección que corresponden. A los efectos de la presente ley, se entenderá por violencia familiar cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan.

II. D.S N° 002-98-JUS Reglamento de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, publicada el 25 de febrero de 1998, vigente desde el 26 de febrero de 1998. Actualizada al 11 de octubre de 2013.

Se entiende por "Ley al Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-97-JUS. El presente Reglamento tiene como objeto establecer las normas y procedimientos para la mejor aplicación de la política del Estado y de la Sociedad frente a la violencia familiar, así como para ejecutar efectivamente las medidas de protección a las víctimas de tales actos".

III. Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Dos mil quince días se predicó el día 6 de noviembre.; Esta normativa establece mecanismos, iniciativas y políticas integrales para la prevención, atención y protección de las víctimas, así como la reparación de daños y perjuicios; Dispone la tortura, sanción y reeducación de los agresores condenados para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y familiares, asegurando el pleno ejercicio de sus derechos.

- IV. **Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar**, “vigente desde el 27 de julio del 2016. El presente reglamento tiene por objeto regular los alcances de la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar –en adelante la Ley”.

Estas normas vigentes desde noviembre del 2016, vienen siendo aplicadas progresivamente, ya que su reglamento se emitió siete meses después; y a la fecha, ha sufrido diversas modificaciones, incorporando algunos tipos en Nuestro Código Penal vigente; veamos a continuación el desarrollo procesal de una denuncia por violencia familiar:

2.1.- COMPETENCIA

El artículo 14 de la ley N° 30364 establece que: “Son competentes los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar. En este nuevo esquema del proceso penal establecida por esta Ley la competencia está a cargo de los Juzgados de Familia obviando la participación de los Fiscales de Familia. Solo cuando la denuncia comprenda como víctimas a niñas, niños y adolescentes, o personas agresoras menores de 18 años y mayores de 14 años, ésta también se presenta ante la Fiscalía de Familia o la que haga sus veces. La Fiscalía de Familia interviene en todos los casos de violencia donde las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, desde la etapa policial inclusive, en el marco de la competencia asignada por el Código de los Niños y Adolescentes. El Juzgado de Familia o Mixto, de ser el caso, es competente para conocer la denuncia a través del atestado policial o por la denuncia directa, escrita o verbal, de la víctima, o por cualquier otra a su favor y también por la Defensoría del Pueblo”.

Un tribunal penal, o persona que haga sus veces, y un juez de paz en ejercicio de la jurisdicción penal, serán responsables de la sanción de los que

cometan delitos o faltas; adjudicar, conceder y determinar la indemnización correspondiente; y recomendar medidas de seguridad o de precaución.

La derogada Ley N° 26260 en su artículo 7 reconocía “la participación del Fiscal Provincial de Familia para dar trámite a las peticiones que se formulen verbalmente o por escrito en forma directa por la víctima de violencia, sus familiares; actuar de oficio ante el conocimiento directo de los hechos; dictar medidas de protección; solicitar medidas cautelares pertinentes al Juez Especializado de Familia; convocar a la víctima y al agresor a una audiencia de conciliación; interponer demanda ante el Juez de Familia. Correspondía al Ministerio Público, según el artículo 8 de la derogada, visitar periódicamente las dependencias policiales para conocer sobre la existencia de denuncias sobre violencia familiar, e intervenir de oficio cuando corresponda”.

2.2.- EL PROCESO PENAL

2.2.1.- DENUNCIA

Las denuncias se pueden realizar por escrito o de forma oral. En caso de denuncia oral, el acta se levanta sin otro requisito que el de recapitular los hechos.

Cualquiera puede denunciar actos de violencia para dañarse a sí mismos o a otros sin la presencia de un adulto. En estas circunstancias, recibir una denuncia garantiza la seguridad de los niños, niñas y adolescentes hasta que se tomen las debidas garantías. Una vez recabadas las denuncias e identificadas las circunstancias del abandono, los casos aceptados son informados a la Unidad de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables para que actúe dentro de su mandato.

Si la Policía Nacional del Perú tiene conocimiento de un caso de violencia contra la mujer o miembros de un grupo familiar en sus comisarías nacionales, deberá llevar su información al Juzgado de Familia o dentro de veinte de los ejecutores de sus funciones. Después de cuatro horas de detección real, envíe un certificado que resuma el proceso.

No es necesario presentar los resultados de un examen físico o psicológico, pericia de cualquier naturaleza o violencia visible, para presentar una denuncia. Si la víctima o denunciante posee documentos que sirvan de prueba, serán aceptados e incorporados al expediente de la Policía Nacional, Ministerio Público o Departamento de Justicia.

2.2.2.- FLAGRANCIA

En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos.

En estos casos, la Policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega del detenido y las demás circunstancias de la intervención, debiendo comunicar inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para las investigaciones correspondientes y al juzgado de familia o su equivalente para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas para el bienestar de las víctimas. Realizadas las acciones previstas en el artículo 16 de la Ley, el juzgado de familia avisa a la autoridad correspondiente, que es la fiscalía.

2.2.3.- COMPETENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional del Perú, independientemente de la especialidad, está obligada a recibir, registrar y tramitar de inmediato las denuncias verbales o escritas de actos de violencia que presente la víctima o cualquier otra persona que actúe en su favor sin necesidad de estar investida de representación legal. El registro se realiza de manera inmediata en el aplicativo respectivo del Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL) y, en ausencia de éste, en el Cuaderno, Libro o Formulario Tipo. El registro de la denuncia es previo a la solicitud del examen pericial.

El diligenciamiento de las notificaciones le corresponde a la Policía Nacional del Perú y en ningún caso puede ser encomendada a la víctima, bajo responsabilidad.

La Policía Nacional del Perú remite al Juzgado de Familia, dentro de las veinticuatro horas de recibida la denuncia el informe o atestado policial. El informe o atestado policial incluye los medios probatorios a los que tuviera acceso la Policía Nacional del Perú de manera inmediata, tales como certificados médicos o psicológicos presentados por las víctimas, grabaciones, fotografías, mensajes a través de teléfono o medios digitales, testimonio de algún testigo, entre otros.

Ante la comisión de hechos de violencia que puedan constituir delitos, la Policía Nacional del Perú continúa las investigaciones bajo la dirección del Ministerio Público, sin perjuicio de trasladar la denuncia y sus actuados al Juzgado de Familia para el dictado de las medidas de protección correspondientes.

Sin perjuicio de las labores de investigación señaladas en el artículo anterior, En caso de flagrancia, se procede conforme a lo previsto por el artículo 446 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de comunicar los hechos al Juzgado de Familia para que adopte las medidas correspondientes. En el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal se aplica lo señalado en este artículo en cuanto sea pertinente, en concordancia con lo dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes.

La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georeferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar una respuesta oportuna.

Sin perjuicio de ello, el Juzgado de Familia ordena la ejecución de las medidas de protección social a las instituciones, servicios y programas del Estado conforme a las competencias señaladas en la Ley. La institución remite el informe correspondiente en el plazo de cinco días hábiles, bajo responsabilidad, sobre la ejecución de las medidas al Juzgado de Familia correspondiente, con las recomendaciones que considere pertinentes, conforme del artículo 21 de la Ley. La continuidad o variación de la medida de protección aplicada por el Juzgado de Familia, se efectúa en base a los informes recibidos. El Juzgado de Familia, solicita cuando lo considere necesario la remisión de informes adicionales a la institución sobre la ejecución de las medidas. Cuando la medida comprenda el inventario de bienes, ésta se diligencia por el propio Juzgado que la ordena.

2.2.4.- ACTUACIÓN DEL JUZGADO COMPETENTE

En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas que sean necesarias. Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas.

Si el Juzgado de Familia de turno recibe en forma directa la denuncia verbal o escrita por violencia, procede conforme al artículo 15 de la Ley y aplica la ficha de valoración del riesgo que corresponda, cita a audiencia y ordena la actuación de pruebas de oficio de considerarlo necesario.

Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del Código Procesal Penal.

En la actuación de los operadores de justicia, originada por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se evita la doble victimización de las personas agraviadas a través de declaraciones reiterativas y de contenido humillante. Los operadores del sistema de justicia deben seguir pautas concretas de actuación que eviten procedimientos discriminatorios hacia las personas involucradas en situación de víctimas.

Los antecedentes y la documentación correspondiente a los procesos se mantienen en reserva, sin afectar el derecho de defensa de las partes. En caso que las víctimas se encuentren o ingresen a un hogar de refugio temporal se mantiene en absoluta reserva cualquier referencia a su ubicación en todas las instancias de la ruta de atención, bajo responsabilidad.

En el caso de niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos de violencia se deberá guardar debida reserva sobre su identidad.

2.2.5.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Recabada la denuncia por el Ministerio Público, este procede a aplicar la ficha de valoración de riesgo y dispone la realización de los exámenes y diligencias correspondientes, remitiendo los actuados en el plazo de 24 horas al Juzgado de Familia para la emisión de las medidas de protección a que hubiera lugar. Si de los hechos se desprende la presunta comisión de un delito también se pondrá en conocimiento de la Fiscalía Penal, de ser el caso.

La Fiscalía de Familia o Mixta remite lo actuado al Juzgado de Familia, a efectos de que proceda a evaluar el otorgamiento de medidas de

protección o cautelares en favor de la víctima. Asimismo, pone en conocimiento del Juzgado de Familia la situación de las víctimas, en particular en casos de feminicidio y tentativa de feminicidio a fin de que puedan ser beneficiarias de medidas de protección o cautelares pertinentes. De igual modo, informa al Juzgado de las disposiciones que pudiera haber dictado con arreglo al artículo 21 del reglamento. Todas las actuaciones de la Fiscalía de Familia se remiten en el término de veinticuatro horas.

Cuando la Fiscalía Penal toma conocimiento por cualquier medio de un presunto delito que configure violencia contra la mujer o quien integre el grupo familiar y verifique que no existe un procedimiento de protección en curso, aplica la ficha de valoración del riesgo y remite copias certificadas de lo actuado al Juzgado de Familia dentro de las veinticuatro horas a efectos de que evalúe el otorgamiento de las medidas de protección o cautelares, sin perjuicio de continuar el trámite de la investigación penal. Igual procedimiento sigue la Fiscalía de Familia o Mixto cuando se trata de adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

2.3.- MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN

El Tribunal de Familia puede realizar la audiencia en presencia o ausencia del demandante. Si la situación lo amerita, recomienda estas medidas dentro de las 72 horas que establece la ley. A los efectos de enumerar las condiciones en que el tribunal considere necesario entrevistar al imputado, se considera la desventaja geográfica en las zonas rurales. Si el imputado comparece a juicio, se le notificará del mismo procedimiento (204° del Código de Procedimiento Civil)

En caso de que se identifique un caso de alto riesgo de violencia según la evaluación del juzgado de familia, se tomarán medidas de protección o cautelares de manera inmediata en favor de la víctima para su seguridad.

El que “desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad prevista en el Código Penal. La medida de protección o cautelar dictada por el Juzgado de Familia, surte efecto hasta que la sentencia emitida por el Juzgado Penal o Juzgado Paz Letrado en materia de faltas, quede consentida o ejecutoriada o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean impugnados”.

2.3.1.- MEDIDAS CAUTELARES

El Juzgado de Familia puede ordenarlas ya sea de forma voluntaria o a solicitud de alguna de las partes involucradas, cuando se tengan los presupuestos del Art. 611° del Código Procesal Civil. Por ello, la víctima, antes de la expedición de la sentencia penal o del Juzgado de Paz Letrado, puede plantear ante el Juzgado competente las pretensiones civiles de fondo. A tal efecto, el Juzgado de Familia informa a las víctimas que cuentan con servicios jurídicos gratuitos para recibir asistencia en su derecho de acción sobre las pretensiones civiles antes señaladas.

2.3.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El Juzgado de Familia dicta la medida de protección más idónea para el bienestar y seguridad de la víctima, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, los resultados de la ficha de valoración del riesgo, la pre existencia de denuncias por hechos similares, la relación de la víctima con la persona denunciada, la diferencia de edades o relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada y, la situación económica y social de la víctima, entre otros aspectos que revelen vulnerabilidad. Las medidas de protección son céleres y eficaces de lo contrario generan responsabilidad funcional.

Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran, entre otras, las siguientes:

1. Retiro del agresor del domicilio.
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine.
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación.
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección.
5. Inventario sobre sus bienes.
6. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares.

Además de las medidas de protección señaladas en la Ley el Juzgado de Familia puede dictaminar:

1. Prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima u otro lugar que ésta frecuenta o de acercarse a una distancia de 300 metros.
2. Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o cambiar de titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes.
3. Prohibición a la persona agresora de trasladar niños, niñas o personas en situación de cuidado del grupo familiar.
4. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.

5. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de sus víctimas o sus familiares.

El dictado de las medidas no impide la adopción de medidas administrativas en los procedimientos sectoriales establecidos.

Los Juzgados de Familia tienen competencia para variar las medidas de protección o cautelares hasta que el Juzgado Penal o del Juzgado de Paz Letrado tengan conocimiento del caso. Las medidas de protección pueden ser modificadas de oficio o a pedido de parte cuando se produzcan hechos nuevos, si se alteran las circunstancias que motivaron la decisión o aquellas no sean suficientes para garantizar la seguridad o bienestar de la víctima o ante el incumplimiento de las medidas de protección inicialmente dictadas.

2.3.3.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Las medidas de protección social tienen como objetivo contribuir a la recuperación integral de las víctimas y promover su acceso a los servicios de asistencia y protección social públicos o privados, con especial énfasis en el caso de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Las medidas dictadas por el Juzgado de Familia se extienden a todas las víctimas conforme al inciso 1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley. En caso de feminicidio y tentativa de feminicidio, trata de personas y otras formas de violencia consideran los lineamientos señalados en los protocolos especializados.

2.3.4.- REGISTRO DE VICTIMAS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El Poder Judicial, a través de su sistema informático, registra a nivel nacional las medidas de protección y cautelares otorgadas, incluyendo las ordenadas por los Juzgados de Paz, con la finalidad de coadyuvar a la mejor protección de las víctimas. La Policía Nacional, a través de su

sistema informático, registra a nivel nacional las medidas de protección cuyo cumplimiento esté a su cargo.

Ambas instituciones brindan información al Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar a cargo del MIMP. La información a registrar contiene como mínimo los siguientes datos:

Nombres y apellidos, documento de identidad, dirección, edad, sexo, correo electrónico y teléfonos de las víctimas sujetas a medidas de protección y cautelares	Datos de la persona procesada
Números de integrantes de la familia.	Datos del juzgado que otorgó las medidas.
Medida de protección o medida cautelar.	Nivel de ejecución de las medidas.
Tipos de violencia.	Otra información que se considere necesaria.

2.4.- REMISIÓN DEL EXPEDIENTE

Después de que el Juzgado de Familia haya emitido una medida cautelar, se envía el expediente al Ministerio Público Penal o al Juez de Paz según sea el caso. Si existiera incertidumbre en cuanto a si se trata de un delito o falta, se remitirá a la Sala Penal. En cuanto a las Reglas 21 y 27, la Corte señaló que podrían ser recomendadas a partir del expediente.

El envío de actuaciones al juzgado de familia por parte de fiscalías penales y jueces de paz está prohibido en todo momento. Sin embargo, si se trata de un caso de violencia contra menores, ya sea por falta o delito grave, la fiscalía provincial penal o mixta deberá remitir el caso al juzgado de familia para realizar una evaluación inicial en interés del menor y proteger sus derechos.

2.5.- ACTUACIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ

En estos casos, el Juez de lo Penal con conocimiento del Juzgado de Familia otorga las medidas de protección idónea o en favor de la víctima. Cuando los hechos mixtos constituyan delito contra la persona por el hecho delictivo o para proceder conforme a sus atribuciones, el Juez de Paz las prescribirá a favor de la víctima y practicará el procedimiento previsto por su ley al respecto. Para la determinación de los salarios se tendrá en cuenta, en lo aplicable, la Ley Núm. 30364.

Cuando el Juez de Paz tenga la consideración de delito, con el asesoramiento del Juzgado de Familia, dictará y ordenará estas medidas. Las denuncias se presentan por escrito u oralmente ante un Juez de Paz, actuando dentro de la jurisdicción de la Sala Penal o Fiscalía Mixta. Cuando la Policía Nacional del Perú toma conocimiento de casos de violencia contra las mujeres y miembros de grupos familiares, los denuncia a los tribunales de sus comisarías, que no cuentan con juzgado de familia ni juez de paz. Desde 24 horas desde el incidente, se envía un breve informe policial a la policía junto con una hoja de evaluación de riesgos relevante que resume las actividades, acorde al Art. 15°.

2.6.- SENTENCIA

Las condenas que pongan fin a los procesos por delitos que impliquen actos de violencia contra la mujer y sus familiares pueden dar lugar a la absolución o la condena. En el primer caso, el juez se remite a la decisión de la orden de protección dictada por el juzgado de familia o en paralelo, las medidas cautelares de protección de las acciones civiles decididas en ese caso no son válidas a menos que sean confirmadas en un caso particular.

Salvo lo dispuesto en el artículo 394 del Código Procesal Penal, y el Decreto Legislativo 957 y en su caso:

La continuidad o modificación de las medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia o equivalente	El tratamiento terapéutico a favor de la víctima
El tratamiento especializado al condenado	La continuidad o modificación de las medidas cautelares que resguardan las pretensiones civiles de tenencia, régimen de visitas, suspensión, extinción o pérdida de la patria potestad, asignación de alimentos, entre otras
Las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual de la víctima y del agresor deben adoptar, para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, salvo que hayan sido confirmadas en instancia especializada	La inscripción de la sentencia en el Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo del Ministerio Público

Si se utiliza un idioma o idiomas distintos al español, en los casos en que no sea posible la traducción de la sentencia, el juez garantiza la presencia de una persona que pueda informarles de su contenido.

Los Juzgados de lo Penal y de Paz interactúan bajo la responsabilidad de quienes han aprobado sentencias dictadas por sus despachos o dado ejecución de medidas cautelares. El Juzgado de Familia elabora informe final sobre medidas cautelares o cautelares y archiva diligencias especiales, incluyendo su incidencia.

3.- RESUMEN DE PLAZOS

Se muestra el diagrama de flujo del proceso legal de la Ley N° 30364, compensado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la página del Poder Judicial de nuestro país.

Etapa de protección		Etapa de sanción	
PNP	Juzgado de Familia o Mixto	Fiscalía Penal	Juzgado Penal
<ul style="list-style-type: none"> • Llena la ficha de valoración del riesgo según los hechos denunciados (art. 28). • Debe remitir el atestado que resume lo actuado a los juzgados de familia o mixtos en 24 horas (art. 15). • Implementa las medidas de protección. Debe tener un mapa gráfico de registro de todas las víctimas con medidas de protección de la jurisdicción y habilitar un canal de comunicación. Puede coordinar con Serenazgo para respuesta oportuna (art. 23). 	<ul style="list-style-type: none"> • En 72 horas debe evaluar y el caso y resolver en audiencia oral la emisión de medidas de protección + medidas cautelares como alimentos, tenencia, bienes, etc. (art. 16). • Luego remite los actuados a la fiscalía penal para investigación con miras a una sanción penal (art. 16). • Puede recibir denuncias verbales o escritas directamente sin formalidades (art. 15). • Medidas de protección: retiro agresor, impedimento de acercamiento, prohibición uso de armas, cualquiera otra necesaria (art. 22). 	<ul style="list-style-type: none"> • Recibe de los juzgados de familia o mixtos los casos y los tramita con las reglas del Código Procesal Penal (art. 16). • Las medidas de protección se extienden hasta el pronunciamiento fiscal si se decide no presentar denuncia penal, salvo que haya impugnación (art. 23). 	<p>Sentencia absolutoria: da término a las medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia o mixto. Las medidas cautelares cesan salvo que hayan sido confirmadas en instancia especializada (art. 20).</p> <p>Sentencia condenatoria: además de lo establecido en el artículo 394 del Código Procesal Penal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - continuidad o modificación de las medidas de protección. - tratamiento terapéutico de la víctima y tratamiento especializado al condenado. - continuidad o modificación de las medidas cautelares - inscripción de la sentencia en el Registro Único de víctimas y agresores - cualquier otra medida (art. 20).
<p>En casos de flagrancia procede la detención inmediata, incluso con allanamiento. Los hechos se comunican a la fiscalía penal para las investigaciones y al juzgado de familia o mixto para que se pronuncie sobre las medidas de protección + cautelares (art. 17).</p>			

Victima niña, niño o adolescente o mujer: declaración bajo la técnica de entrevista única que es prueba preconstituida. Víctima mayor de edad puede realizarse bajo la misma técnica. Juzgado puede practicar declaración ampliatoria de la víctima solo para aclarar, complementar o precisar algún punto de la declaración (art. 19).
Quien omite, rehúsa o retarda, sin causa justificada, algún acto a su cargo en los procesos originados por hechos que constituyen actos de violencia hacia las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar comete los delitos sancionados en los art. 377 y 378 del Código Penal (art. 21).
Quien desobedece, incumple o resiste la medida de protección comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad (art. 24).
Prohibida la confrontación y conciliación. Reconstrucción sin presencia de víctima, salvo solicitud de víctima > de 14 años (art. 25).

4.- EL DELITO DE LESIONES LEVES

Acorde al Art. 22° de la normativa penal, por tratarse de un daño leve, se considera que el delito es subsidiario del delito de daño grave. Por tales consideraciones, este delito se considera dentro del ámbito de la falta, en el cual se debe aplicar el principio de oportunidad y contrato restaurativo, ya que su impacto no se extiende más allá de la sociedad, se impone no más de 2 años, en cuanto a la pena.

4.1. El artículo 122 del Código Penal y las modificatorias realizadas por Ley N° 30364

4.1.1. Texto legal del artículo 122° del Código Penal y sus submodalidades antes de la modificatoria realizada por la Ley N° 30364

“Hasta antes de la publicación y entrada en vigencia de Ley N° 30364 (publicada el 23 noviembre 2015), el artículo 122° del Código Penal contemplaba el tipo básico del delito de lesiones leves y en los subtipos de los artículos 122°-A y 122°-B se preveía las submodalidades agravadas de lesiones leves cuando la víctima es un menor de edad y lesiones leves por violencia familiar, cuyos textos originales eran los siguientes”:

<i>Artículo 122°.- Lesiones leves</i>	<i>Artículo 122°-A.- Formas agravadas. Lesiones leves cuando la víctima es un menor</i>
<p>El que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento cincuenta días-multa.</p> <p>Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años</p>	<p>En el caso previsto en la primera parte del artículo 122, cuando la víctima sea menor de catorce años, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.</p> <p>Cuando el agente sea el tutor o responsable del menor, procede además su remoción del cargo según el numeral 2 del artículo 554 del Código Civil e inhabilitación conforme a lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 36 del presente Código.</p> <p>Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de nueve años</p>
<p><i>Artículo 122°-B.- Formas Agravadas. Lesiones leves por violencia familiar</i></p> <p>El que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud por violencia familiar que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y suspensión de la patria potestad según el literal e) del artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes.</p> <p>Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de doce años</p>	

4.1.2. Texto legal del artículo 122° del Código Penal bajo la modificatoria realizada por la Ley N° 30364

Posteriormente el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323, del 06.01.2017, modifica el artículo 122 del Código, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 122. Lesiones leves

1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será

reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.

2. La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente y el agente pudo prever ese resultado.

3. La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación de acuerdo al artículo 36, cuando:

a. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas.

b. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición.

c. La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.

d. La víctima se encontraba en estado de gestación;

e. La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, y la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B.

f. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación.

g. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.

h. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía.

4. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años si la víctima muere como consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el agente pudo prever ese resultado.”

A su vez, **el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323**, publicado el 06 enero 2017 incorpora el artículo 122-B, de cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 122-B.- Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar

El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36.

La pena será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes:

- 1. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.*
- 2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía.*
- 3. La víctima se encuentra en estado de gestación.*
- 4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición.”*

Así, se tiene que las lesiones que causen menos de diez días de incapacidad médico legal, así como la afectación psicológica, dentro de un contexto de violencia familiar, constituye delito y por tanto, dificulta más el panorama para los jueces de paz en las zonas rurales, quienes están facultados para intervenir en dichos proceso, ante la falta de los juzgados especializados.

CAPITULO IV

ACTUACIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE NOMINACION EN EL NUEVO PROCESO PENAL (LEY N° 30364)

1.- ANTECEDENTES DE LA JUSTICIA DE PAZ EN EL PERÚ

Con los españoles y el inicio de la Colonia se transplantaron todas las instituciones de la península ibérica, implementándose un sistema de administración de justicia, que se ejercía por medio de los cabildos (alcaldes ordinarios) “La constitución de Cádiz de 1812 (artículo 282) indica, por primera vez a nivel normativo, que es atribución del alcalde de cada pueblo ejercer el oficio de conciliador. Esta norma, aplicable en el Perú por ser colonia española, delineó un sistema conciliatorio para la solución de los problemas cotidianos entre vecinos del mismo pueblo. El dispositivo legal consideró que, aparte de velar por la infraestructura y organización del pueblo, los alcaldes debían ser responsables de mantener el equilibrio de las relaciones entre los pobladores, otorgándoles con ese fin la potestad de administrar justicia. La Constitución de 1823 reafirma esa postura”. La elección de estos alcaldes ordinarios, a los que se denominó alcaldes de hermandad en zonas urbanas, se realizaba en los llamados Colegios Electorales de parroquia que reunían a los electores de cada distrito, pueblo o zona.

La Constitución de 1823 en su artículo 144 exigía a los candidatos ser vecino del lugar cuando menos 10 años antes de la postulación. En este proceso es interesante destacar la sobrevivencia de la justicia de paz que en palabras de Silvia Loli se deben a la imbricación inicial con las municipalidades. "La supervivencia de la institución fue posible porque la justicia de paz había sido considerada integrante de los municipios y del Poder Judicial a la vez. La poca claridad sobre su ubicación en el nuevo orden de cosas que se venía gestando permitió que, desaparecido uno de los espacios de referencia, el otro le sirviera como soporte”

La constitución de 1828 deslinda el conflicto sobre la ubicación del juez de paz y lo ubica en el rubro dedicado a la administración de justicia y reafirma la capacidad

conciliatoria de los jueces de paz. La capacidad de conciliación fue oficialmente establecida en los reglamentos para jueces de paz de 1834 y 1839. A partir de 1836, los jueces de paz se convirtieron en miembros permanentes del Poder Judicial y se crearon demarcaciones judiciales que les otorgaron independencia y autonomía en su organización. Durante el gobierno provisional de José Luis Orbegoso se dispuso mediante la Ley Orgánica de Municipalidades, que en los lugares que no eran capitales de provincia debía haber jueces de paz.

La comisión encargada de redactar el reglamento de justicia de paz decidió separar a la justicia de paz de esas discusiones, devolviéndola al ámbito de las municipalidades. En 1855, cuando los municipios aún no habían sido establecidos, el presidente Castillo tomó la decisión temporal de que los jueces de paz fueran designados según las cortes. Esta inexistencia de las municipalidades ubicó a los jueces de paz a la estructura judicial en la posición más baja. Pero este reglamento le permitía al juez de paz superar su ubicación jerárquica al establecerse la conciliación como fase previa al inicio de una litis. De esta manera conocían todos los casos civiles e intentaban llegar a un acuerdo. La conciliación también era posible en casos penales perseguibles de oficio. Este reglamento señala que:

“La realidad impuso la necesidad de contar con los jueces de paz mientras el nuevo sistema no pudiera valerse como alternativa única. Este razonamiento introdujo una variable a la relación Poder Judicial/ 50 justicia de paz: la primera estaba respalda por el Estado mientras la segunda era un “mal necesario”, no remontable en el corto plazo.”

Con la norma N° 4871, del 03.01.1924 se dividió la justicia de paz en letrada y no letrada, creando una jerarquía dentro del Poder Judicial en la que los jueces de paz no letrados quedaron en el nivel más bajo. Esto los vinculó principalmente con las clases más pobres, quienes solo podían permitirse procesos judiciales por problemas de poco valor monetario. La existencia de la justicia de paz fue vista como incompatible con las exigencias de la modernidad, lo que denota un Estado y Poder Judicial débiles, un desarrollo centralista que no incentiva el trabajo legal profesional en zonas remotas y pobres, y un sistema jurídico carente de las condiciones necesarias para su fortalecimiento y desarrollo.

2.- LA JUSTICIA DE PAZ

El juez de paz «es la autoridad encargada de administrar justicia en su ámbito territorial. El juez de paz es un vecino honorable de la comunidad» (Crisóstomo Meza, 2016). En el Perú la normativa relacionada con el juez de paz data desde la Constitución de Cádiz de 1812 y desde allí ha atravesado varias modificaciones. La constitución promulgada en 1828 suprime al juez de paz del rubro municipal y lo ubica en el rubro de administración de justicia donde reafirma su capacidad conciliatoria. «De esta manera, los jueces de paz no letrados se convierten en el nivel más bajo del poder judicial, ligándose a las clases más pobres porque solo ellos se toman del trabajo de litigar judicialmente por problemas de escaso valor dinerario» (Balbuena Palacios, 2006).

Los jueces de paz no letrados son elegidos en asambleas comunales y están presentes, sobre todo, en las zonas rurales. Así pues:

La justicia de paz es uno de los mecanismos más antiguos que se han desarrollado para que las comunidades rurales alejadas de las ciudades puedan acceder al sistema de justicia, y que debido a su eficacia posteriormente se entendió también a los centros urbanos. Está reconocida en la Constitución de 1993 de Perú. De esta manera se inviste de poderes a un miembro de la comunidad y elegido por la comunidad, para que resuelva conflictos de sus integrantes aplicando su leal saber y entender, así como las costumbres de la zona. (De Belaunde, 2006, pág. 123).

2.1.- Características de la justicia de paz

- Es llevada a cabo por un miembro de la comunidad elegido por voto popular, que no necesita ser abogado,
- Ayuda en conflictos cotidianos como problemas vecinales o familiares, pequeñas disputas económicas y asuntos de violencia familiar, entre otros.
- Se basa en la conciliación, buscando acuerdos aceptables para todas las partes.
- La cercanía geográfica y cultural con los usuarios es importante, y el juez suele hablar el idioma predominante del lugar.

- Este servicio es gratuito, excepto por los costos de las diligencias realizadas fuera del despacho del Juez.
- La población controla tanto su designación como la supervisión de sus actividades.

2.2.- ¿Cuándo se aplica el derecho consuetudinario?

Según el (Instituto de Defensa legal & Justicia Viva, 2007):

Siempre el límite para el derecho consuetudinario son los derechos humanos fundamentales. Hay situaciones y problemas en los que el Juez de Paz NO puede conciliar y NO puede aplicar las costumbres comunales. Un Juez de Paz no podría, por ejemplo, aceptar que la gente decida un linchamiento o la aplicación de azotes a una persona, o pretender reconciliar a una víctima de violencia familiar, o aceptar una compensación frente a una violación, porque van contra los derechos de las personas afectadas, aunque fueran culpables.

En ocasiones, los Jueces de Paz recurren a las normas de la comunidad para solucionar conflictos que no son regulados por el derecho estatal, como temas relacionados con la vida de los habitantes, la crianza de los hijos, el uso de recursos naturales, entre otros. Estas normas son parte del derecho consuetudinario.

También, el artículo 66° de la Ley Orgánica del Poder Judicial menciona: *"los jueces de Paz, preservando los valores que la Constitución consagra, respetan la cultura y costumbres del lugar"*(Instituto de Defensa legal & Justicia Viva, 2007).

2.3.- Financiamiento del juzgado de paz

El Juez de Paz trabaja sin recibir sueldo del Estado. Tampoco puede cobrar por administrar justicia. Sólo puede realizar cobros por sus funciones notariales y por los gastos que ocasionen las diligencias fuera del Juzgado.

De acuerdo a las normas el financiamiento debería ser compartido entre los Concejos Municipales y la comunidad, para brindar los locales de funcionamiento, y el Poder Judicial que debe proporcionar los útiles como papel, mobiliario, máquina de escribir entre otros, sin embargo, esto sucede con poca frecuencia.

2.4.- ¿Cómo funciona la justicia de paz en el país?

Según Instituto de Defensa legal & Justicia Viva (2007):

Existen en el Perú más de 5,000 Jueces de Paz, la mayoría ubicados en las zonas rurales, pero también ejerciendo en las principales ciudades de Arequipa, Trujillo, Chiclayo e Ica

3.- EL JUEZ DE PAZ DE NOMINACION

Es la autoridad encargada de administrar justicia en su ámbito territorial. El Juez de Paz es un vecino honorable de la comunidad, que se ha ganado el aprecio y respeto de sus vecinos por su espíritu de servicio. Sabe que no va a ganar dinero como Juez de Paz, pero quiere ayudar a que los vecinos puedan vivir en paz y a resolver sus problemas cotidianos. Esto quiere decir que tiene una doble responsabilidad: ante el Poder Judicial y ante sus vecinos, que lo han elegido. Tiene por tanto una clara vocación de servicio a los demás.

3.1.- ¿Quiénes pueden presentarse para ser jueces de paz?

Tal cual indica el Art. 5° de la Ley No. 29824, son:

Ser peruano de nacimiento y mayor de 25 años	Acreditar que reside por más de 3 años continuos en la circunscripción a la que postula	Saber leer y escribir
No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley	Tener ocupación conocida	Tener dominio, además del idioma castellano, del quechua, del aimara o la lengua que predomine en el lugar donde va a ejercer el cargo

3.2. Elección de los jueces de paz

Según el Artículo 1º de la “Ley que regula la elección de los Jueces de Paz, acceden al cargo por elección directa y democrática, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 152 de la Constitución política del Perú. Dos (2) meses antes de que expire el mandato del Juez de Paz, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia oficiará al alcalde distrital, al presidente de la comunidad o al agente municipal del centro poblado menor para que convoque a los vecinos de la localidad a una elección directa y democrática”.

Las comunidades campesinas y nativas tienen jueces de paz, elegidos según sus usos y costumbres. Cada Magistrado de la Corte Suprema revisa y certifica que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos, son elegidos por dos años. Reemplazan a los jueces de paz en caso de vacante, ausencia, licencia o vacaciones.

3.3.- Zonas donde funcionan los jueces de paz

Según el Art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Los lugares donde funcionarán los juzgados de paz letrados o no letrados y su competencia territorial son determinados por cada Corte Superior del Distrito Judicial respectivo, considerando criterios poblacionales y las necesidades de administración de justicia en áreas rurales. El ámbito de trabajo del juez de paz es tan heterogéneo como la realidad social, económica, geográfica, lingüística y racial del Perú. Podemos identificar en nuestro país tres ámbitos que se corresponden con espacios geográficos:

- a) El trabajo del juez de paz en la zona rural alto andina se extiende a la zona sur y centro sur, donde el idioma predominante es el quechua. La mayoría de los usuarios se dedica a actividades agrícolas, ganaderas o comerciales. La presencia del Estado es escasa y, cuando existe, puede ser de baja calidad o incluso ser causa de abusos y arbitrariedades.
Con frecuencia, "la comunidad" más que "el individuo" suele ser el sujeto de derechos y, por ello los intereses individuales suelen subordinarse a

mantener la armonía y la paz al interior de la comunidad (Instituto de Defensa legal & Justicia Viva, 2007). Hay mayor cohesión social ya que casi todos se conocen y tienen una historia común.

Por otro lado, cuando hay una riña o pelea, con frecuencia se produce en el contexto de una fiesta comunal o una amplia celebración familiar, en la que agresor y agredido suelen ser parientes o vecinos. Por ende, en esos casos el juez de paz, más que castigar al agresor, se esfuerza por restablecer las relaciones vecinales o familiares y, desde esa perspectiva, una reparación económica y una disculpa pública suelen ser más útiles que un castigo.

- b) El juez de paz de la zona urbano marginal de la sierra o costa trabaja en áreas donde se utiliza principalmente el castellano como lengua, y sus usuarios provienen de diferentes sectores laborales, como el comercio, la educación y las pequeñas empresas.
- c) El ámbito del juez de paz de la selva alta y baja, se relación con el aislamiento en especial, en la selva baja como Loreto, Madre de Dios y Pucallpa donde las distancias entre centros poblados es inmensa y a veces se cuentan por días. Allí, la comunidad y el juez de paz suelen compartir un estado de aislamiento y abandono estatal grandes.

Como el Juez de Paz de la sierra, aquí, la labor del juez de paz suele ser también la de recomponer relaciones sociales y de intentar mantener a la familia.

En esta realidad, el cumplimiento de las decisiones del juez de paz o acuerdos tomados ante su Despacho son una preocupación constante por las tensiones o enfrentamientos que suelen producirse entre migrantes colonos y comunidades nativas.

4.- ADMINISTRACION DE JUSTICIA POR LOS JUECES DE PAZ

Para administrar justicia los jueces de paz tienen facultades y tienen deberes.

- FACULTADES:

Conciliar: Propiciar la conciliación de las partes en cualquier estado del juicio, siempre que el acuerdo sea justo	Sentenciar: Dictar una sentencia, en problemas de su competencia donde no se ha podido llegar a un acuerdo o claramente debe sancionarse a una persona o institución por el daño que ha causado
Sancionar: Ordenar la detención hasta por 24 horas de las personas, que en su despacho o en las actuaciones judiciales, los insulten, los amenacen o coaccionen por escrito o de palabra, o promuevan desórdenes. El Juez puede denunciar el hecho ante el Ministerio Público. También se puede ordenar detener al responsable de violencia familiar en caso que incumpla con las medidas que dicte el Juez de Paz para hacer cesar la violencia. Imponer multa o servicios comunitarios en los casos que señala la ley.	

- DEBERES:

- a. Solucionar los conflictos de manera rápida y honesta, y sancionar a aquellos que intenten retrasar el proceso o actúen de manera deshonesto o engañosa
- b. Vivir en el mismo lugar de trabajo. En caso de que necesite trasladarse, debe obtener autorización previa de la Corte Superior correspondiente.
- c. No seguir cualquier comportamiento inapropiado por parte de los litigantes. En caso de que se presenten frases inapropiadas, el juez puede ordenar su eliminación y sancionar a los responsables
- d. Debe administrar justicia siempre, utilizando su propio criterio y considerando las normas y costumbres del lugar.

5.- LAS COMPETENCIAS DEL JUEZ DE PAZ

Estas personas pueden tratar diversos tipos de casos, pero no tienen conocimientos sobre todas las situaciones legales que puedan surgir. Hay asuntos que son competencia de los jueces de paz y otros que no, incluso si hay varios jueces en un mismo distrito, no todos pueden tratar los mismos casos. Para evitar confusiones, la

ley establece criterios específicos para que los jueces de paz determinen qué asuntos están dentro de su competencia y cuáles no.

5.1.- ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA FIJAR LAS COMPETENCIAS DE UN JUEZ DE PAZ?

1ero. Ellos se encargan únicamente de resolver casos civiles, penales, notariales y de violencia intrafamiliar, por lo que si se trata de un asunto relacionado con impuestos, se deberá buscar otro tipo de autoridad competente.

2do. En asuntos civiles donde el monto varía si el monto es civil o penal, los jueces de paz pueden resolver sumas pequeñas y a veces, por compromiso, algunos casos penales donde las sumas son grandes. En los casos penales, solo resuelven el crimen.

3ero. Cada juez tiene jurisdicción sobre un área específica. Los tribunales compuestos o especiales sirven a diferentes lugares y los jueces de paz sirven a varias aldeas dentro de un distrito o distritos. Para complementar estas pautas, se tiene:

Si se demanda a una persona. Es competente el Juez de su domicilio. Si domicilia en varios lugares, puede ser demandado en cualquiera de ellos. Si son varios los demandados, en cualquiera de los domicilios	Si el demandado no tiene domicilio fijo, o no se conoce. Es competente el Juez del lugar donde se encuentra, o el Juez del domicilio del demandante. Este es el que decide
Si es una asociación, comité u otra persona jurídica que no está inscrita. El Juez competente es el del lugar donde realizan su actividad. Si el problema es que se había pactado realizar una actividad en un determinado lugar (construir una pared, por ejemplo), puede también plantearse la demanda ante el Juez de ese lugar	En los lugares donde hay Jueces de Paz de varias nominaciones, pueden ponerse de acuerdo y dividirse en zonas el área de su competencia. También pueden establecer turnos de atención

Las partes involucradas en un caso pueden acordar acudir a un juez diferente al que les corresponde originalmente, ya sea de manera oral o escrita. Si el

demandante presenta la demanda ante un juez que no es el adecuado, el demandado puede objetar la jurisdicción del juez y el caso será remitido al juez competente. Si el demandado no se opone y el juicio sigue adelante, se considera que está de acuerdo con la jurisdicción del juez. Después de eso, no puede reclamar y exigir que el caso sea devuelto al juez originalmente competente.

5.2.- ¿CUÁLES SON LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA?

Puede conciliar y/o sentenciar en los ámbitos de:

- Materia Civil
- Materia Penal
- Materia Notarial
- También debe intervenir en asuntos de Violencia Familiar

De igual forma, el fiscal puede cumplir estas normas, en el caso que no haya uno en el lugar.

5.2.1.- Asuntos en materia civil:

1. Pago de deudas	Cuando el monto (cuantía) no sea mayor a cinco Unidades Impositivas Tributarias. Para determinar la cuantía se calcula cuánto es la deuda, junto con los posibles frutos, intereses, gastos, daños y perjuicios. Si en la demanda o sus anexos, aparece que la cuantía es mayor, el Juez debe hacer la corrección que corresponda, aunque las personas no se lo hayan solicitado.
2. Indemnizaciones	Es decir, define el pago a efectuarse para compensar un daño cometido. Por ejemplo, si el ganado de una persona invade un terreno cercado y daña los cultivos, el dueño del ganado deberá pagar al dueño del terreno una compensación.
3. Intervenciones sobre menores	Ve casos de menores que han cometido actos antisociales. También para dictar órdenes provisionales y urgentes sobre tenencia o guarda del menor en situación de abandono o peligro moral. Concluida su intervención, el Juez de Paz remite lo actuado al Juez del Niño y del Adolescente o al Juez Mixto.
4. Desahucio y aviso de despedida	Cuando debe decidir un desalojo o dar por concluido un contrato de arrendamiento u ocupación de un inmueble. Es más frecuente en zonas de Costa.
5. Alimentos	<p>Señala quienes deben brindarlos y cuál es la cantidad necesaria para el sustento, vestido, vivienda y asistencia médica de una persona. Tratándose de un niño o un adolescente. Se consideran también como</p> <p>Alimentos los gastos de educación, capacitación para el trabajo y recreación. Se deben alimentos los cónyuges, los padres y los hijos, los abuelos y los nietos y los hermanos. El Juez de Paz puede intervenir en casos de alimentos, siempre que no haya duda sobre el vínculo de parentesco, es decir que esté comprobada la paternidad o el vínculo matrimonial (Art.96 del Código del Niño y del Adolescente). Esta seguridad la da la partida de nacimiento, de matrimonio o de bautizo. También es una prueba cuando el</p> <p>padre ha reconocido su paternidad en un acta ante un Juzgado de Paz.</p>

5.2.2.- Los asuntos en materia penal:

Son aquellas situaciones o problemas que atentan contra la vida e integridad física de las personas y que son considerados delitos o faltas. El Juez de Paz resuelve los conflictos penales considerados como FALTAS.

¿Qué son las faltas?

Son conductas ilícitas, en las cuales se sanciona el hecho cometido y sólo responde el autor por lo que hizo. Se diferencian de los delitos por ser menos graves.

A) Faltas contra las personas.-

Son lesiones o golpes producidos de manera directa contra otra u otras personas. Para ser considerada falta no deben ocasionar más de 10 días de descanso médico o no llegar a ocasionar ningún daño permanente.

También se consideran faltas los casos en que las lesiones se cometen sin intención, pero sí por irresponsabilidad y originan hasta 15 días de incapacidad. Es el caso de los que manejan sin cumplir las normas de tránsito.

B) Faltas contra el patrimonio

Son los hurtos y otras acciones de apropiación de un bien ajeno, sin violencia, cuyo valor no sobre pase 1 remuneración mínima vital.

C) Faltas contra las buenas costumbres

La idea de buenas costumbres puede variar según los diferentes lugares del país. El Juez de Paz debe evaluar, en cada caso, cuáles son las costumbres predominantes de la comunidad.

Por ejemplo, cuando la persona, por encontrarse en estado de ebriedad o drogadicción, perturba la tranquilidad de los demás o pone en peligro su seguridad o la de otros. Aquí la acción del Juez de Paz puede tener un

importante papel preventivo, para evitar que se produzcan desgracias (Art. 449 del Código Penal).

También es falta vender bebidas alcohólicas o cigarrillos a menores de edad y vender o consumir bebidas alcohólicas en días u horas prohibidos. (Art. 450, inciso 3 del Código Penal).

Son también faltas la destrucción de las plantas en parques y jardines, y el maltrato de los animales. La sanción es la misma que en el caso anterior (Art. 450 del Código Penal).

D) Faltas contra la seguridad pública

Son aquellas que crean un peligro para los demás. La acción del Juez de Paz puede evitar muchas desgracias.

Perturbar a los vecinos con discusiones o ruidos molestos (Art. 452, inciso 6 del Código Penal).

Ocasionar alarma a la población como por ejemplo, anunciar falsamente una inundación. (Art. 452 inciso 2 del Código Penal).

La existencia de estas faltas recuerda que todas las personas tienen derecho a vivir con tranquilidad y, aun cuando se diviertan, se debe respetar el derecho al descanso de los demás.

5.2.3.- ¿Cuáles son las sanciones para las faltas?

- a. **La prestación de servicios comunitarios.** “Obliga al condenado a trabajos gratuitos en instituciones públicas como postas médicas, escuelas o similares. Debe cumplirse en jornadas de diez horas semanales, los días sábados y domingos, para no afectar la jornada laboral, a no ser que el condenado solicite que también sea durante la semana”.
- b. **El pago de multa.** “Se calcula a través de días-multa, que es igual al ingreso promedio diario del condenado. Se determina según sus ingresos y su patrimonio. El importe del día-multa no podrá ser menor del 25% ni mayor del 50% del ingreso diario”.

- c. **Los días-multa** “no serán MENOS de 10 días ni MÁS de 180. La multa deberá ser pagada dentro de los 10 días de pronunciada la sentencia, pero si el condenado lo solicita y las circunstancias lo justifican, el Juez de Paz podrá permitir que el pago se efectúe en cuotas mensuales”.

En ningún caso la multa debe hacer peligrar el sustento del condenado y su familia.

6.- COMPETENCIA DE LOS JUZGADO DE PAZ EN ASUNTOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia en la familia “es una realidad constante en el Perú. A veces se cree que es consecuencia de la falta de instrucción y la pobreza, pero está presente en familias de toda condición social. El Estado, dentro del marco de la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, otorga participación específica de los Juzgados de Paz, en el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, aprobada el 27 de julio del 2016; que contiene en Reglamento de la Ley N° 30364; la cual en su CAPITULO IV, establece en las zonas rurales del país, las medidas necesarias que implementen acciones de prevención, protección, atención, sanción y recuperación en los casos de violencia familiar”.

6.1. Intervención supletoria del Juzgado de Paz

Donde no hay familiares locales ni jueces de paz, estos casos están bajo la jurisdicción de los jueces de paz. En los casos de hechos de violencia contra la mujer y sus familiares, el Departamento de Justicia Penal, con conocimiento del Juzgado de Familia, toma las medidas de protección o pro-víctima que correspondan e inicia el proceso. Delito o compuesto para proceder conforme a sus atribuciones.

6.2. Medidas de protección

“Cuando el Juzgado de Paz toma conocimiento de actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar que constituyen a su juicio delitos, dicta la medida o medidas de protección que correspondan a favor de la víctima con conocimiento del Juzgado de Familia y remite lo actuado a la Fiscalía Penal o Mixta para que proceda conforme a sus atribuciones”.

6.3. Denuncia ante el Juzgado de Paz

Las denuncias se presentan por escrito u oralmente ante un juez de paz. Cuando la Policía Nacional del Perú toma conocimiento de casos de violencia contra las mujeres y miembros de grupos familiares, los denuncia a los tribunales de sus comisarías, que no cuentan con juzgado de familia ni juez de paz. En un plazo máximo de veinticuatro horas desde los incidentes, Paz Verdad y Operaciones Policiales envían informes, incluyendo breves fichas de evaluación de riesgos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley.

6.4.- Intervención de las autoridades judiciales.

“En las localidades donde no exista Comisaría de la Policía Nacional del Perú, los Juzgados de Paz coordinan la ejecución de las medidas de protección así como las sanciones impuestas de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 29824, coordinando con las autoridades comunales y otras que correspondan en el marco de lo establecido en la Ley N° 30364 y la ley de su materia”.

La Policía debe apoyar al juez de paz en la ejecución de sus decisiones. Si no hay comisaría en la zona, otras autoridades como las rondas campesinas y los gobernadores deben brindar el apoyo necesario.

Cuando hay varios Juzgados de Familia, se establecen medios y formas de coordinación funcional y operativa, para la investigación y sanción de la violencia contra la mujeres e integrantes del grupo familiar, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

7.- LA CONCILIACIÓN ANTE LA JUSTICIA DE PAZ FRENTE A LAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA FAMILIAR

La conciliación es un medio alternativo de resolución de conflictos que tiene por finalidad lograr consensualmente el acuerdo entre las partes gracias a la participación activa de un tercero. Este tercero tiene las funciones de facilitación, impulso y proposición. Según Iván Ormaechea la conciliación ha sido incorporada en diferentes textos normativos así, por ejemplo ha sido concebida como fase obligatoria en el proceso civil, y ha sido incorporada en el ámbito administrativo y privado (Balbuena Palacios, 2006).

En la actualidad, la conciliación es un mecanismo de uso frecuente por entidades no judiciales, como ONGS, consultorios jurídicos, DEMUNAS y diversas instituciones. Los jueces de paz están facultados a conciliar judicialmente según el artículo 33 de la ley 26872, Ley de Conciliación extrajudicial, donde señala la obligatoriedad que tiene los jueces de paz de seguir el procedimiento establecido en dicha ley. Pero es importante señalar que la conciliación en la justicia de paz, viene desde los tiempos en los que la constitución de Cádiz de 1812 facultaba a los alcaldes a desarrollar funciones conciliatorias entre los habitantes del municipio, hasta que en 1826 esta función les es transferida a los jueces de paz.

A esta facultad se suma la tradición componedora del juez de paz que viene de los sistemas comunales de resolución de conflictos. Los jueces de Paz y las autoridades comunales concilian desde hace mucho tiempo atrás de la existencia de la figura de la conciliación como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos y responde a una tradición que involucra valores que estamos en la obligación de reconocer si pretendemos juzgarlas y cambiarlas (Balbuena Palacios, 2006). Su práctica viene desde mucho atrás del Reglamento de 1854 y tiene como antecedentes según la Comisión Andina de juristas las figuras del Consejo de Ancianos, la práctica de los curacas y los jefes guerreros, a los alcaldes ordinarios de los tiempos de la colonia hasta la figura de los jueces de paz de la constitución de 1820.

Se señala también que al Juez de Paz se le reconoce una labor esencialmente “componedora” del desequilibrio creado por el conflicto generado entre las partes y su actuación deviene en el desarrollo de una estrategia de persuasión dirigida a lograr

la suscripción de un acta de conciliación fuertemente condicionada que reviste formas consensuales pero expresa la idiosincrasia de la población y constituye una costumbre judicial arraigada (Balbuena Palacios, 2006). En un estudio del Instituto de Defensa legal se plantea tres modalidades de conciliación en la justicia de paz- la misma división que utilizaremos para esta investigación-, la transacción, la conciliación estándar y la sentencia conciliada.

Existe un de alto grado de aceptación de la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos usado por la justicia de paz y podemos resumir de los textos revisados que este éxito se debe:

- No siguen criterios legales para formalizar conflictos, sino que se adaptan a las costumbres y cultura local, tal como lo indica el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A veces, aceptan casos que exceden su competencia, pero que ayudan a la población a evitar recurrir a la justicia letrada. La conciliación se lleva a cabo de manera sencilla y en un lenguaje comprensible para las partes, a menudo en su lengua materna, y en un encuentro cara a cara de forma oral. (Balbuena Palacios, 2006).
- La conciliación está acorde a encontrar una solución que satisfaga a ambas partes en lugar de simplemente emitir un fallo para poner fin al conflicto. El juez de paz comunero actúa como mediador y mantiene la paz en la comunidad para evitar conflictos. Este proceso es educativo y ayuda a liberar tensiones, lo que permite que se expresen aspectos subjetivos que no serían posibles ante un juez letrado, y se reconoce la individualidad de cada parte involucrada. (Balbuena Palacios, 2006).
- Es accesible y económica, ya que el procedimiento es rápido y gratuito. Sin embargo, las partes pueden expresar su gratitud al juez con regalos de productos agrícolas o animales pequeños. (Balbuena Palacios, 2006).
- Los modos que usan son persuadir o intimidar. “La lógica del proceso no se queda en la fría y compulsiva aplicación de la ley, sino en la constante persuasión a la conciliación, pero sobre todo en la amenaza del juez de utilizar

recursos que explotan la desconfianza de la población respecto del Poder Judicial” (Balbuena Palacios, 2006).

En las zonas rurales del país, se siguen promoviendo las conciliaciones en casos de violencia familiar en la justicia de paz, estos acuerdos, según el Instituto de Defensa Legal “suelen estar impregnados de estereotipos y prejuicios en torno a la inferioridad y rol doméstico de la mujer y, por otro lado, padecen de inocuidad para resolver estas situaciones o tiende a perennizar situaciones de maltrato o subordinación”.

Abraham Siles señala que en situaciones de violencia familiar se descubren dos cuestiones importantes: la intensidad, gravedad y permanencia de estos conflictos y, como causas se señalan los celos, el alcoholismo, la infidelidad y el adulterio. “puede observarse aquí una rígida separación de ámbitos y roles en función del sexo de los participantes en los conflictos de violencia familiar (Balbuena Palacios, 2006). Esta asignación de tareas por género es incluso reproducida por las propias mujeres.

Los acuerdos sobre violencia familiar según este autor se producen bajo la figura de la reconciliación entre los cónyuges o convivientes desavenidos. “las mujeres que acuden ante el juez de paz reclamando haber sufrido agresiones en el seno de la familia de parte de su cónyuge o concubino, por lo general no desean separarse de sus parejas, y los dicen de forma explícita. En algunos casos, muy pocos dicen, que desean separarse, pero esto parece ser más bien una estrategia de negociación”. Como se menciona: “las actas de conciliación no combaten la asignación de roles. Esta ritualización es funcional a un esquema rígido de asignación de valores, en virtud del cual se podría estar legitimando el uso de la violencia a cambio del cumplimiento de los mandatos culturales sobre los quehaceres del hogar a cargo de la mujer”.

La conciliación en casos de violencia doméstica no garantiza la protección de los derechos humanos, ya que no aborda las causas subyacentes de la violencia. La conciliación supone que las partes tengan el mismo poder y en situaciones de violencia de género contra las mujeres no sucede esto. Le corresponde al Estado cumplir su función de tutelar y garantizar a los sujetos el respeto pleno a sus derechos humanos, caso contrario estaríamos frente a una situación de discriminación. La violencia familiar es un ciclo donde es muy probable que se vuelva a repetir estas situaciones.

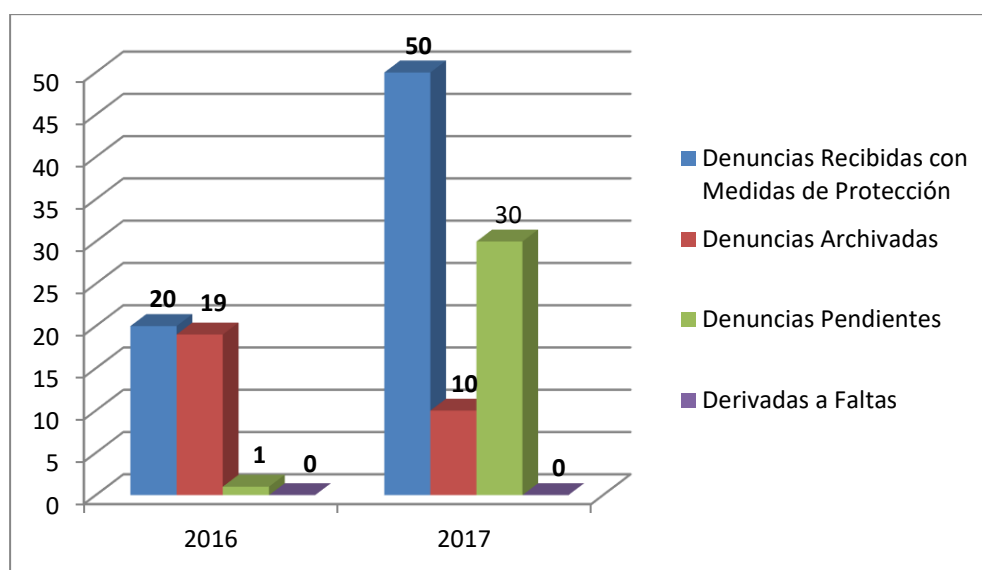
CAPITULO V

HALLAZGOS, RESULTADOS Y DISCUSION

I.- ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS.-

1.1.- MINISTERIO PÚBLICO – FISCALIA MIXTA PROVINCIAL DEL DISTRITO DE CAYALTI

PRIMER HALLAZGO: DENUNCIAS RECIBIDAS DEL JUZGADO DE FAMILIA DE CHICLAYO CON MEDIDAS DE PROTECCION (2016-2017)



RESULTADO:

Durante el año 2016 y 2017, en la Fiscalía Provincial Mixta de Cayaltí, se han recibido 70 procesos sobre violencia familiar, derivadas de los Juzgados Especializados de Familia de Chiclayo; de los cuales, 29 procesos fueron archivados por haberse denunciado violencia familiar por agresiones psicológicas; y aún no se había

implementado la directiva que establece la gradualidad del diagnóstico en caso de lesiones por daño psíquico. Asimismo, 31 procesos, aún se encuentran pendientes de calificación.

ANALISIS:

Es importante, resaltar que la tramitación de las denuncias por violencia familiar, en zonas rurales donde no existen órganos jurisdiccionales, no se viene realizando conforme lo establece el reglamento de la Ley N° 30364, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, en su capítulo VI, ya que se ha verificado que las denuncias por violencia familiar, en las zonas de Cayaltí y Túcume, son interpuestas ante la Comisaría de su distrito; y las dependencias policiales derivan los informes policiales al Juzgado Especializado en familia o mixto, más cercano al distrito; en la caso de Cayaltí, la Comisaría deriva los informes a los Juzgados de Familia de Chiclayo para la programación de audiencia de otorgamiento de medidas de protección, posteriormente estos juzgados remiten las carpetas de violencia familiar a la Fiscalía Mixta de Cayaltí, para su calificación, denuncia o derivación a faltas, según el caso. ¿Qué pasa si la calificación, el fiscal determina que procede denunciar el delito o incoar proceso inmediato?, nuevamente se regresa a Chiclayo, para ser presentado ante el Juzgado Penal respectivo. Y que pasa, si las lesiones no configuran delito sino Faltas, se remiten al Juzgado de Paz de Cayaltí, en donde terminan siendo archivados.

En el distrito de Túcume, no existe mucha diferencia en el trámite; es la Comisaría quien mayormente recibe las denuncias por violencia familiar, la Comisaría procede a remitir su informe policial al Juzgado Mixto de Lambayeque para la programación de audiencia de otorgamiento de medidas de protección; luego deriva la carpeta a la Fiscalía Penal de Lambayeque para su calificación y denuncia o de ser el caso, derivar al Juzgado de Paz letrado por Faltas. La duda es, ¿asistirán los denunciante y agresores quienes residen en las zonas rurales de Túcume, hasta el distrito de Lambayeque? Evidentemente no, y es que en muchos casos, las propias denunciante ya no realizan las evaluaciones médicas ordenadas y no asisten a las diligencias programadas.

¿Y los jueces de Paz de Cayaltí y Túcume?; en ambos distritos, se ha comprobado que los jueces de Paz, argumentan que ahora la violencia familiar es delito, y por ende es la Policía Nacional y Las Fiscalías las encargadas de recibir las denuncias; y que en situaciones muy singulares reciben a los denunciantes, pero con la intención de hallar un acuerdo o reconciliación en las partes. De otro lado, cuando las fiscalías penales, califican los hechos como faltas y derivan a los jueces de paz para su tramitación respectiva, en la mayoría de los juzgados de paz, no reciben las carpetas.

Esta realidad existe; y las facultades y competencias que se les ha otorgado a los jueces de paz, quedan únicamente en el reglamento (D.S. N° 009-2016-MIMP), es esta preocupación la que ha conllevado a la investigadora a realizar este estudio, inmerso en las actuaciones de los Jueces de Paz.

1.2.- ENTREVISTA A JUECES DE PAZ DE LOS DISTRITO JUDICIAL DE CAYALTI y TUCUME.

PRIMER HALLAZGO: CAPACITACION SOBRE LA LEY N° 30364 Y SU REGLAMENTO:

1.- Ha recibido talleres o similares, de capacitación respecto a la Ley N° 30364 y su reglamento. Precise que institución, evento y duración.

Frente a esta pregunta, los jueces de Paz de Nominación del distrito de Cayaltí y Túcume, indicaron que SI han recibido capacitación de parte del Poder Judicial, específicamente de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de Lambayeque; con la finalidad de mejorar sus capacidades en temas referentes a los trámites que se realizan en procesos sobre violencia familiar. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz – ODAJUP, realizó un evento académico denominado “Contribución de la Justicia de Paz en la Erradicación de la Violencia Familiar”, dirigido a jueces de paz del distrito judicial de Lambayeque; evento que tuvo como ponentes magistrados especializados en temas de

familia, así como personal del Centro de Emergencia Mujer de la provincia de Chiclayo, quienes capacitaron alrededor de 100 jueces de paz provenientes de las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, así como de los distritos cajamarquinos de Bolívar y Nanchoc de la provincia de San Miguel, y los distritos de Miracosta y Llama de la provincia de Chota. Los temas abordados fueron “Nuevo Régimen jurídico de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su relación con los juzgados de paz”, “Procesos de tutela frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, “Protocolo básico de intervención de los jueces de paz en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, entre otros.

De igual forma, a nivel nacional, diversos distritos judiciales han venido realizando eventos y capacitaciones dirigido a los jueces de paz, con la finalidad de desarrollar las facultades que tienen los jueces de paz de nominación ante las denuncias de violencia familiar, reforzando las actuaciones que deben desarrollar en zonas rurales donde no existen órganos jurisdiccionales; conforme a lo dispuesto en el capítulo VI del reglamento de la Ley N° 30364.

SEGUNDO HALLAZGO: MINIMA INTERVENCION EN RECEPCIÓN DIRECTA DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR

2.- ¿Ha recibido denuncias directas ante su Despacho, sobre violencia Familiar por parte de los ciudadanos de su distrito (2016-2017)?

- Denuncias Por violencia Física: NO
- Denuncias por violencia psicológica: 2 casos promedio
- Denuncias verbales: 2 promedio
- Denuncias escritas: 02 promedio

Los jueces de Paz del distrito de Túcume y Cayaltí, indicaron cuando se encontraba vigente la Ley N° 26260, si recibían denuncias directas por parte de la población sobre actos de violencia familiar; sin embargo, desde que se implementó la Ley N° 30364 y su Reglamento, únicamente han recibido en promedio 02 denuncias por violencia psicológicas, verbales o escritas.

Asimismo, informaron que NO reciben denuncias por violencia familiar, cuando se trata de lesiones físicas, ya que manifestaron que estas configuran delitos y que sus Juzgados NO TIENEN COMPETENCIA para tramitar estos delitos, por ello indican a los denunciantes dirigirse directamente a la Comisaría Nacional del distrito o a la fiscalía penal más cercana.

Existe una gran contradicción entre lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30364 y la realidad de los jueces de paz, ya que la norma legal precisa: *Artículo 67.- Denuncia ante el Juzgado de Paz. 67.1 La denuncia ante el Juzgado de Paz se presenta por escrito o de manera verbal;* ya que en la realidad de los hechos, los mismos jueces se inhiben verbalmente de recibir denuncias por violencia familiar argumentando que *“ahora constituyen delitos y deben ser denunciadas directamente en la Comisaría”*.

De otro lado, la población no está plenamente informada de las competencias y facultades que se han dotado a los Jueces de Paz a nivel nacional; si bien es cierto, se está aplicado en primera ratio la intervención del derecho penal para sancionar a los agresores; también es necesario enseñar a la población el procedimiento para realizar las denuncias respectivas; más aún en las zonas rurales donde no existen órganos jurisdiccionales; donde se ha comprobado que el desconocimiento es total; y sus jueces de paz contribuyen a ese desconocimiento.

Las respuestas obtenidas por los jueces de paz entrevistados, son similares, cuando manifestaban que, la nueva Ley N° 30364, establece que las agresiones provenientes de violencia familiar, ahora constituyen delitos, y que ellos, como tales, no tienen competencia para conocer esta clase de denuncias.

TERCER HALLAZGO: FALTA DE PREPARACION DE LA POLICÍA NACIONAL, PARA DERIVAR LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR.

2.- Denuncias sobre violencia Familiar, remitidas por la Comisaría Nacional de su Distrito (2016-2017)?

- Año 2016: 03 promedio
- Año 2017: 01 promedio

El Artículo 67 del Reglamento de la Ley N° 30364, establece:

***Artículo 67.-Denuncia ante el Juzgado de Paz.** 67.2 Cuando la Policía Nacional del Perú conoce de casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías en los lugares donde no exista Juzgado de Familia o Juzgado de Paz Letrado con competencia delegada, PONE LOS HECHOS EN CONOCIMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS de acontecidos los mismos y remite el informe policial que resume lo actuado así como la ficha de valoración del riesgo correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley.*

Sin embargo, se ha evidenciado que las comisarías de los distritos como Túcume y Cayaltí, NO ponen en conocimiento de los Jueces de Paz de Nominación las denuncias sobre violencia familiar; remitiendo la denuncia policial al Juzgado Mixto o Juzgado de Familia más próximo; en el caso de Cayaltí, derivan al Juzgado de Familia de Turno, a pesar de haber cuatro juzgado de Paz en Cayaltí; y en el distrito de Túcume, lo remiten al Juzgado Mixto de Lambayeque; igualmente a pesar de haber tres juzgados, y en Chiclayo debido a la elevada carga procesal, las medidas de protección no son dictadas con la celeridad y urgencia debida, además también muchas veces no son acorde con la realidad en el caso en concreto, pues las partes no concurren a las audiencias debido a la distancia ,y el juez desconoce la problemática para poder dictar las medidas de protección más adecuadas que garanticen la real protección de la víctima.

Asimismo, de la conversación sostenida con los jueces de paz de estos distritos, son los mismos jueces, los que NO aceptan recibir las denuncias directamente de la Comisaría de su distrito, argumentando una vez más, que por constituir ahora un hecho delictivo, no tienen competencias en materia penal.

Eso evidencia las grandes deficiencias que aún encontramos tanto en los Jueces de paz como en las Comisarías a nivel nacional; deficiencias encontradas por la Defensoría del Pueblo, precisando que **en siete del total de diez comisarías supervisadas, no se**

encuentran capacitadas para la actuación conforme al marco legal de la Ley N° 30364 y su reglamento; entre las deficiencias detectadas son: la inaplicación de la ficha de valoración de riesgo, siendo esta indispensable para que el Juzgado respectivo disponga una adecuada medida de protección; no cuentan con un mapa gráfico y georreferencial de registro de víctimas de violencia con medidas de protección como herramienta útil para realizar el seguimiento de la ejecución y/o cumplimiento de estas medidas; aún solicitan Documento Nacional de Identidad (DNI) para recibir una denuncia. Producto de estos hallazgos, la **Defensoría del Pueblo** viene recomendando a la **Policía Nacional del Perú (PNP)** realizar capacitaciones y/o entrenamientos permanentes para atender estos casos de violencia y establecer lineamientos para la atención de las víctimas y otorgar un correcto trámite procesal.

CUARTO HALLAZGO: LOS JUZGADOS DE PAZ NO DICTAN MEDIDAS DE PROTECCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR

<p>4.- Número de medidas de protección que su Juzgado ha dictado en materia de violencia familiar, en los años 2016 y 2017?</p> <p>Dictó medidas de protección: Ninguno</p>

“Cuando el Juzgado de Paz toma conocimiento de actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar que constituyen a su juicio delitos, dicta la medida o medidas de protección que correspondan a favor de la víctima con conocimiento del Juzgado de Familia y remite lo actuado a la Fiscalía Penal o Mixta para que proceda conforme a sus atribuciones; según lo establecido en el **Artículo 66 (Medidas de protección)**” del reglamento de la Ley N° 30364; sin embargo, y de acuerdo a las respuestas dadas anteriormente; los jueces de paz seleccionados para la muestra, NO reciben las denuncias por violencia familiar, en consecuencia no dictan ninguna medida de protección inmediata a favor de la víctima.

Esta deficiencia se presentan en todos los juzgados entrevistados, en cuyos distritos, las víctimas de violencia familiar deben acudir a la Comisaría más cercana a interponer una denuncia sobre violencia familiar; siendo que en la mayoría de casos no se aplica la ficha

de valoración de riesgo; y es la Comisaría quien remite el informe policial al Juzgado Mixto o de Familia de la provincia, en un plazo de tres días, incumpléndose plazos y competencias establecidas en el reglamentos (D.S. N° 009-2016-MIMP). Además, se pudo notar que los jueces de paz argumentan que las denuncias de violencia familiar, deben ser derivadas a los Juzgados especializados y fiscalías penales, donde se les dicta medidas de protección; eludiendo su avocamiento y competencia para una actuación inmediata, teniendo en cuenta que en ambos distritos no existen órganos judiciales especializados.

Otro hecho que se rescató de la entrevista, es que nos dieron a conocer que con la anterior ley N° 26260, los jueces de paz si dictaban medidas de protección y también recibían denuncias, para luego derivarlas a los juzgados especializados; pero tampoco se avocaban a conocer y sentenciar en los procesos que fueron remitidos como faltas que devienen de un hecho de violencia doméstica entre integrantes del grupo familiar.

Entonces, el cuestionamiento es el siguiente, cuál es el efecto de las capacitaciones y talleres que imparte el Poder Judicial para estos órganos no letrados que se encuentran en zonas rurales, donde no existen órganos jurisdiccionales para que intervengan en forma inmediata en protección de la víctima. Debemos tener en cuenta que las personas que asumen el cargo de Jueces de Paz, no están preparados profesionalmente en el campo del derecho para impartir justicia; no cuentan con los medios logísticos y económicos para realizar impulso procesal de oficio, todos funcionan en sus propios domicilios; y nuevamente incide la insensibilidad en los casos de violencia familiar en todos los órganos deben intervenir.

QUINTO HALLAZGO: LOS JUZGADOS DE PAZ NO SE AVOCAN A CONOCER LOS PROCESOS POR FALTAS EN VIOLENCIA FAMILIAR

5.- De los procesos derivados a su juzgado, donde se ha configurado Faltas, en cuantos se avocó en conocimiento?

- Realizó audiencia de juzgamiento: Ninguno
- No concurrieron las partes: Todos
- Acuerdo reparatorio: 3 promedio
- Sentencia: Ninguno

Cuando los hechos constituyen faltas contra la persona, el Juzgado de Paz dicta la medida o medidas de protección a favor de la víctima, así como lleva a cabo el proceso previsto en su ley de la materia. Disposición contenida en el artículo 65.3 del reglamento de la Ley N° 30364 (D.S. N° 009-2016-MIMP)

Esta normativa faculta a los jueces de paz a tramitar el proceso penal por faltas y sancionar de acuerdo a la Ley N° 30364; pero, la realidad es contraria; no han sentenciado. Argumentan sus posiciones en el hecho de que ahora los procesos de violencia familiar son delitos y la mayoría son derivados a los Juzgados Penales; de los escasos procesos recibidos por algunos juzgados de Paz, fue unánime el argumento al manifestar que las partes no concurren a las audiencias y obstaculiza la continuación del trámite, por tal motivo no se llega a una sentencia.

Por otro lado, sólo un juzgado en Túcume, indicó que hasta la fecha, ha propiciado tres acuerdos reparatorios entre las partes, a fin de que éstas solucionen sus conflictos y puedan vivir en reconciliación; aun cuando la Ley N° 30364, prohíbe cualquier forma de conciliación entre las partes.

En la situación actual en la que el Estado reconoce la violencia contra la mujer como un acto que perjudica la dignidad de la mujer y tiene un impacto en el interés público, incluso si se trata de una lesión leve, se considera que es un delito de especial gravedad. Por lo tanto, no se puede aplicar un acuerdo reparatorio en casos de lesiones leves si la víctima es mujer y ha sido agredida debido a su género. La razón es que permitir el acuerdo reparatorio sería incompatible con la obligación del Estado de investigar y castigar a los responsables de la violencia contra la mujer en un juicio justo y con todas las garantías necesarias. Más aún, si la ley N° 29990 señala que no procede la conciliación en estos casos, de igual modo esta norma legal señala que no procede la transacción ni el desistimiento.

Se recogió un relato curioso de uno de los jueces de Paz de Túcume:

“establecen que las denuncias que más reciben son lo que ellos denominan como «violencia familiar», seguidas de las agresiones entre vecinos y daños a la propiedad. Desde su perspectiva, la «violencia familiar» incluye la violencia física y psicológica

hacia las mujeres por parte de sus parejas, violaciones sexuales a menores y demandas por alimentos. Precisan que las personas que denuncian la violencia tienen distintas expectativas e intereses. Unos solicitan indemnización, otros quieren hacer la denuncia y otros solo quieren «hacer de conocimiento». Estos últimos no quieren hacer una denuncia formal ni que su caso se registre en el cuaderno de actas, solo aspiran que el juez de paz usando su autoridad oriente al hombre agresor para que cambie de conducta. Saben que todo caso de «violencia familiar» y violación sexual debe ser inmediatamente derivado a la policía o fiscalía. Pero los y las denunciante no quieren. Le dicen: «[...], no señor, aquí arreglamos, no nos remita al superior. Aquí no más arreglamos. Nosotros somos paisanos acá nomas. No queremos problemas. Yo soy pobre, me vas a meter allí. Quién va a estar caminando en eso». Los jueces de paz por costumbre concilian casos de «violencia familiar» e incluso violencia sexual. Por un lado, ellos se encuentran entre lo que dice la ley, entre lo que los denunciante piden y lo que se ha impuesto a través de las prácticas sociales. Otro tema es que pese a que existe una norma que guía sus funciones, cada juez de paz procede de distinta manera. El juez de paz de Túcume explica que cuando se presenta una denuncia de violencia, él envía a la mujer al puesto de salud para ser examinada. En la conciliación, de acuerdo al informe del puesto de salud, establece sanciones para el agresor, una reparación civil y el compromiso de no repetición. Esto se plasma en un acta. La firma del acta tiene un proceso casi ritual. Las partes en conflicto deben salir de la sala para que el juez de paz redacte el acta. Eso toma alrededor de dos horas”.

Esta práctica de conciliaciones de los jueces de paz transgrede la ley de violencia familiar vigente en el Perú. Ellos saben eso y aun así concilian. Enfatizan que son las mujeres quienes quieren las conciliaciones. Cuando les manifiesta que eso no es posible y deben derivar sus casos a la policía y fiscalía, ellas le dicen «*no me hagas ese daño*». Por ello, los jueces de paz prefieren hacer conciliaciones porque las familias implicadas se lo piden y porque son «conscientes» del gasto y desgaste que una denuncia ante la policía o fiscalía implica para las familias de las zonas rurales. Señalan: «El que tiene plata si hay justicia, pero el que no, no tiene justicia, justicia es pura plata en la ciudad. Aquí es rápido». Balbuena (2007), reconoce la labor componedora del juez de paz en los espacios rurales, destacan que es de fácil acceso, bajo costo, tiene un procedimiento de atención que no excede una semana y busca encontrar una solución aceptable para las dos partes. Pero

claramente se aprecia una contradicción entre lo que dice la ley y la práctica de los jueces de paz, esto se suma al hecho de que los jueces de paz forman la tercera parte del sistema judicial nacional, que mayormente se ubican en la sierra del país y son parte del contexto rural andino (Balbuena 2007). Además, dice esta autora, que tienen una visión conservadora por lo que muchas de sus soluciones están influenciados por relaciones de género tradicionales que sancionan a las mujeres por no haber atendido bien al esposo.

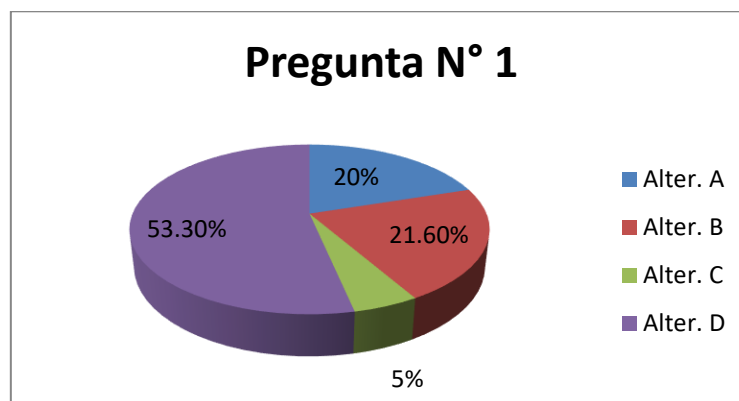
1.3. ENCUESTA APLICADA A OPERADORES DEL DERECHO, RESPECTO A LA COMPETENCIA OTORGADA A LOS JUECES DE PAZ.

Se tomó como muestra al azar 120 operadores del derecho, del distrito judicial de Lambayeque, para conocer su opinión respecto a la tramitación de las lesiones leves como faltas y a las competencias otorgadas a los jueces de paz en zonas rurales.

PRIMER HALLAZGO: LAS LESIONES LEVES DE VIOLENCIA FAMILIAR NO DEBEN TRAMITARSE COMO FALTAS

1.- Está de acuerdo con lo precisado en el Reglamento de la Ley N° 30364, que algunas lesiones, según su gravedad, debe ser visto como un proceso de FALTAS:

- a. No, debe tratarse como delito y tramitarse en Juzgado Penal (16)
- b. Si, porque hay lesiones que no ameritan ser delitos(32)
- c. Si, porque las faltas se pueden conciliar (4)
- d. No, porque resta importancia a la violencia familiar (68)



RESULTADO:

De las encuestas realizadas, se ha determinado que los operadores del derecho, no están de acuerdo en que las lesiones leves producidas como consecuencia de una violencia familiar, sean tramitadas como FALTAS, tal es así que un 53.30% (68 encuestados) de la población encuestada, precisa que resta importancia a las lesiones por violencia familiar. En menor número, el 21% de la población, indica que si está de acuerdo en el proceso de faltas, ya que hay lesiones que no constituyen materia de delitos. En un número similar, un 20% de la población, considera que todas las lesiones producidas en un contexto de violencia familiar, deben ser tramitadas como delitos. Finalmente, un número muy reducido de la población encuestada, considera que es conveniente que las lesiones leves sean tramitadas como faltas, para poder hallar una conciliación o acuerdo reparatorio.

ANALISIS

Para que una lesión se considere delito y no falta, el Código Penal establece criterios basados, principalmente, en los días de asistencia médica o descanso requeridos. Sólo en el caso de lesiones graves, la determinación del delito no depende exclusivamente de ello.

De acuerdo al artículo 121, para que se consideren las lesiones como graves debe tomarse en cuenta tres situaciones. La primera si estas “ponen en peligro inminente la vida de la víctima”, también si “mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente”.

Finalmente, las lesiones “que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona que requiera 30 o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa”. En este último criterio radica la diferencia con las lesiones leves, pues según el artículo 122, así se consideran cuando requieran más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso, o “nivel moderado de daño psíquico”.

Empero, en caso de que determine que la atención o el período de descanso no excede de 10 días, pasará a ser una falta. Por consiguiente, en este caso no se impondrá una pena de privación de libertad, sino que se requerirá al infractor a realizar un servicio comunitario.

CRITERIOS JURIDICOS CUANTITATIVOS (CRONOLÓGICOS) PARA LA TIPIFICACIÓN DE LAS LESIONES CORPORALES

Tipo Penal	Lesiones		Descanso Médico Legal
Faltas	Lesiones Culposas		Hasta 15 días
	Lesiones Dolosas		Hasta 10 días
Delitos	Culposo	Lesión Leve	Más de 15 y menos de 30
		Lesión Grave	30 o más días
	Doloso	Lesión Leve	Más de 10 y menos de 30 (11 a 29) días
		Lesión Grave	30 o más días

Captura Guía médico legal de valoración integral de lesiones corporales de la Fiscalía de la Nación.

¿Cómo evitar el error? Precisamente, en la determinación de los días de descanso médico para calificar si se trata de lesión leve o grave es donde surge la controversia. Cabe precisar que el médico legal actúa a pedido del fiscal, quien en base al peritaje determina el tipo penal que corresponde.

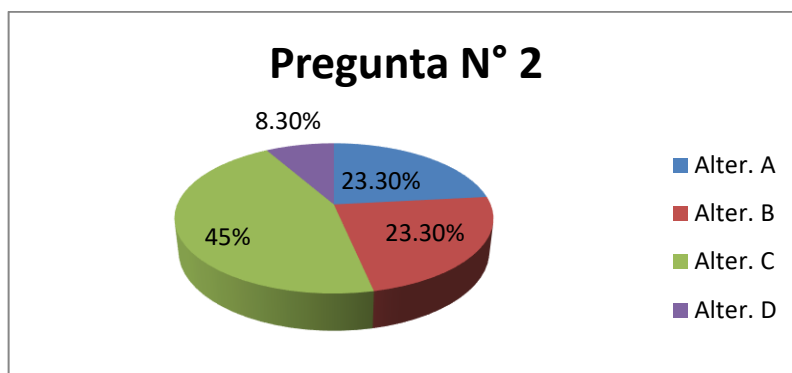
Es importante señalar que posterior a la aplicación de la encuesta se incorporó el artículo 122-B que establece que cualquier lesión física menor a diez días de incapacidad médico legal dentro de un contexto de violencia legal, configura delito, sin embargo es importante rescatar que muchas de las agresiones reportadas y las más frecuentes como jalones de cabellos, cachetadas, palmazos en las nalgas, que reciben las mujeres como castigo, consecuencia del machismo imperante en las relaciones de convivencia familiar,

no dejan huella de lesión física, o su permanencia en el tiempo es tan corta que al momento de la evaluación médico legal, no se encuentra huella, estos casos son remitidos a los juzgados de paz, donde tampoco encuentran la atención debida, debido al desconocimiento de las competencias conferidas por la ley 30264.

SEGUNDO HALLAZGO: EXISTE CONOCIMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA EN ZONAS RURALES, PARA CONOCER DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR.

2.- Sabe usted quien tramita los procesos penales de Violencia Familiar, en zonas rurales o donde no hayan órganos jurisdiccionales?

- a. La Policía Nacional (28)
- b. Las fiscalías más cercanas (28)
- c. Los juzgados de Paz (54)
- d. Las DEMUNAS (10)



RESULTADO

Frente a la segunda pregunta formulada a nuestra población, se determinó que un 45% de la población, tiene pleno conocimiento que en zonas rurales donde no hay órganos jurisdiccionales, es el JUEZ DE PAZ, quien tiene competencia para conocer las denuncias por violencia familiar. En número reducido de la población encuestada, un 28%, atribuyen dicha competencia a la Policía Nacional y a las Fiscalías más cercanas de las zonas rurales, como entes encargados de conocer las denuncias por violencia familiar. Finalmente, un número muy reducido, el 8.3% de la población encuestada,

indica a las DEMUNAS, como órganos facultados para intervenir en denuncias por violencia familiar.

ANÁLISIS

De acuerdo con las experiencias del Programa Nacional contra la violencia familiar, “teóricamente la ruta de atención de la víctima debería iniciarse en el Juez de Paz; sin embargo en la práctica las víctimas acuden a diferentes instancias según el grado de confianza, entre las que se encuentran”: Gobernadores, Comisarías Nacional y Tenientes Gobernadores Presidentes de Comunidad Núcleos de Administración de Justicia Rural – NURAJ, Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente- DEMUNAS (capitales de distrito). Considerando que la Justicia de Paz se vuelve estratégica por ser el primer eslabón de la Justicia formal, ha sido y es la más cercana a la población, toda propuesta de intervención en el medio rural, debería contemplar el fortalecimiento de esta instancia para constituirse en el núcleo central de la ruta de atención de casos de Violencia familiar, articulándolos a las autoridades con presencia en la zona y a las instancias impulsadas desde las instituciones públicas y/o privadas como las Defensorías Comunitarias, cuyo papel es aceptado y legitimado por la propia Comunidad:



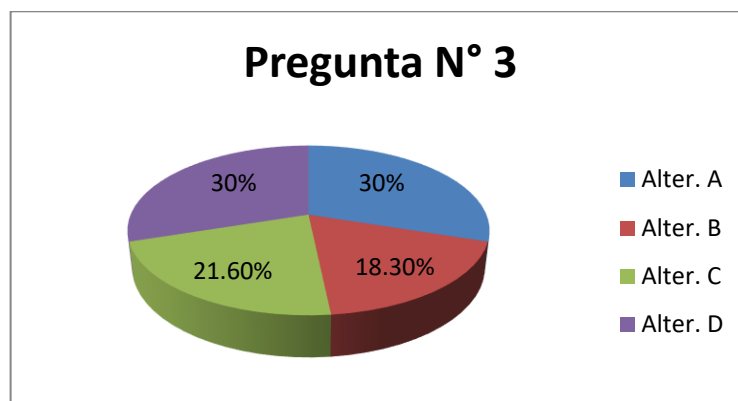
Gráfico tomado del documento de sistematización del PILVFS I, 2009

Como observamos en el gráfico, las relaciones de los Jueces de Paz con otras autoridades son diversas y complejas, por lo que requieren de una adecuada capacitación para el desempeño de su labor. La capacitación orientada a los Jueces de Paz también debe incorporar a otras autoridades y líderes comunales que forman parte de la ruta que siguen las personas que habitan en las zonas rurales en su afán de obtener justicia, aspecto comprobado en la experiencia del Proyecto. La presencia de Gobernadores y otras autoridades locales y comunales en los talleres de capacitación a Jueces de Paz, permite evitar la duplicidad de funciones y el que éstas se irroguen competencias propias de los Jueces de Paz, la mayor parte de las veces por falta de capacitación. En tal sentido se asume que un entorno más capacitado acerca de las funciones de los Jueces de Paz, haría que éstos cumplieran mejor su labor. Además el propósito está en procurar la articulación según sus verdaderas atribuciones. La participación activa de la Corte Superior de Justicia en eventos de esta naturaleza es muy importante, para lograr el reconocimiento que la Justicia de Paz necesita.

TERCER HALLAZGO: LOS JUECES DE PAZ, NO DEBEN CONOCER PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR.

3.- El artículo 64 del reglamento de la Ley N° 30364, faculta a los Juez de Paz de Nominación a conocer los procesos de violencia familiar, como FALTAS, cree que es adecuado que un órgano no colegiado lo conozca?

- a. NO, porque no tiene los medios suficientes y no están instruidos para seguir un proceso de oficio. (36)
- b. NO, porque el juez de paz promueve conciliaciones y acuerdos. (22)
- c. Todas las anteriores (26)
- d. SI, porque no existe otra autoridad judicial que se haga cargo de la denuncia. (36)



RESULTADO

Existe una gran parte de la población encuestada, que no considera que los JUECES DE PAZ, deban tener competencia para conocer procesos de violencia familiar, un 69% no acepta la competencia otorgada a los Jueces de Paz, un 30% de la población ha coincidido en indicar que los Jueces de Paz no tiene los medios suficientes y no están instruidos para seguir un proceso de oficio, sea como otorgamiento de medidas de protección, como faltas o como procesos penal en vía ordinaria; otro 30% de la población considera que los jueces de paz no deben tener competencia, porque promueven las conciliaciones y acuerdos reparatorios. Finalmente, un número muy reducido de 36 personas, que representa un 30% de la población, han indicado que en zonas rurales, donde no existe ningún órgano jurisdiccional, si deben tener competencia los jueces de paz para conocer procesos de violencia familiar.

ANALISIS

La crisis del sistema ordinario de administración de justicia en el Perú ha derivado en la ruptura del monopolio estatal y en la búsqueda de vías alternativas para procurar justicia en favor de los sectores segregados por el sistema estatal tradicional. Los graves problemas de "acceso" y "permanencia" dentro del sistema judicial parecen encontrar por primera vez una hipótesis de base capaz de contribuir decisivamente en el objetivo de ampliar el campo de atención de las demandas sociales de administración de justicia. Esta hipótesis, parte de reconocer que la reforma del Poder Judicial o de la justicia ordinaria tiene como condición necesaria otorgar reconocimiento y promover vías alternativas al aparato estatal para la resolución de conflictos. De esa manera se acepta explícitamente el quiebre del monopolio estatal en este terreno y se abren las posibilidades para un marco

de regulación de conflictos que atienda a criterios de eficacia antes que a formalismos que no guardan correlato con las exigencias de la realidad

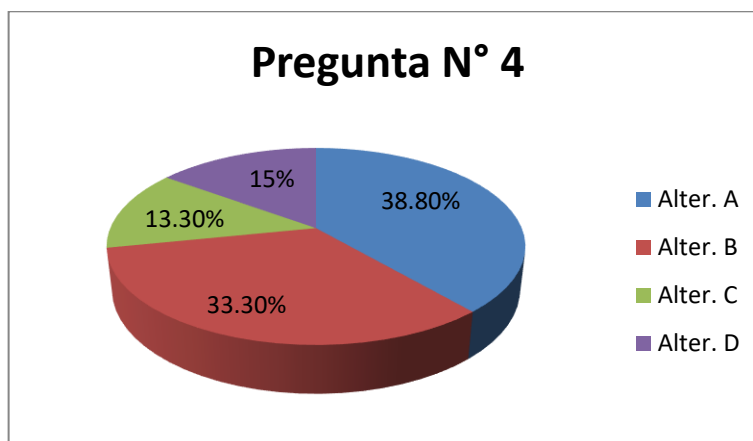
El funcionamiento del sistema de administración de justicia presenta serios problemas relacionados principalmente con la corrupción de algunos de sus operadores, quienes hacen prevalecer criterios políticos y de amistad generando lentitud y retardo en los procesos judiciales, lo cual hace inoperante e ineficiente el funcionamiento del aparato judicial, principalmente en áreas rurales.

Se suma a este aspecto la actitud del sistema de justicia que proyecta una imagen fría, ajena a la problemática de las personas y presta a servir a los que detentan poder económico y social, una manifestación clara de estos hechos se evidencia en los datos obtenidos por la Defensoría del Pueblo, en cuanto a número de casos identificados en las defensorías comunitarias, donde se conoce que de 26 casos que pasaron a las dependencias policiales para su denuncia, solo la mitad pasó con atestado a la fiscalía o juzgado de Paz y solamente un caso ha sido resuelto brindando las medidas de protección a favor de las víctimas, consecuentemente el 99% han quedado en condición de impunidad, lo cual fortalece al agresor y crea la concepción en los agredidos, que recurrir a estas instancias no tiene ningún efecto positivo, propiciando una cultura de pasividad frente a estos hechos y de mensaje en la comunidad que es mejor no hacer nada, porque no hay justicia.

CUARTO HALLAZGO: FALTA DE ACEPTACION DE LA LEY N° 30364.

4.- Estas de acuerdo con la nueva Ley N° 3036?

- a. NO, porque no es eficaz sancionando al agresor (46)
- b. NO, porque genera mayor carga procesal (40)
- c. NO, porque debió considerar exclusivamente a los juzgados de familia para su proceso (16)
- d. SI, porque era necesario incorporar el delito en las agresiones domésticas (18)



RESULTADO

Existe gran disconformidad frente a la implementación de la Ley N° 30364, por diversos motivos, un 38.8% de la población ha indicado que la Ley N° 30364, no es eficaz debido a que no sanciona en forma efectiva a los agresores por violencia familiar; un 33.3% de la población, ha precisado que la implementación de la Ley N° 30364, ha traído consigo un efecto negativo en la sobre carga procesal a nivel de Juzgados y Fiscalías, obstruyendo la celeridad procesal. Y en un menor número, un 16% ha indicado que se debió considerar competencia exclusiva a los juzgados de familia para conocer casos de violencia familiar.

ANALISIS

La nueva Ley contra la Violencia Familiar (Ley N° 30364) no tiene resultados positivos, al no cumplir con el objetivo para la que fue creada: combatir la violencia doméstica, primordialmente, la psicológica. Cuando se denuncia un caso de violencia psicológica, el juez debe resolverla en 72 horas. Sin embargo, conseguir una pericia psicológica requiere de un mes como mínimo. Esto por el gran número de denuncias y el poco personal para esta tarea, así como la falta de protocolos para determinar la afectación psicológica en la medida que tampoco deben penalizarse cualquier conflicto familiar. En ese sentido si bien, el estado ha creado varios centros de emergencia mujer, estos aplican las evaluaciones psicológicas sin seguir las guías establecidas, lo cual conllevan a ser objetados a nivel de juicio oral.

En ese sentido, considero necesario que si bien es correcto que se establezcan plazos breves para que el juez resuelva las medidas de protección, estas deben ser expedidas con el correspondiente acervo probatorio en el expediente, autorizándose, por ejemplo, a que

el juez o el auxiliar jurisdiccional se puedan apersonar al lugar de los sucesos para comprobar los hechos narrados por el denunciado. Del mismo modo, considero imperiosa la aplicación de un mecanismo impugnatorio contra las medidas de protección emitidas por el juez, ya sea uno similar a la oposición que el Código Procesal Civil regula para las medidas cautelares, o que se establezca expresamente que dichas medidas puedan ser impugnadas a efectos de que estas, en cuanto a su contenido, puedan ser revisadas por el superior jerárquico para que de esta manera no se tenga que esperar la emisión de la sentencia por parte del juez penal.

CAPITULO VI
PROPUESTA TEORICA:
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES FISCALES Y POLICIALES EN
ZONAS RURALES PARA CONOCER DENUNCIAS POR VIOLENCIA
FAMILIAR.

1.- EXCLUSION DE LOS JUECES DE PAZ PARA CONOCER DENUNCIAS POR VIOLENCIA DOMESTICA

Aunque forma parte del sistema judicial, un Juez de Paz no requiere de conocimientos jurídicos específicos para desempeñar su función. Su labor no consiste en la interpretación y aplicación de las leyes vigentes, sino más bien en la orientación por los criterios de justicia aceptados en su comunidad.

Asimismo, proveen una justicia rápida, económica y comprensible a millones de peruanos. No obstante, existen riesgos que deben ser tomados en cuenta, como la posibilidad de que las normas aplicables entren en conflicto con el sentido de justicia o la Constitución. En algunos casos, una comunidad puede seguir una costumbre que obliga a las mujeres a casarse en contra de su voluntad, violando su derecho constitucional al libre desarrollo personal y siendo injusta en sí misma. Es fundamental distinguir entre acciones justas e injustas, dado que algunas costumbres comunitarias pueden estar en oposición a lo que se considera justo y aceptable de manera universal.

En vista de la tremenda responsabilidad que recae sobre los Jueces de Paz es legítimo preguntarse si el Estado, a través de sus instituciones Judiciales y Fiscales debería mostrar mayor presencia. La idea no es reemplazar las estructuras comunitarias que existen y funcionan, pero sí complementarlas con asistencia especializada que fusionen para las zonas rurales, por así decirlo; el nivel informal del Juez de Paz con los criterios elementales de justicia ya establecidos en el nivel formal.

1.1.- FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE FISCALIAS PARA ZONAS RURALES.-

Estamos frente a un problema social álgido, habiéndose incorporado la violencia familiar y la violencia de género como agravante en nuestro Código Penal, en tal sentido, las implementaciones de la Ley N° 30364 y el Decreto Legislativo N° 009-2016-MIMP, traen consigo la asignación de un presupuesto especial, asignado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para hacer ejecutar las disposiciones establecidas en la Ley N° 30364; sin embargo, este Ministerio, realiza acciones educativas y preventivas; pero no sancionadoras; siendo necesario que la asignación especial de presupuesto para el tema de violencia familiar sea redistribuido entre todos los órganos policiales, fiscales y judiciales involucrados.

Para el fortalecimiento e implementación de FISCALÍAS MIXTAS PARA ZONAS RURALES, es necesario que el Ministerio Público, como organismo constitucional autónomo, y teniendo como función contribuir con la reducción de los índices de violencia contra la mujer, contra la familia, deberá proyectar la implementación de Órganos Fiscales especializados para las ZONAS RURALES; siendo necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a. Participación en el presupuesto económico del gobierno central asignado para la lucha contra la violencia familia, violencia de género y violencia contra la mujer; ya que en el presente año se asignó S/.237,2 millones de soles al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2017) del presupuesto estatal, para ejecutar la Ley N° 30364, dedicadas a actividades educativas, preventivas y reeducación psicológica; sin embargo, no existe participación de ese presupuesto para los órganos judiciales, policiales y fiscales en zonas rurales.
- b. Implementación de a FISCALÍAS MIXTAS PARA ZONAS RURALES. Siguiendo con la línea de especialización de los órganos fiscales como corrupción, lavado de activos, entre otros; es necesario que se atienda la criminalidad en todas sus formas que ocurre en zonas rurales, en zonas donde el ESTADO tiene una escasa presencia, habiendo delegado, en forma

negligente que la justicia sea administrada por vecinos de la misma comunidad. Estas Fiscalías deberán contar con una especialización de los conflictos incidentes en las zonas rurales, según la región; estudio del derecho consuetudinario según las comunidades; conocimiento de las implicancias y facultades de la justicia comunal, conocimiento del idioma nativo si es que se requiere. Todos los operadores de estas fiscalías (fiscales, asistentes y administrativos), deben tener la preparación previa y necesaria para desarrollar sus funciones en estas zonas rurales.

- c. La jurisdicción de cada Fiscalía Mixta para zonas rurales, debe establecerse bajo criterios de extensión territorial y número poblacional, sugiriendo se tome como referencia los parámetros poblacionales regulado por el Reglamento de la Ley N° 27795 – Ley de Demarcación Territorial; a fin de que las denuncias e investigaciones sean accesibles no sólo para los fiscales, sino también para la población. Esta sugerencia se hace, teniendo como base las dificultades que existen actualmente para las FISCALÍAS MIXTAS, que abarcan más de cinco distritos con una extensión territorial inmensa, obstaculizando el desarrollo de las investigaciones y actuaciones de investigación.
- d. Una de las competencias especiales de las FISCALÍAS MIXTAS PARA ZONAS RURALES, debe ser la FACULTAD DE OTORGAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ante una denuncia que se formula en instancia policial o fiscal, valorando si existen circunstancias que pongan en riesgo a la víctima o algún otro miembro de la familia, con especial atención si se tratara de menores de edad. Dicha sugerencia, parte de los resultados obtenidos en el trabajo de campo; en el cual se demuestra que los Jueces de Paz de zonas rurales, no otorgan medidas de protección, o reciben las carpetas y no otorgan el trámite según el reglamento, o en el peor de los casos promueven acuerdos entre las partes. Es necesario que las medidas cautelares y las medidas de protección, previo a su otorgamiento, se analice y valore las circunstancias en que ocurre la violencia doméstica, que integrantes de la familia intervienen y si existen

agravantes que pongan en riesgo la situación de la víctima o de otras personas del entorno familiar, priorizando la presencia de menores de edad. Se advierte la necesidad que los antecedentes, sean evaluados correctamente para que la medida de protección realmente cumpla su finalidad; y esta actuación previa deberá ser por el órgano judicial o fiscal competente, ya que sus operadores estarán capacitados para tal fin.

Esta propuesta se realiza, partiendo de los resultados que se han obtenido en las visitas y entrevistas con los Jueces de Paz de Cayaltí, en las cuales se ha encontrado que no se cumple las funciones que se les ha otorgado en el CAPÍTULO VI del reglamento de la Ley N° 30364, aprobado por Decreto Legislativo N° 009-2016-MIMP; y ante esa grave deficiencia, es que las víctimas que denuncian por violencia familiar, en estas zonas rurales, esperan a llegar a un órgano jurisdiccional en la zona urbana más cercana para recibir una medida de protección, mediando un plazo de 5 a 6 meses.

- e. Esta facultad debe considerarse en una modificatoria del Reglamento (Decreto Legislativo N° 009-2016-MIMP), ya que el legislador omitió considerar a las zonas rurales, como zonas vulnerables por la falta de presencia del Estado; por lo que en la propuesta siguiente se desarrollará dicha modificatoria.

1.2.- MODIFICATORIA DEL CAPITULO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 009-2016-MIMP.

Siguiendo la línea de la investigación, y habiéndose demostrado que nuestro Estado ha incorporado, dentro de su política criminal, enfrentar a la violencia doméstica, reconocida como un problema social grave; es necesario que la competencia de estas denuncias sean de exclusiva competencia de los operadores del derecho, a través de sus diversos órganos judiciales y fiscales; aun cuando hablemos de zonas rurales donde la presencia del Estado es mínima; es necesario otorgar la misma importancia y presupuesto para lograr afectividad en la intención del

legislador, con la dación de la Ley N° 30364 y el decreto legislativo N° 009-2016-MIMP.

Actualmente, la omisión anotada en la Ley N° 30364, se ha comprendido en el Reglamento aprobado por Decreto Legislativo N° 009-2016-MIMP, desarrollándose en el Capítulo VI:

CAPÍTULO VI: JUSTICIA EN LAS ZONAS RURALES

Artículo 64.- Alcance y ámbito

El Estado, dentro del marco de la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, establece en las zonas rurales del país, las medidas necesarias que implementen acciones de prevención, protección, atención, sanción y recuperación.

Artículo 65.- Intervención supletoria del Juzgado de Paz

65.1 En las localidades donde no exista Juzgado de Familia o Juzgado de Paz Letrado con competencia delegada, los actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar son de competencia del Juzgado de Paz.

65.2 Cuando los actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar constituyen a su juicio delitos, el Juzgado de Paz dicta la medida o medidas de protección que correspondan a favor de la víctima con conocimiento del Juzgado de Familia y remite lo actuado a la Fiscalía Penal o Mixta para que proceda conforme a sus atribuciones.

65.3 Cuando los hechos constituyen faltas contra la persona, el Juzgado de Paz dicta la medida o medidas de protección a favor de la víctima, así como lleva a cabo el proceso previsto en su ley de la materia. En la determinación de la sanción tendrá en cuenta la Ley N° 30364, en todo lo que le sea aplicable.

Artículo 66.- Medidas de protección

Cuando el Juzgado de Paz toma conocimiento de actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar que constituyen a su juicio delitos, dicta la medida o medidas de protección que correspondan a favor de la víctima con conocimiento del Juzgado de Familia y remite lo actuado a la Fiscalía Penal o Mixta para que proceda conforme a sus atribuciones.

Artículo 67.- Denuncia ante el Juzgado de Paz

67.1 La denuncia ante el Juzgado de Paz se presenta por escrito o de manera verbal.

67.2 Cuando la Policía Nacional del Perú conoce de casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías en los lugares donde no exista Juzgado de Familia o Juzgado de Paz Letrado con competencia delegada, pone los hechos en conocimiento del Juzgado de Paz dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas de acaecidos los mismos y remite el informe policial que resume lo actuado así como la ficha de valoración del riesgo correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley.

Artículo 68.- Intervención supletoria en la ejecución de las medidas de protección y sanciones

En las localidades donde no exista Comisaría de la Policía Nacional del Perú, los Juzgados de Paz coordinan la ejecución de las medidas de protección así como las sanciones impuestas de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 29824, coordinando con las autoridades comunales y otras que correspondan en el marco de lo establecido en la Ley N° 30364 y la ley de su materia.

Artículo 69.- Intervención de las autoridades de la jurisdicción especial

En los lugares donde coexistan Juzgado de Familia, o los que hagan sus veces, o Juzgados de Paz con autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas campesinas investidas de funciones jurisdiccionales, se establecen medios y formas de coordinación funcional y operativa, para la investigación y sanción de la violencia contra la mujeres e integrantes del grupo familiar, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

Sin embargo, las competencias que en este reglamento se le han otorgado a los Jueces de Paz, para que conozcan casos de violencia familiar, ha sido una opción fácil para el legislador, haber delegado la solución de estos conflictos a los Jueces de Paz, quienes no gozan de un presupuesto, de personal, de infraestructura ni de material y equipo logístico; allí, en los lugares donde no llega el Estado, las zonas rurales. Por ello, y teniendo en cuenta que se está reconociendo la importancia de enfrentar a la violencia doméstica, por ser la principal causa de la criminalidad en nuestra sociedad, la investigadora, propone que sea el Ministerio Público, a través de fiscalías especializadas para las zonas rurales, la delegación de competencias especiales frente a las denuncias de VIOLENCIA FAMILIAR, para lo cual es necesario realizar una modificatoria al CAPITULO VI del reglamento de la Ley N°

30364, aprobado por decreto Legislativo N° 009-2016-MIMP, el mismo que quedaría redactado de la siguiente manera:

CAPÍTULO VI: JUSTICIA EN LAS ZONAS RURALES

Artículo 64.- Alcance y ámbito

El Estado, dentro del marco de la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, establece en las zonas rurales del país, las medidas necesarias que implementen acciones de prevención, protección, atención, sanción y recuperación.

Artículo 65.- Denuncia.

65.1 La denuncia se presenta por escrito o de manera verbal, por la víctima o por cualquier persona que conozca el hecho. Se puede presentar ante la Policía Nacional, la FISCALIA MIXTA DE ZONA RURAL o ante el Juez de Paz del lugar.

65.2 Cuando la Comisaría de la Policía Nacional del lugar, conoce la denuncia por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, aplica la ficha de valoración del riesgo correspondiente, y remite a la FISCALIA MIXTA DE ZONA RURAL el informe policial, de acuerdo al artículo 24 del presente reglamento.

65.3 Cuando la FISCALIA MIXTA DE ZONA RURAL del lugar, conoce la denuncia por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, aplica la ficha de valoración del riesgo correspondiente, recibe la declaración de la víctima o denunciante y procede conforme al artículo 66 del presente reglamento.

65.4 Cuando el Juez de Paz del lugar, conoce la denuncia por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; levantará el acta respectiva, precisando el resumen de los hechos denunciados por la víctima o denunciante, observando su contenido conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del presente reglamento; y, en el plazo de 72 horas remitirá el acta a la

FISCALIA MIXTA DE ZONA RURAL correspondiente. La remisión se podrá hacer en forma personal, por correo, por fax o por cualquier medio de comunicación electrónico o virtual disponible.

Artículo 66.- Medidas de protección

Cuando la FISCALIA MIXTA DE ZONA RURAL toma conocimiento de actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar que constituyen a su juicio delitos, previo a la valoración de las circunstancias que rodean al hecho denunciado, dicta la medida o medidas de protección que correspondan a favor de la víctima y de los demás miembros de familia afectados, haciendo de conocimiento del Juzgado de Familia del distrito respectivo.

La FISCALIA MIXTA DE ZONA RURAL, solicitará la ejecución de las medidas de protección social a la Comisaría de la Policía Nacional del lugar o al Juez de Paz del lugar. Ambas instituciones remitirán el informe correspondiente en el plazo de cinco días hábiles, bajo responsabilidad, sobre la ejecución de las medidas a la Fiscalía Mixta respectiva.

Artículo 67.- Remisión del expediente.

Ante el conocimiento de hechos de violencia contra los sujetos de protección de la Ley, previstos en el artículo 7, el Ministerio Público actuará conforme a las atribuciones previstas en su Ley Orgánica.

Si de los hechos investigados, se desprende la presunta comisión de un delito, formalizará la denuncia penal ante el Juzgado Penal de la zona. Si los hechos denunciados constituyen faltas, remitirá los actuados al Juzgado de Paz Letrado del distrito para proceder conforme a sus atribuciones.

Artículo 68.- Intervención supletoria en la ejecución de las medidas de protección y sanciones

En las localidades donde no exista Comisaría de la Policía Nacional del Perú, los Juzgados de Paz coordinan la ejecución de las medidas de protección otorgadas por la FISCALIA MIXTA DE ZONA RURAL; así como

las sanciones impuestas por el Juzgado competente; de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 29824, coordinando con las autoridades comunales y otras que correspondan en el marco de lo establecido en la Ley N° 30364 y la ley de su materia.

Artículo 69.- Intervención de las autoridades de la jurisdicción especial

En los lugares donde coexistan Juzgado Especializados, o los que hagan sus veces, o Juzgados de Paz con autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas campesinas investidas de funciones jurisdiccionales, se establecen medios y formas de coordinación funcional y operativa, para la investigación, y ejecución de sanciones por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

Acorde a la Ley N° 26300, llamada Ley de los Derechos de participación y Control ciudadanos, existe facultades de iniciativa legislativa para los ciudadanos. Así cualquier ciudadano u organización pueden elaborar un proyecto de ley y seguir los procedimientos que la misma señala para alcanzar su aprobación. Eso significa que los ciudadanos pueden, proponer para su aprobación ante el Congreso o vía Referéndum, las leyes que fueren necesarias para solucionar muchos problemas, sobre todo aquellos que son de carácter colectivo.

CONCLUSIONES

1. CONCLUSIÓN GENERAL:

- Habiéndose demostrado que nuestro Estado ha incorporado, dentro de su política criminal, enfrentar a la violencia doméstica, reconocida como un problema de interés público; es necesario que el conocimiento de estas denuncias sean de exclusiva competencia de los operadores del derecho, a través de sus diversos órganos judiciales y fiscales; aun cuando hablemos de zonas rurales donde la presencia del Estado es mínima; debido a la competencia otorgada a los Jueces de Paz, para el conocimiento de casos de violencia familiar, ha sido una opción fácil para el legislador, sin tomar en cuenta que los juzgados de Paz no gozan de un presupuesto, de personal, de infraestructura ni de material y equipo logístico; allí, en los lugares donde no llega el Estado, las zonas rurales. Por ello, es necesario excluir la competencia de los Jueces de Paz, quienes no se encuentran preparados profesionalmente para dar trámite a un delito o a una falta; más aún si hemos demostrado que no otorgan las medidas de protección necesarias, y en el peor de los casos, promueven acuerdos entre las partes.

2. CONCLUSIONES ESPECIFICAS:

- Nuestro país, fue uno de los primeros países latinoamericanos que emitió una norma contra la violencia doméstica, el 24 de diciembre de 1993, entró en vigencia la Ley N° 26260, la cual estableció “políticas del estado y de la sociedad frente a la violencia familiar, así como las medidas de protección que corresponden. Posteriormente, el 15 de noviembre del 2015, implementó la Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la cual tiene por finalidad establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de

los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos”.

- El problema de celeridad en los procesos y la pronta tutela de los derechos ha sido una constante doctrinaria no solo en nuestro país, acostumbrado a reformas publicitadas mas no eficaces, con lo cual retumba en los oídos de los justiciables el aforismo que reza “justicia que no es rápida, no es justicia”. La Ley N° 30364, tiene como plataforma de principios la celeridad procesal, cuyos plazos literalmente, son de horas y días; sin embargo, existe imposibilidad de cumplimiento en plazos y celeridad procesal, consecuencia de la tardía resolución de un proceso, problema que no compete exclusivamente a las partes procesales, sino también a la confianza de los ciudadanos y a la seguridad jurídica de nuestro país, al aumentarse la incertidumbre sobre el resultado de la actividad jurisdiccional de un juez, expectativa que queda relegada en el tiempo y cuya solución resulta menos oportuna, cuanto más demora exista en su resolución

- Actualmente, en las “localidades donde no exista Juzgado de Familia o Juzgado de Paz Letrado con competencia delegada, los actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar son de competencia del Juzgado de Paz. Cuando los actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar constituyen a su juicio delitos, el Juzgado de Paz dicta la medida o medidas de protección que correspondan a favor de la víctima con conocimiento del Juzgado de Familia y remite lo actuado a la Fiscalía Penal o Mixta para que proceda conforme a sus atribuciones. Cuando los hechos constituyen faltas contra la persona, el Juzgado de Paz dicta la medida o medidas de protección a favor de la víctima, así como lleva a cabo el proceso previsto en su ley de la materia”. Sin embargo, al recoger los datos reales de los jueces de paz de zonas rurales en nuestra región, podemos demostrar que no cumplen con las competencias dadas, debido a la falta de conocimiento, capacidad de interpretación jurídica; y por no contar con la infraestructura y logística necesaria, para que de oficio administren justicia, al contrario, tal como se ha indicado, en aquellas zonas rurales, donde el estado tiene una escasa presencia, prevalece la costumbre y el derecho consuetudinario para

solucionar conflictos domésticos, en cuyas costumbres prevale el patriarcado y machismo.

- La investigación, nos ha permitido concluir que, es necesario que las FISCALÍAS MIXTAS en zonas rurales, tengan la competencia de recibir las denuncias por violencia familiar; dejando únicamente como receptores de denuncias a los JUECES DE PAZ y a las Comisarías de la Policía Nacional; además, es necesario que se atienda la criminalidad en todas sus formas que ocurre en zonas rurales, en donde el ESTADO tiene una escasa presencia, habiendo delegado, en forma negligente que la justicia sea administrada por vecinos de la misma comunidad. Estas Fiscalías deberán contar con una especialización de los conflictos incidentes en las zonas rurales, según la región; estudio del derecho consuetudinario según las comunidades; conocimiento de las implicancias y facultades de la justicia comunal, conocimiento del idioma nativo si es que se requiere. Todos los operadores de estas fiscalías (fiscales, asistentes y administrativos), deben tener la preparación previa y necesaria para desarrollar sus funciones en estas zonas rurales.

- Concluimos, que urge una necesidad en modificar el decreto Legislativo N° 009-2016-MIMP, en su capítulo VI, excluyendo las facultades de administrar justicia a los Jueces de Paz en zonas rurales, para asuntos de violencia familiar, ya que, sus facultades de aplicación de normas y leyes, están a su libre albedrío, rigiéndose muchas veces por la costumbre y el derecho consuetudinario, por lo que la investigadora, propone, que únicamente los JUECES DE PAZ, sean entes receptores de denuncias y que las deriven a las Fiscalías Mixtas de zonas rurales para su otorgamiento de medidas de protección y calificación del hecho; tal como se ha propuesto en el capítulo VI de la presente investigación.

RECOMENDACIONES

1. El Poder Judicial en coordinación con el Ministerio de la Mujer, se recomienda que elaboren e implementen un Programa Presupuestal para violencia familiar para los Jueces de Paz de Nominación, mientras sigan teniendo competencia para resolver estos conflictos, un programa que les otorgue capacitación, concientización y presupuesto económico.
2. Cubrir las brechas de personal en los diferentes operadores de la ruta de atención en zonas rurales y poner como requisito de contratación la capacitación en temas con enfoque de género y violencia intrafamiliar.
3. Se recomienda al Ministerio del Interior, implementar las Comisarías de Familia con personal especializado y condiciones logísticas para un desempeño óptimo, aumentar recursos para la implementación y ejecución de medidas de protección efectiva, tanto para zonas urbanas como para zonas rurales.
4. Recomendar al Ministerio Público, la implementación de Fiscalías Especializadas en Zonas Rurales, con personal especializado y condiciones logísticas para un desempeño óptimo, aumentar recursos para la implementación y ejecución de medidas de protección efectiva para las víctimas y debiendo lograr incorporar a programas de rehabilitación al agresor.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Alfaro Reyna, L. M. (2011). *Delitos contra la familia y violencia doméstica*. Lima - Perú: Jurista Editores.

Carnelutti, F. (1944). *Sistema de derecho Procesal Civil* (Vol. I). Buenos Aires, Argentina : Uthea .

Chunga Lamonja , F., & Chunga Chávez , C. (2012). *Los derechos del niño, niña y adolescente y su proteccion en los derechos humanos*. Lima - Perú: Librería Jurídica GRIJLEY.

Contreras, J. (2008). La legitimidad social de la violencia contra la mujer en la pareja. Un estudio cualitativo con varones en la ciudad de México. *Castro e I. Casique: Estudios sobre cultura, genero y violencia contra las mujeres.*, 41-80.

Couture , E. (1993). *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires : Depalma .

Dirección General de Mujer y Familia, C. I. (1985). *Comentarios al Código de Familia* . San José, Costa Rica : Instituto de Libro .

Echeburúa, E. (1994). *Personalidades violentas*. Madrid - España : Pirámide.

Escobedo Sánchez , J. (2016). *Revista IDEELE*. Recuperado el 5 de setiembre de 2016, de Instituto de Defensa Legal: <http://revistaideele.com/ideele/content/la-invisibilidad-de-las-mujeres-rurales>

Escudero Nafs, A., Polo Usaola , C., López Gironés, M., & Aguilar Redo, L. (Setiembre de 2005). *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*. Recuperado el 11 de Noviembre de 2016, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352005000300006

INEI, I. (2016). *Instituto Nacional de Estadística e Informática*. Recuperado el 26 de Noviembre de 2016, de indicadores de género: Violencia física contra la mujer ejercida alguna vez por parte del esposo o compañero, según ámbito geográfico: <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/>

Larraín , S. (1994). *La violencia puertas adentro: la mujer golpeada*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

Naval , E. (2016). *Comentarios a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar*. Ponencia, Universidad Femenina del Sagrado Corazón - Facultad de Derecho, Lima, Lima.

Orna Sánchez, O. (2013). *Factores determinantes de la violencia familiar y sus implicancias*. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ospino, M. V.-V. (2012). *Pericias psicológicas y otros medios probatorios en las decisiones en las comisarías de familia de Bogotá: casos de violencia de pareja contra la mujer. : Perspectivas Psicoló*. Bogotá: Diversitas.

Ospino-Rodríguez, M. (2014 de Febrero de 2014). *PSICOLOGIA FORENSE*. Recuperado el 2016 de Diciembre de 23, de Violencia Intrafamiliar: <http://lapsicologiaforense.blogspot.pe/2014/04/violencia-intrafamiliar.html>

ONAJUP. (19 de Agosto de 2014). Recuperado el 14 de Noviembre de 2016, de Oficina Nacional de Juzticia de Paz y Justicia Indígena: <http://www.onajup.gob.pe/juzgados-de-paz-nivel-nacional-2/>

Plá Rodríguez , A. (1978). *Los principios del derecho del Trabajo*. Buenos Aires: Depalma.

Reyes Bello, I. (Octubre de 2008). *Monografías.com*. Recuperado el 27 de Diciembre de 2016, de Método de recolección de datos: <http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-datos/recoleccion-datos.shtml>

Rodríguez Manzanera, L. (2002). *Estudio de la Víctima*. México : Porrúa .

Rosas Ramos, G. (Julio de 2016). *Scientiarvm.org*. Recuperado el 1 de Diciembre de 2016, de la desnaturalizacion del derecho penal a raiz de la Ley N° 30364 : http://www.scientiarvm.org/cache/archivos/PDF_962358417.pdf

Universidad de Cantario . (2014). Recuperado el 2016 de Diciembre de 2016, de <http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiales/bloque->

tematico-iv/tema-14.-la-adherencia-al-tratamiento-1/14.4.2-teoria-de-la-accion-
razonada-ajzen-y

Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar

Código del Niño y Adolescentes – Jurista Editores. 2016


Código Penal - Jurista Editores. 2016

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA, Asesor de la tesista: GLORIA EDITH CAVERO RAMÍREZ, luego de la revisión exhaustiva de su Tesis titulada **"INEFICIENTE PARTICIPACIÓN DE LOS JUECES DE PAZ EN LOS PROCESOS PENALES POR VIOLACIÓN DOMÉSTICA"**, constató que la misma tiene un índice de similitud de **17 %** verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrita analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender, la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 08 de.setiembre del 2023.


Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA
D.N.I 17939636
ASESOR

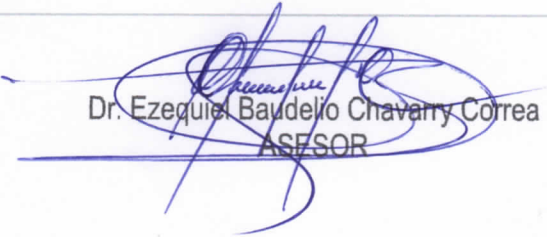
Ineficiente participación de los Jueces de Paz en los procesos penales por violencia doméstica.

INFORME DE ORIGINALIDAD

17%	17%	2%	4%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	7%
2	cybertesis.unmsm.edu.pe Fuente de Internet	3%
3	centroderecursos.cultura.pe Fuente de Internet	2%
4	spijweb.minjus.gob.pe Fuente de Internet	1%
5	vsip.info Fuente de Internet	<1%
6	pe.ijeditores.com Fuente de Internet	<1%
7	Submitted to Universidad Andina del Cusco Trabajo del estudiante	<1%
8	www2.congreso.gob.pe Fuente de Internet	<1%
9	doku.pub Fuente de Internet	


Dr. Ezequiel Baudelio Chavarría Correa
ASESOR

<1 %

10

scc.pj.gob.pe

Fuente de Internet

<1 %

11

www.defensoria.gob.pe

Fuente de Internet

<1 %

12

www.pj.gob.pe

Fuente de Internet

<1 %

13

Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Trabajo del estudiante

<1 %

14

www.scribd.com

Fuente de Internet

<1 %

15

repositorio.unsch.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

16

dspace.unitru.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

17

docplayer.es

Fuente de Internet

<1 %

18

repositorio.uarm.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

19

pt.scribd.com

Fuente de Internet

<1 %

20

repositorio.upagu.edu.pe

Fuente de Internet

Dr. Ezequiel Baudelio Chavarri Correa
ASESOR

<1 %

21 bibliotecas.unsa.edu.pe <1 %

Fuente de Internet

22 repositorio.unsa.edu.pe <1 %

Fuente de Internet

23 repositorio.up.edu.pe <1 %

Fuente de Internet

24 repositorio.upt.edu.pe <1 %

Fuente de Internet

25 revistas.juridicas.unam.mx <1 %

Fuente de Internet

26 repositorio.ucv.edu.pe <1 %

Fuente de Internet

27 core.ac.uk <1 %

Fuente de Internet

28 Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru <1 %

Trabajo del estudiante

29 issuu.com <1 %

Fuente de Internet

30 pprfamilia.pj.gob.pe <1 %

Fuente de Internet

31 qdoc.tips

Fuente de Internet


Dr. Ezequiel Baudelio Chavarry Correa
ASESOR




Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Gloria Edith Caveró Ramirez
Título del ejercicio: TESIS
Título de la entrega: Ineficiente participación de los Jueces de Paz en los proceso...
Nombre del archivo: GLORIA_-TESIS_FINAL_POST_UNPRG_2.docx
Tamaño del archivo: 1.27M
Total páginas: 151
Total de palabras: 40,054
Total de caracteres: 209,479
Fecha de entrega: 08-sept.-2023 12:50p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 2160912520

 UNIVERSIDAD NACIONAL
"PEDRO RUIZ GALLO"
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

"Ineficiente participación de los Jueces de Paz en los procesos penales por violencia doméstica"

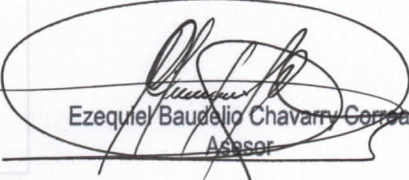
TESIS

Presentada para optar el Grado Académico de
Maestra en Derecho con mención en Ciencias Penales

AUTORA:
Abog. Caveró Ramirez, Gloria Edith

ASESOR:
Dr. Chávarry Correa, Ezequiel Baudelio

LAMBAYEQUE - PERÚ
2020


Ezequiel Baudelio Chavarry Correa
ASESOR